

SERIE 
Magister
VOLUMEN 28

*Anatomía de los
golpes de Estado
la prensa en la caída
de Mahuad y Bucaram*

*Gabriela Córdova
Del Alcázar*



UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR
Ecuador



ABYA
YALA



CORPORACIÓN
EDITORIA NACIONAL

Anatomía de los golpes de Estado
la prensa en la caída de Mahuad y Bucaram

SERIE 
Magíster
VOLUMEN 28



UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR

Toledo N22-80 • Teléfonos: (593-2) 255 6405, 250 8150 • Fax: (593-2) 250 8156
Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador
E-mail: uasb@uasb.edu.ec • <http://www.uasb.edu.ec>

EDICIONES ABYA-YALA

Av. 12 de Octubre 1430 y Wilson • Teléfonos: (593-2) 256 2633, 250 6247
Fax: (593-2) 250 6255 • Apartado postal: 17-12-719 • Quito, Ecuador
E-mail: editorial@abyayala.org

CORPORACIÓN EDITORA NACIONAL

Roca E9-59 y Tamayo • Teléfonos: (593-2) 255 4358, 255 4558
Fax: (593-2) 256 6340 • Apartado postal: 17-12-886 • Quito, Ecuador
E-mail: cen@accessinter.net

Gabriela Córdova

Anatomía de los golpes de Estado
la prensa en la caída de Mahuad y Bucaram



UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR
Ecuador



Quito, 2003

Anatomía de los golpes de Estado
la prensa en la caída de Mahuad y Bucaram

Gabriela Córdova

SERIE 
Magíster
VOLUMEN 28

Primera edición:

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Ediciones Abya-Yala
Corporación Editora Nacional
Quito, junio 2003

Coordinación editorial:

Quinche Ortiz Crespo

Diseño gráfico y armado:

Jorge Ortega Jiménez

Cubierta:

Raúl Yépez

Impresión:

Impresiones Digitales Abya-Yala,
Isabel La Católica 381, Quito

ISBN: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

9978-19-001-5 (serie)

9978-19-055-4 (número 28)

ISBN: Ediciones Abya-Yala

9978-04-700-X (serie)

9978-22-417-3 (número 28)

ISBN: Corporación Editora Nacional

9978-84-250-0 (serie)

9978-84-317-5 (número 28)

Derechos de autor:

Inscripción: 018023

Depósito legal: 002394

Título original: *Retórica periodística para un golpe de Estado:*
del derrocamiento de Jamil Mahuad al de Abdalá Bucaram
Tesis para la obtención del título de Magíster en Estudios Latinoamericanos,
mención en Comunicación

Programa de Maestría en Estudios Latinoamericanos, 2001

Autora: *Gabriela Córdova del Alcázar*

Tutor: *César Montúfar*

Código bibliográfico del Centro de Información: T-0128

Contenido

Introducción

Pautas mediáticas y usos sociales / 7

La huella del poder / 8

Cuando la competencia homogeneiza / 10

En defensa del establecimiento / 12

Capítulo I

Legitimidad de un presidente / 15

De cómo diferenciar a un presidente legítimo de un intruso en la Presidencia / 15

El discurso del orden y sus escenarios / 19

La «paz»: ¿abyecta traición o jubiloso consenso? / 22

La política económica también precisa de buenas maneras / 25

Una moral vaciada de política / 29

Cuando el mandatario pierde representación / 33

Capítulo II

Pasiones que movilizan y temores que ordenan / 37

La felonía del ungido / 37

Solo se traiciona a los propios / 40

Prensa partidaria y movilizadora / 44

Cambiar un presidente, recrear el poder / 47

De pueblo ordenado a populacho vandálico / 49

La irrupción del marginal corporizó el miedo / 52

Clima movilizador, pero con límite / 55

*Capítulo III***Los media arman el escenario y legitiman el golpe / 59**

De hecho político a suceso mediático / 59

Reducción del movimiento popular a espectáculo / 62

El espectador legitima el derrocamiento / 67

La batalla de los ejércitos virtuales / 69

Consensos mediáticos para la sucesión presidencial / 71

Los fantasmas del establecimiento / 76

*Capítulo IV***Y los vencedores escribieron la historia / 81**

La información revelada reconstruye el acontecimiento / 81

Lo que debe recordarse (u olvidarse) de un golpe de Estado / 84

Sabor popular de una «caída» presidencial / 87

De tu aliado solo verás lo que te diferencia / 91

Defensores de la Constitución ¿o guardianes del *statu quo*? / 96*Conclusiones***De informadores mediáticos a partidos del orden / 101**

Tras victoriosas certezas... / 101

Remozada funcionalidad para antiguos intereses / 102

De la mediación a la agencia política / 104

Mas allá de la mediación institucionalizada / 106

Bibliografía / 109

Universidad Andina Simón Bolívar / 111

Títulos de la Serie Magíster / 113

INTRODUCCIÓN

Pautas mediáticas y usos sociales

«¿Loco, César? –dije, soltando una carcajada nerviosa– ¿Me preguntas si yo creo que estás loco? ¡Pero si tú sientas las normas de cordura para todo el mundo habitado!».

Robert Graves, *Yo Claudio*

Vivimos una cotidianidad con ascendencia creciente de los *mass media*.¹ En una sociedad de la información, lo que difunden prensa, radio y televisión determina la diferencia entre lo conocido y lo ignorado, pero también entre lo socialmente aceptado y lo impugnado.

El ocaso de la modernidad no goza de un Calígula deificado como fuente legítima de toda norma aplicada en el imperio. El referente de la normatividad contemporánea ha sido opacado por el encandilamiento de la difusión mediática.

Solo situaciones límite llegan a develar la puesta en escena gestada por el lente periodístico y, momentáneamente, tornan visible el origen de la normatividad establecida.

A esa categoría de hechos extraordinarios pertenece la movilización que catalizó el derrocamiento de Jamil Mahuad. El viernes 21 de enero de 2000, Ecuador vivió un momento de ruptura histórica. Por primera vez en su trayectoria republicana, una rebelión popular, encabezada por una organización indígena y apoyada por oficiales de las Fuerzas Armadas, reclamó para sí la conducción del Estado.

La utopía de un poder distinto duró apenas unas horas; el rápido desenlace reencauzó al país en la senda conocida. No obstante, la experiencia amenazó a la élite gobernante y el temor a una posible reedición del movimien-

1. El anglicismo *mass media* abarca prensa, radio, televisión, cine. Media es una forma abreviada para referirse a los «medios de comunicación de masas». Ver Ignacio Ramonet, *La tiranía de la comunicación*, Madrid, Edición Debate, 1998, p. 9.

to popular se evidenció en la advertencia del recién posesionado presidente Gustavo Noboa: «No olviden el viernes negro».²

La frase no era nueva. También «Viernes negro» tituló el ex vicepresidente Blasco Peñaherrera al libro en el cual divulgó su memoria del 16 de enero de 1987, fecha en que el entonces presidente León Febres Cordero fue secuestrado por militares de la base aérea de Taura.

Aunque de eneros distantes, esos dos «viernes negros» han compartido epítetos como: comedia bufa, pesadilla monstruosa, jornada trágica, golpismo, atentado contra la democracia. En contraste, la movilización realizada el 5 febrero de 1997, que anunció el fin del gobierno de Abdalá Bucaram tras solo seis meses de gestión, fue descrita como revolución de las conciencias, amanecer de la dignidad, carnaval multicolor, campanada democrática, plebiscito espontáneo del pueblo...

¿A qué obedece la distinta manera con que los *mass media* socializaron ambos acontecimientos? ¿Por qué una movilización popular fue aclamada en 1997 y otra semejante es estigmatizada en 2000? ¿Por qué los media reaccionaron con formas opuestas ante los mandatos de Mahuad y Bucaram?

Con pupilas modificadas por la derrota de los insubordinados que exigen la salida de Jamil Mahuad y el triunfo de la estratagema política que llevó a la Presidencia a Gustavo Noboa, esta investigación intenta una mirada remozada sobre la producción periodística en Ecuador.

LA HUELLA DEL PODER

En su versión tradicional, la teoría comunicativa ha interpretado la función de los media como nexo entre lo real social y el público receptor. El suceso se supone exterior y previo a una comunicación que lo refleja o distorsiona; el enunciado se asume como algo dado, el hecho está allí y el periodista se limita a transmitirlo. El mensaje solo cumple un papel descriptivo o referencial.

La noticia parece excluir todo juicio de valor y el comunicador demostraría su imparcialidad borrándose del relato, razón por la cual, la verificación de los hechos se remite a la ética profesional. Así, una visión de representación-represión mira al poder como un factor externo y manipulador de la comunicación que se realiza en lo no-dicho, en aquello que pudiendo mostrarse, se oculta.

2. Declaración de Gustavo Noboa, recogida por *El Telégrafo*, enero 26, 2000.

Deslindando posiciones con esa noción liberal, Briguet³ propone un modelo productivo para el cual es insuficiente convocar a la transparencia de lo real para justificar el discurso periodístico. El mensaje no es resultado de transponer un hecho al código de la imagen; al contrario, el registro es en sí la conversión de un acontecimiento en mensaje, por tanto configuración de otro espacio, indicio de un nuevo tipo de acontecimiento, un acontecimiento mediático.

El lente y el micrófono periodísticos gestan un cuerpo cultural cuya impronta marca al hecho registrado. El mensaje representa, significa y expresa; remite a un referente, al mismo tiempo que construye sentido y provoca emociones. Por ello, aunque la producción periodística tiende a ocultar la regularidad en lo excepcional, no deja de apuntar a procesos en los cuales pueden reconocerse las condiciones de gestación de los discursos sociales.

En la información comunicada quedan las huellas del poder, concebido como una relación que circula en el ser social y determina su naturaleza.⁴ No es una realidad externa, sino un factor integrante del producto mediático.

Por ello, las formas que asume la comunicación de masas exceden la voluntad de individuos que, usualmente, aplican sus leyes en forma espontánea. Existe un campo periodístico cuya estructura determina el hábitus⁵ que hace posible su reproducción y a él responden tanto periodistas como público.

En el hábitus se anclan las reglas de escritura y de lectura, las gramáticas de producción y de reconocimiento. Ni el periodista pretende engañar cuando habla o escribe ni el receptor imagina el mensaje que escucha o lee. Ambos integran un campo cuya lógica los marca aunque, por ocupar posiciones distintas, pueden darse múltiples comprensiones de un mismo mensaje.

En el discurso periodístico lo presupuesto da soporte tanto a la exposición como a la lectura del acontecimiento. Aludir a aquello que no es necesari-

3. Daniel Briguet, «El poder de los medios: los medios del poder», *Anuario*, vol. 1, Rosario, Dpto. de Ciencias de la Comunicación Social, UNR, 1998, p. 4.
4. También siguiendo a Briguet, retomamos el concepto desarrollado por Foucault: «El poder tiene que ser analizado como algo que circula, o más bien, como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allí, no está nunca en las manos de algunos, no es un atributo como la riqueza o un bien. El poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular». Michel Foucault, *Microfísica del poder*, Madrid, La Piqueta, 1979, p. 144.
5. Según Bourdieu, el hábitus «es una capacidad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos –pensamientos, percepciones, expresiones, acciones– que tienen siempre como límites las condiciones de su producción, histórica y socialmente situadas, la libertad condicionada y condicional que asegura está tan alejada de una creación de imprevisible novedad como de una simple reproducción mecánica de los condicionamientos iniciales». Pierre Bourdieu, *El sentido práctico*, Madrid, Taurus Humanidades, 1991, p. 98.

rio explicitar, por considerarse conocido y compartido por todos, hace del mensaje un soporte de nociones ideológicas. Atrapado en la mirada de lo enunciado, el receptor no se plantea su origen y permite que las condiciones de la creación mediática ingresen en la esfera de lo aporético.

CUANDO LA COMPETENCIA HOMOGENEIZA

Este análisis se restringe a la prensa escrita publicada durante las caídas de Jamil Mahuad y Abdalá Bucaram, pero hace mucho tiempo que los periódicos dejaron de dirigirse exclusivamente al lector. Los *mass media* se entrelazan, repiten, compiten e imitan entre ellos. Constituyen un entorno donde la competencia se convierte en atmósfera mediática que envuelve al receptor.

El lector de hoy es el televidente y el radio oyente de ayer. Prensa, televisión y radio ofertan productos que consolidan percepciones y estados de ánimo únicos, al tiempo que legitiman recíprocamente sus mensajes.

De allí, la coherencia que mantienen las notas informativas con las columnas de análisis y opinión institucional de cada periódico. Noticias y editoriales se inscriben en la temática impuesta por la agenda, a cuya determinación también obedecen los mecanismos de recopilación de informaciones y selección de fuentes citadas.

No es un diario, un canal de televisión o una radio quien informa –incluso en el hipotético caso de que solo un medio llegara a una fracción del mercado–, sus productos asumen la impronta del colectivo en el momento mismo de su concepción.

El universo de la prensa escrita es altamente diferenciado, conflictivo e, incluso, contradictorio. A su interior se libran pequeñas batallas diarias donde cada competidor encarna a un enemigo conocido, aunque siempre cambiante.

El estímulo de la competencia impone diferencias entre los diarios: correr tras la primicia, obtener la exclusiva, acceder al dato oculto; una diagramación con más o menos color, títulos exultantes, fotografías absolutas; asignar mayores recursos a una sección o a otra, más reporteros y espacios de exposición. Sin embargo, independientemente del medio para el cual trabajen, los periodistas son sometidos a las mismas imposiciones de mercado y pauta publicitaria.

Por ello, aunque fundamentos más decisivos de las especificidades de cada medio puedan obtenerse en el estudio de los paquetes accionarios de cada empresa informativa, el conjunto homogeneiza. Quien ingresa al campo

periodístico debe participar de sus intereses, reconocerlos y reproducirlos. Aceptar los presupuestos que definen al campo es una condición que no se discute. Cuando un emisor no se sujeta a esas normas es rápidamente desplazado, está condenado al fracaso.

Los *mass media* constituyen un campo capaz de generar un dominio autónomo, pero su legitimación final se remite al campo del poder. El nexo entre periodismo y política se estructura a través de las sanciones del mercado y la aceptación de un sistema de valores, construyendo senderos de sumisión al orden establecido.

Esa unidad del campo permite tratarlos como un emisor colectivo, como ellos mismos suelen reconocerse en el genérico de *la prensa*.

Aunque conscientes de esta indisoluble imbricación, el material citado en esta investigación se restringe a cuatro periódicos de alcance nacional: *El Comercio y Hoy*, de Quito; *El Universo* y *El Telégrafo*, de Guayaquil. Consideramos que, pese a su particularidad, como conjunto dan cuenta de la atmósfera mediática que envolvió los derrocamientos de Mahuad y Bucaram.

La información generada por los *mass media* es una manifestación epidérmica de la realidad y, como tal epidermis, es parte integrante de esa realidad. Ni ajena, ni incorporada, menos aún superflua o prescindible. No existe acontecimiento fuera de su mediación, ni hecho que pueda socializarse sin haber sido connotado. Hechos y mediaciones coexisten en un continuo del cual surge su construcción social.

Sin embargo, aunque la producción de la prensa mediatiza la dinámica de lo real, no puede suprimir su presencia y diversidad. La denotación no llega a agotarse en el sistema connotado. Lo real está en el origen de lo dicho y puede vislumbrarse si precisamos los efectos retóricos del discurso con que se socializa.

Textos e imágenes publicados son los portadores materiales de una amplia gama de connotadores singulares que la comunicación ha desarrollado a lo largo de su historia. Por eso suponemos posible aprehender lo que de denotado se conserva en el acontecimiento construido, si logramos identificar las formas concretas con que la retórica periodística connotó los derrocamientos presidenciales de Mahuad y de Bucaram.

Al respecto, es muy decidora la diferenciación que establece Barthes cuando afirma que «la ideología sería, en suma, la forma de los significados de connotación, en tanto que la retórica sería la forma de los connotadores».⁶

El discurso periodístico ha perfeccionado diversas retóricas, cada una de las cuales relievra conjuntos de connotadores encargados de socializar el

6. Roland Barthes, *La aventura semiológica*, Barcelona, Paidós Comunicación, 1993, p. 77.

mensaje de modo particular. Su manera de articularse matiza la elaboración noticiosa y da origen a múltiples sesgos discursivos.

Tras su huella, hemos identificado cuatro retóricas básicas utilizadas por la prensa escrita para difundir el suceso político: informativa, dramática, policial y académica. A partir de su sistematización, este trabajo busca precisar algunas funciones y productos desplegados por los periódicos ecuatorianos durante los golpes de Estado de 1997 y 2000.

La retórica periodística imprimió a las caídas presidenciales ritmos mediáticos distintos a los del hecho social, cada uno de los cuales aportó con productos comunicativos específicos. Así, la estructura de la agenda mediática incidió en la construcción de las imágenes protagónicas; la dramatización de la noticia contribuyó a generar estados de ánimo que auspiciaron los derrocamientos; el ritmo informativo reconstruyó los hechos políticos como espectáculos mediáticos; finalmente, recopilaciones y análisis entretejieron memorias y olvidos colectivos.

EN DEFENSA DEL ESTABLECIMIENTO

A través de estos caminos, la comunicación de masas contemporánea contribuye a la formación de instancias políticas representativas y estimula la participación social, al mismo tiempo que promueve su institucionalización.

Todas estas funciones rebasan el campo periodístico y han convertido a los *mass media* en un importante pilar del orden establecido, es decir, de aquel capaz de establecer la normatividad a la que la sociedad debe someterse, desarrollar un grado de gobierno, generar autoridad y ejercer poder suprimiendo la diferencia.

Transitando ese sendero, el periodismo ecuatoriano ha incursionado en espacios que se suponían privativos del sistema de partidos políticos. Desde la censura al entonces vicepresidente Alberto Dahik, en 1995, hasta la legitimación del gobierno de Gustavo Noboa, pasando por la abierta oposición a Abdalá Bucaram y la ambivalente posición frente a Jamil Mahuad, la gran prensa ecuatoriana ha ingresado en el campo de la política como actor de pleno derecho.

Pero este fenómeno no es privativo de los media nacionales. Por el contrario, las nuevas funciones asumidas solo relievan su inserción en la corriente que mundialmente va redefiniendo la naturaleza de los medios de comunicación de masas.

En el lapso comprendido entre la guerra del Golfo Pérsico y el ataque estadounidense contra Afganistán, los media se han perfeccionado como ar-

mas que conjugan el uso de tecnología de punta con la defensa de intereses imperiales.

Tras el paradigma de la CNN, el periodismo de los países subdesarrollados se alinea tras las directrices marcadas por la Casa Blanca: luchar contra el «eje del mal». Y, como en este eje ingresa todo aquel que resista al imperio, hoy pueden ser marcados como *non gratos* gobiernos, partidos y personalidades que, además, llegan a convertirse en objeto de violentos ataques mediáticos.

Es indudable que, también en este plano, los media van perfeccionándose. La técnica desplegada por prensa, radio y televisión ecuatorianas durante el golpe de Estado de 1997, contra el presidente Abdalá Bucaram, volvió a aplicarse el 11 de abril de 2002 en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez.

Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en 1997, la derrota de la intentona golpista venezolana posibilitó –quizás por primera vez en nuestros países– develar la acción de los media como partido político de oposición. Lo que algunos periodistas han denunciado como conspiración mediática permitió, en palabras del presidente Chávez, crear un «Estado virtual» cuya difusión pudo convencer al mundo, aunque no al pueblo venezolano.

De manera semejante al Ecuador de 1997 y 2000, en la Venezuela de 2002 se presentan medios de comunicación colectiva dispuestos a defender al establecimiento incluso por sobre la Constitución. En ambos casos, la institucionalidad mediática se impuso estigmatizando al marginal que accede al gobierno sin ser parte del poder, como espacio de convocatoria y organización para la oposición política, como constructores de legitimidad de una sucesión resuelta por las élites.

Sin embargo, el caso venezolano también transparenta el límite en la incidencia social de la producción mediática. La movilización popular que derrotó al golpismo sugiere la existencia de otros mecanismos de comunicación que no pasan por los *mass media* y de formas de organización y respuesta que pueden ejercerse al margen de la normatividad impuesta por el establecimiento.

Por ello, aunque la experiencia cotidiana nos habla del predominio que ejercen los grandes medios de comunicación colectiva en la reproducción social, también sabemos que es posible resistir a ese dominio mediático y, con ello, a la reproducción del poder que éste auspicia.

Esa convicción es la que alienta este trabajo.

CAPÍTULO I

Legitimidad de un presidente

DE CÓMO DIFERENCIAR A UN PRESIDENTE LEGÍTIMO DE UN INTRUSO EN LA PRESIDENCIA

El rostro del presidente se ilumina con una sonrisa de triunfo. Una vez firmado el documento, se ha puesto de pie. Elegantemente vestido con un terno oscuro y camisa blanca de la mejor calidad, que resaltan su figura esbelta, mira complacido al presidente peruano, con quien se funde en un estrecho abrazo. Los presentes estallan en aplausos. «Fue el acto más valiente que mandatario alguno haya realizado».¹

Veintiún meses antes. Utilizando sus dedos, el presidente se lleva a la boca un pedazo de pollo y lo saborea golosamente. El gorro de lana que cubre sus orejas resalta la redondez de su rostro, serpentinas multicolores ocultan su cuello que se pierde en un amplio poncho de confección artesanal. A su lado, el presidente peruano sonríe. «Traidores a la Patria serían quienes, festejando no sé qué, se visten de incas en el Perú».²

Jamil Mahuad (agosto 98-enero 00), en su condición de presidente de la República de Ecuador, firmó en Brasilia un acuerdo de paz con Perú. Abdalá Bucaram (agosto 96-febrero 97), como presidente de la República de Ecuador, realizó la primera visita oficial de un mandatario ecuatoriano al gobierno peruano, en 63 años. Dos presidentes, cumpliendo actos propios de la misma investidura y relacionados con el mismo problema, fueron calificados desde imágenes opuestas.

Esas imágenes no fueron fortuitas. La manera como se socializaron las fotografías arriba descritas, las convirtió en parte de representaciones colectivas, cuyo eje central fue el protagonismo presidencial. En el entorno mediático, hecho y actor solo adquieren vida social al ser comunicados.

De ahí la trascendencia de a qué y a quiénes enfocan los *mass media*, qué sujetos se configuran en este escenario, cómo son vistos y receptados, cómo

1. Palabras de Alberto Dahik, publicadas por *Vistazo*, No. 779, Guayaquil, febrero 3, 2000, p. 31.
2. Declaración de León Febres Cordero, recogidas por *El Telégrafo*, enero 24, 1997.

mo serán recordados. A partir de un suceso que lo cualifica y en relación con su elaboración textual, el personaje llega a ser protagonista. Pero no todo personaje recibe el mismo enfoque ni igual tratamiento.

El 10 de agosto de 1998, la noticia era la asunción de Jamil Mahuad como nuevo presidente de Ecuador. «Es el momento de nacer para el país», había dicho el flamante mandatario y el periodista reseñó que fue «Un mensaje oportuno en el momento oportuno, dicho de modo oportuno, porque ‘yo no he sido votado Presidente para ver la disolución del Ecuador. Yo he sido elegido para evitar que acabe de hundirse’...»³

Aunque hoy esas frases suenen a trágica ironía, la lectura inicial de la palabra presidencial ofertando paz y armonía se difundió con optimismo, aquel que un nuevo representante podía aportar a quienes confiaban en la reconstitución de las formas y legitimidad de la conducción gubernamental. «Desde este comienzo, Mahuad se mostró como un líder, un navegante, un guía», cuyo discurso de posesión dejaba –cuando menos en quienes hacen la opinión publicada– la «nostalgia de que acierte tan bien y bellamente como habló».⁴

Unos versos compuestos para la ocasión por el poeta oficial de la nueva corte, complementaron el discurso de un presidente cuya palabra confirmaba lo que su presencia física traslucía en las pantallas televisivas: un intelectual educado para representar al poder había asumido la Presidencia de la República. Mahuad compendiaba las formas corporales y discursivas que pueden ser leídas desde el ritual. Como protagonista, exhibía una estructura simbólica ligada a una corporeidad que, por responder a lo preestablecido, le permitía ser reconocido.

El poder es narcisista, gusta de mirarse como forma de recrearse continuamente. Se contempla a sí mismo cuando aprecia a sus representantes y, en menor medida, cuando avista a sus representados. Pero, como Zeus, no puede ser visto directamente, apenas accedemos a sus criaturas, instituciones y representantes.

Los actores de las noticias dominantes suelen provenir también de los sectores dominantes de la sociedad y son quienes gozan de la mayor visibilización. Pero, en el ámbito de la comunicación de masas, el protagonista no es un individuo, sino un rol social. El personaje se fragmenta para ser tipificado, razón por la cual, de él solo son visibles aquellos aspectos relevantes para el rol.

3. Simón Espinosa Cordero, «Pastor y navegante», *Vistazo*, No. 743, Guayaquil, agosto 14, 1998, p. 27.

4. *Ibíd.*

En Mahuad se conjugaban aquellos aspectos cuya comunicación gesta representación social. De allí que la amplia difusión noticiosa de su imagen estimulase un clima de tranquilidad en el país. Por fin, la *majestad* de la Presidencia de la República había sido recuperada. El país se enrumbaba en la promesa de orden, paz y armonías.

La trascendencia que la agenda mediática proporcionó a ese aspecto de la posesión respondía a que la *majestad* había sido rota dos años antes. «El contraste con el 10 de agosto de 1996 no podía ser mayor: entonces se impuso la tribu y la pandilla; el mensaje del 96 nadaba en gotas de sudor; el del 98, humedeció los ojos de quienes escuchaban al pastor y al navegante».⁵

En agosto del 96, el país se había estremecido ante la noticia de que la *solemne* posesión presidencial fue convertida en «Un solo toque de 6 horas». Titular con el cual diario *Hoy* describió la asunción del mando por Abdalá Bucaram. Luciendo la banda símbolo de su alta magistratura, el nuevo presidente cantó a dúo con el vocalista de los Iracundos. «El dúo dinámico ya no es entre Batman y Robin, sino entre Abdalá y Jorge Gatto, que se cambió de camiseta y se desiracundizó de un solo toque», precisaba el pie de foto (*Hoy*, agosto 12, 1996). Esa narración fue solo el primer eslabón de la larga cadena con que la prensa nacional exhibió su asombro ante el inusual comportamiento del mandatario roldosista.

Gracias a la capacidad del texto para cancelar a los sujetos de la enunciación, la noticia aparece como resultado espontáneo de la realidad pública. Por ello, el discurso descriptivo conduce al lector a aceptar asertos como ciertos y alimentar creencias, aunque no las acepte de forma indiscriminada.

Un mandatario declamando poemas durante su posesión, realiza una acción que se inserta armoniosamente en la estética que el campo del poder impone; un presidente cantando rock, la rompe. Estas dos lecturas, en apariencia antagónicas, obedecen a una misma lógica de producción noticiosa. El discurso informativo actúa desde un efecto acumulativo, años de retórica forjaron las imágenes de Mahuad y Bucaram; sus protagonismos en la Presidencia de la República fueron precedidos por identificaciones y desconocimientos sociales de larga data. Esa percepción inicial encontró una continuidad espontánea en el enfoque que los media dieron a los dos períodos presidenciales.

Aunque actores del mismo escenario de la política y supeditados a un rol semejante, la naturaleza protagónica de los dos presidentes fue distinta, lo que hace suponer diferencias también en su representación social. El uno, en el que somos todos, no es el individuo sino el representante; reconocerlo así exige que en él se encuentren coherentemente articuladas las huellas de los representados, nuestras propias huellas. Para constituirse en protagonista, el

5. *Ibíd.*, p. 25.

personaje debe ser visto y escuchado. Rostro, cuerpo y palabra son los soportes materiales de la mirada, el discurso y la acción, cuyas especificidades dieron cuenta de las diferencias entre ambos protagonistas.

El discurso de posesión de Mahuad facilitó su inmediato reconocimiento como un representante legítimo del poder.⁶ Era un actor dominante actuando en el campo dominante, su legitimidad estaba garantizada por esa concordancia.

En el caso de Bucaram, cantar y bailar con la banda tricolor era algo más que un hecho insólito, exponía a la mirada pública a un mandatario capaz de acciones que no forman parte del rol presidencial. Bucaram fue rápidamente identificado como un actor ajeno al campo y ello deslegitimó su representación política.

Un protagonista dominante es un cuerpo del poder y surge al enfoque mediático ya estéticamente construido para esa representación. Durante las dos últimas décadas, los ex presidentes Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén y, ahora, Gustavo Noboa, confirman la producción de un cuerpo presidencial cerrado, estructurado desde negociaciones que restringen su contacto físico con los otros y con la naturaleza, mientras se eleva el nexo ofrecido por la mirada y la palabra.

Ese fue también el caso de Jamil Mahuad. Basta observar las fotografías que lo muestran luciendo la banda presidencial, firmando el acuerdo de paz en Brasilia, posando junto a otros presidentes en reuniones internacionales e, incluso, en sus encuentros informales con Fujimori en Ecuador o Perú. La estética exigida por el establecimiento a sus representantes encontraban en él su plena realización.

Lo disruptivo fue la presencia de Bucaram. Tres años después de su caída, los formadores de opinión siguen asombrándose de que, alguien con sus características, haya ostentado el cargo de presidente de la República. A fuerza de ser algo dado, hasta 1996 la imagen presidencial aparecía como natural, difícilmente podía leerse como una construcción histórica, social y mediática. La ruptura aportó una nueva condición para reconocer en los antecedentes y sucesores Bucaram a cuerpos disciplinados para ejercer la representación del poder.

Abdalá Bucaram puso en escena el anticuerpo presidencial, en el cual una corporeidad exuberante sirvió de soporte al ademán desmedido, la palabra soez, la alimentación vulgar y la actitud desproporcionada. La palabra, la

6. Esta referencia a la legitimidad del ex presidente no está vinculada a la noción de legalidad originada en un proceso electoral o en otras formas de elección. No hacemos referencia a la percepción que el pueblo pueda tener de él; la legitimidad solo la proporcionan los legitimadores estatuidos y estos surgen del campo del poder, jamás de los sectores dominados.

risa, la gestualidad, en fin, las formas de la vida cotidiana proclamaron a un protagonista ajeno a la cultura institucionalizada. Incluso, la moral traslució en los rasgos físicos del protagonista presidencial. El bueno fue físicamente reconocible y el malo fue, también, físicamente repudiable. Estos estereotipos han sido perfeccionados por la crónica roja, pero es una novedad que lleguen a reproducirse en la noticia política, de manera tan abiertamente maniquea.

EL DISCURSO DEL ORDEN Y SUS ESCENARIOS

La ruptura entre el personaje y su rol definió el tipo de visibilidad que la agenda mediática dio al presidente roldosista. Durante los seis meses de su gobierno, las portadas de la prensa escrita se cubrieron de fotografías y titulares que daban cuenta de que Abdalá Bucaram bailó y cantó luciendo la banda presidencial, sesionó entre risas con el Gabinete, bailó en público, asistió a un banquete, se escapó del Palacio las noches para jugar fútbol, fue directo a comer una guatita, se afeitó el bigote más caro del mundo, grabó el disco *Un loco que ama*, apadrinó con Lorena Bobbit a la hija de Silvana, fue electo presidente del Barcelona, visitó Panamá como si fuera su segunda patria, hizo cascaritas con un jugador de Barcelona Sporting Club, comió con las manos en Vilca Huamán en compañía de Alberto Fujimori, aulló delante de 15 mil espectadores cantando el Rock de la Cárcel...

Periodistas y lectores estaban habituados a las formas histriónicas de Abdalá en los escenarios de campaña. La tarima electoral garantizaba el fin del espectáculo y esa certeza auspiciaba un indiferente desprecio de la prensa por su cercanía con el gusto popular. Pero, como denunció *Hoy*, (agosto 22, 1996) «ciertas imágenes que proyectó Bucaram en el pasado se repiten en el Palacio de Carondelet», el presidente posesionado convirtió al gobierno en un espacio para la fiesta y lo grotesco popular impregnó el discurso oficial.

Mientras Bucaram solo era candidato su comportamiento podía tolerarse, pero de quien llegó a la Presidencia se esperaban formas elegantes, costumbres adecuadas, palabras correctas, un dominio práctico de los usos socialmente apropiados. Eso lo consiguió Jamil Mahuad. Aunque no haya nacido en el seno del poder, el ex presidente había sometido a su cuerpo al entrenamiento necesario para que sea, por sí mismo, un espacio de representación de las relaciones de dominio, gracias al cumplimiento espontáneo de las normas preestablecidas.

El orden encuentra en el actor legítimo un factor para su autoafirmación; éste sabe lo que debe hacer, donde y cuando corresponde. La lógica do-

minante proporciona concordancia a la relación entre protagonista, acción y escenario y a ella responde el orden del discurso, eje organizador de la estructura noticiosa.

Esa concordancia fue visible en el discurso profesoral con que Mahuad caricaturizaba al Estado ecuatoriano, presentándolo como un *Titanic* hundíendose. El ejemplo fue de fácil socialización y su potencial de difusión se elevó debido a que el primer escenario en donde se habló de la crisis fue, justamente, la gran prensa nacional. El claro reconocimiento de los lugares desde donde debe hacerse la política validó la representación presidencial, al tiempo que consolidó la verosimilitud de su palabra.

De la misma manera en que existen actores legítimos e ilegítimos, también los escenarios de la política responden a esa categorización. Al igual que el Salón Amarillo o el Plenario Legislativo, el consejo editorial de un periódico o el plató televisivo son considerados espacios naturales para el discurso del poder. En cambio, el partido de fútbol, el concierto de Los Iracundos o la cevichería de La Lojanita son lugares no reconocidos en la construcción del rol presidencial. Solo un protagonista ilegítimo actúa en escenarios carentes de legitimidad. También en ese sentido, Abdalá Bucaram se denunció a sí mismo como un intruso en la Presidencia.

El ex presidente provocó inestabilidad no solo por su ruptura con las reglas establecidas, sino porque se enorgullecía de no cumplirlas, poniendo en cuestión la normatividad imperante. Por ello, la negativa de Bucaram a residir en Carondelet fue considerada como un atentado a la institucionalidad. Tomando como punto de partida la afirmación del futuro ministro de Gobierno, César Verduga de que «El Palacio encarna la majestad del Estado», *Hoy* inquirió: «¿Cómo se gobierna desde ninguna parte? Los problemas de no contar con una sede y gobernar desde insospechados lugares» (*Hoy*, enero 25, 1997). La prensa exigió concordancia entre el rol y sus espacios. Reo de sordera, Bucaram desconoció la importancia del escenario y «su presencia en el Palacio de Gobierno en la agonía de su régimen confirma que muy tarde intentó comprender lo que significa la Patria y sus lugares» (*Hoy*, febrero 9, 1997).

Pero no son solo gestos y escenarios. El orden del discurso crea un hábito de lectura que se proyecta sobre la realidad social y la prensa da por supuesto que una fuente legítima siempre produce respuestas legítimas. Su validez está definida por el sentido previamente compartido, de ahí la facilidad con que periodistas y lectores aceptan el discurso cargado de ideas preconcebidas.

Un representante adecuado del poder, como Jamil Mahuad, logró una comunicación casi instantánea con los *mass media*, porque respondía de ma-

nera automática y en los términos esperados a los tópicos impuestos por la agenda periodística.

En cambio, un representante de sectores marginales como Abdalá Bucaram solo pudo ser considerado en la frontera del orden. En él, apenas podía mirarse lo extraño al hábitus del campo del poder, por ello, la prensa estimuló la información permanente del presidente que come guatita, juega fútbol, canta y baila. Su presencia en la dirección del Ejecutivo era tan ajena como inverosímil fue su palabra o las decisiones que de allí nacieron.

Cuando, a poco de posesionarse, el ex presidente envió «al diablo» a la oposición, calificó de «minusválidos mentales» a los dirigentes del MPD, rebautizó al FRA como «Frente de Rateros Asociados» o señaló que «Borja fue un burro en el poder», no solo fue sospechoso de utilizar la violencia simbólica⁷ que el ejercicio del poder confiere, sino de hacerlo fraudulentamente.

La palabra presidencial es la máxima concreción del potencial regulativo del discurso, capaz de construir hechos desde su enunciado y de modificar la realidad a partir de su representación. Pero, no siendo un protagonista legítimo, Bucaram carecía de los derechos necesarios para incidir en las formas de reproducción del poder –formas siempre destinadas a garantizar su continuidad– y, por ello, su palabra amenazaba con tematizar aspectos problemáticos de la dominación.

La prensa reaccionó de inmediato. Tanto el llamado a la prudencia de *El Universo*, advirtiendo que «La oposición política al actual Gobierno no debe ser desafiada de manera tan imprudente», (agosto 29, 1996) como la beligerancia con que, el mismo día, *Hoy* abrió fuegos, porque «Las palabras del presidente autorizan palabras y actos de grueso calibre», dieron cuenta del peligro. Es que el orden sabe protegerse y, cuando quien tiene voz no respeta la ritualidad, el receptor tampoco lo hace.

El conflicto se mantuvo durante todo el gobierno de Bucaram. Así lo demostró, cinco meses después, la columna de opinión de *Hoy* titulada «Ultraje y democracia». Una vez más, se exigía el restablecimiento del orden, ya que «Cuando una autoridad –más el presidente de la República– recurre a ‘las malas palabras’ o al lenguaje soez, no preocupa tanto la urbanidad e incluso el honor mancillado de los destinatarios de los agravios, sino que alarma la posibilidad de que algo está fuera de control, en quien tiene tanto poder y responsabilidad» (*Hoy*, enero 7, 1997).

7. Retomamos el concepto desarrollado por Bourdieu, para quien el poder simbólico se basa en la creencia social de que quien lo ejerce posee un estatuto de legitimidad. Por tanto, su aplicación como violencia simbólica, supone la anuencia de quienes la experimentan, volviendo innecesaria la coerción física. Ver Pierre Bourdieu y Loïc J.D. Wacquant, *Respuestas. Por una Antropología Reflexiva*, México, Editorial Grijalbo, 1995, pp. 106, 120.

Ello evidencia que el discurso es el discurso del orden y cuando en un escenario de altísima visibilidad se introduce una palabra ajena, la institucionalidad se siente amenazada. Si el temor es muy grande, llega a exhibirse el protagonismo de quienes están llamados a defender la cultura dominante.

LA «PAZ»: ¿ABYECTA TRAICIÓN O JUBILOSO CONSENSO?

La discordancia entre personaje y representación hizo crisis cuando Abdalá Bucaram se develó como un líder marginal en la Presidencia. De Jamil Mahuad, exitoso aspirante de la clase media, se esperaba la restitución de esta armonía, pero el proceso quedó trunco.

La diferencia en la naturaleza protagónica de los dos ex presidentes también determinó una configuración distinta de la agenda que los media desarrollaron en cada gobierno. Las acciones de un mandatario solo son relevantes cuando visibilizan las demandas del poder al cual representa, lo que permanece fuera de esta franja carece de trascendencia comunicativa. De allí, la exhaustividad en la información de determinados aspectos y el bajo perfil de otros.

El discurso de Mahuad presidente, como el de Bucaram candidato, daban respuesta a lo presupuesto. Gracias a ello, ambos protagonistas se convirtieron en sujetos textuales y, finalmente, en representantes. Posteriormente, el desplazamiento en la posición de enunciación despojó de legitimidad a la palabra de Bucaram y la prensa denunció que, tras sus enunciados, había una incongruente relación con el rol presidencial.

No sucede así con el rol Bucaram-marginal. Mientras el político se circunscribió al suburbio y lo reconoció como su espacio natural, su discurso pudo inscribirse en la lógica de los *mass media*. Abdalá debe mantenerse en las fronteras, ya sean del Guasmo o de Panamá, «Dalo en Panamá es como si estuviera en el Guasmo», tituló *Hoy*, (enero 15, 1997) la noticia de la visita del mandatario al Istmo, ratificando la necesidad de que acciones y escenarios concuerden con el rol del protagonista.

Bucaram en la Presidencia rompió con esa concordancia. Para que un protagonista político se constituya en máximo representante del poder, no basta con que sea electo. Debe asegurar los principios y consecuencias de sus disposiciones. La elevada capacidad regulativa que posee la palabra presidencial se asienta en la creencia de legitimidad del discurso y de quien lo pronuncia. Es así como la comunicación reproduce cotidianamente la bíblica relación entre verbo y carne. Pero, toda palabra proviene de un cuerpo y, cuando éste

es señalado como ilegítimo, el enunciado pierde condiciones de materialización.

Un protagonista ilegítimo siempre será mirado como un subordinado, que una circunstancia lo haya ubicado en la Presidencia de la República no autoriza su discurso como representante del poder. Cuando Bucaram rompió con este principio, su palabra ingresó en una zona de difícil percepción para la mirada mediática, tornándose ilegible.

Allí radica otra diferencia importante entre los dos ex presidentes. Lo que Bucaram no podía satisfacer –a menos que le hubiera precedido una reconfiguración de la hegemonía dominante, capaz de otorgar consecuencia a su palabra– fue ampliamente reconocido en la legitimidad del discurso de Mahuad.

Varios ejemplos advierten de la curiosa posibilidad de que un desplazamiento en la posición de enunciación llegue a difuminar el enunciado. Uno fue el caso del acuerdo de paz firmado con Perú, en ostensible distancia con la cobertura informativa proporcionada a la visita de Bucaram, casi dos años antes. También fue la diferencia en el enfoque dado al proyecto de convertibilidad y al de dolarización. La misma lógica noticiosa explicaría por qué la propuesta económica que Bucaram expuso el 1 de diciembre del 96 quedó fuera de todo tratamiento y ni siquiera llegó a ser de conocimiento social.

En cambio, durante el gobierno de Mahuad la agenda mediática jerarquizó tres temas críticos. El primero fue el problema limítrofe. Coincidiendo con su asunción de la Presidencia, el país fue informado que «El gobierno de Perú mantendrá roto el diálogo con Ecuador hasta que ese país retire las tropas que presuntamente han invadido su territorio» (*El Universo*, agosto 11, 1998). La prensa distribuyó una noción de crisis como un momento de ruptura de la estabilidad permanente, cuyo mantenimiento se presupone de interés general.

El temor generado alrededor de esa crisis, convertida en *la crisis*, se ligó al temor al caos, a lo desconocido, a la confrontación, a la guerra. Frente a la incertidumbre, el Estado debía garantizar la estabilidad, la paz, la certeza, lo conocido, la continuidad de lo mismo. De esa noción partió Mahuad al constatar la existencia del problema para, de inmediato, garantizar la conservación de la estructura institucional que permitiría recuperar la estabilidad perdida.

Ante el peligro reactivado, el recién posesionado gobierno de la Democracia Popular (DP) implementó una política internacional que culminó con la aceptación del acuerdo vinculante propuesto por los países garantes. Las concesiones de soberanía que se hicieron durante el proceso se tornaron secundarias, lo importante era un resultado que garantizase el consenso. Y éste no precisaba tanto de una aceptación a la fórmula concreta del acuerdo, cuán-

to de reconstituir una sensación de seguridad colectiva. Hacia allá se encaminó la información periodística.

El titular «Mahuad invita a Fujimori a que ‘ejerzamos la paz’», (*El Telégrafo*, octubre 27, 1998) sintetizó el espíritu victorioso de la firma del acuerdo rubricado en Brasilia, tono que se impuso en la reiterativa información sobre el acto diplomático. La prensa saludó el acuerdo hasta que no cupo duda de su validez. La frase oficial de que «Gracias a la Paz la bandera ecuatoriana ondeará en el Amazonas y Tiwintza es nuestro», (*El Universo*, octubre 26, 1998) reproducida por todos los diarios como propia, resaltó el regreso al territorio conocido y aporoblemático. Allí nos recuperamos como identidad colectiva y los colectivos garantizan una capacidad de acción o, cuando menos, la suponen en sus representantes.

Aquello que en el caso de Jamil Mahuad contribuyó a la construcción de su imagen como líder del Estado ecuatoriano, en Bucaram se revirtió deconstruyendo su representación presidencial. Lo que en el 2000 fue el «acto más valiente que mandatario alguno haya realizado», en el 97, fue una «traición a la Patria». Así lo intuyó *El Comercio* (enero 15, 1997) al *informar* que mientras «El ‘perdón mutuo’ que pidió Bucaram en el Congreso impresionó a los legisladores [peruanos]. En el Ecuador, esta frase levantó polvareda».

En esa línea, el avance editorial que el mismo diario publicó en portada, con formato de noticia, advirtió al lector que si bien «El ‘perdón’ impresionó». debe primar el realismo, «Las reacciones a la visita del presidente Abdalá Bucaram al Perú no deben llevar a un optimismo exagerado, pues subsisten posiciones intransigentes».

Manteniendo el formato noticioso –que opaca al sujeto de la enunciación–, también *Hoy* expuso su opinión: «Un viaje histórico traspasado de buenas intenciones, el de Bucaram a Perú. Lima, palabras perversas: Se requiere de un Congreso de la Academia para redefinir la palabra ‘perdón’» (*Hoy*, enero 18, 1997). Al titular sigue un texto más adecuado para la página editorial que para la portada: «Para el régimen de Bucaram, las palabras fueron la victoria y son ahora las que marcan las derrotas».

Alrededor de esta retórica informativa, se creó un entorno de adhesiones. A la mayor fuente de legitimidad de la política ecuatoriana, el ex presidente León Febres Cordero⁸ se sumó la indignación del ex –y futuro– ministro de Defensa, José Gallardo, «¿De qué pedimos perdón?». «El apuro por viajar impidió que se meditara detenidamente en las palabras que se usarían» (*Hoy*, enero 16, 1997).

Finalmente, la escasa capacidad regulativa de los actos de Bucaram decantó, en la memoria, como una visita carente de trascendencia. «Las inicia-

8. Ver nota 2.

tivas que van del fútbol profesional a la generosidad con las barriadas panameñas, resaltan tanto sus fulgores que dejan a la visita al Perú, como un asunto pálido, sin grandes emociones» (*Hoy*, enero 14, 1997).

Un presidente sin representación de poder no puede realizar acciones que comprometan la política general del Estado. Así lo ratificó la agenda mediática, deslizándose de la denuncia por «traición» a la insignificancia de hecho: «En aquellos días nadie pensaba en su anodino viaje al Perú ni en el ambiguo pedido de perdón que, en realidad, poco o nada significan en las relaciones entre los dos países» (*Hoy*, febrero 20, 1997).

LA POLÍTICA ECONÓMICA TAMBIÉN PRECISA DE BUENAS MANERAS

La segunda crisis fue financiera. Mahuad la oficializó declarando ante el Congreso que ésta es «la peor crisis de los últimos setenta años».⁹ Siguieron afirmaciones en el estilo de: todos debemos sacrificarnos, el país es de todos, hay que luchar juntos. El conjunto pertenece al campo de los tópicos, aquello que no se discute porque forma parte de la esfera concebida como natural.

Como integrante del mismo hábitus, al lector le resultó familiar la reproducción periodística de ese discurso y llegó a reconocerse en él. Así, la palabra dominante se legitimó porque provenía de una fuente legítima y, también, porque el receptor la aceptaba como válida. Abriendo camino al consenso, la prensa hizo suya la racionalidad profesoral de Mahuad que, en un pizarrón, ilustraba la gran crisis económica con diagramas.

En contraposición, la consigna del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) «Un solo toque» había generado incertidumbre, porque «describe una actitud efectista y rápida, porque en realidad, nada de algún significado se puede construir de un solo toque, sino como resultado de esfuerzos prolongados», (*Hoy*, enero 19, 1999) diría el diario resaltando la necesidad de entrenamientos que disciplinen el cuerpo y el espíritu en las exigencias de la dominación.

A Bucaram se lo acusó de exceder la capacidad de asimilar lo nuevo, de someter al país a una permanente incertidumbre. «Esta administración se propuso desconcertar a ‘esa gente’. Lo ha hecho con creces, pero no para», se lamentaba *El Comercio* (enero 17, 1997). En cambio, Mahuad dramatizó el peligro de la crisis económica, pero a continuación prometió la calma, el re-

9. Jamil Mahuad, *Informe al Congreso Nacional*, Quito, enero 19, 1999.

torno al orden. Lo peligroso es la incertidumbre que nace de lo imprevisto; lo conocido suprime el desasosiego; y, la lealtad a patrones de interpretación aceptados restablece la tranquilidad.

Alrededor de la crisis financiera, la prensa distribuyó una información cuyo eje central fue el fantasma de la desestabilización. El temor al cambio cobró fuerza y, frente al miedo, se levantó la promesa presidencial de encontrar una salida que restableciera la certeza. Inscribiéndose en esa orientación gubernamental, el entorno mediático difundió masivamente la directriz de que «todos debemos poner el hombro», porque «la Patria es sólo una». Así, se emprendió el camino que llevaría a aceptar resoluciones impuestas, aunque consensuadamente leídas.

El miedo llegó al paroxismo durante la llamada «semana negra». «Al decreto de feriado bancario, se sumó el Estado de emergencia debido a la grave crisis económica que vive el País» (*El Telégrafo*, marzo 10, 1999). Había que proteger el salvavidas del cual se aferra el ahogado: el sistema bancario y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

«Aquí lo que estamos resolviendo es si tenemos o no un presupuesto balanceado, aquí lo que estamos resolviendo es si vamos a tener o no un sistema bancario nacional saneado» confirmó el presidente Mahuad, (*El Telégrafo*, abril 16, 1999) demostrando que la búsqueda de estabilidad no es objeto de cuestionamiento.

Se da por hecho que todo el país exige seguridad, permanencia, continuidad. Ese debe ser el objetivo de todos, ya que así lo considera la élite en el poder. Las voces que podían cuestionar este *ineludible* destino quedaron fuera del enfoque de los media. Dudar de la estabilidad como meta común pertenece al mundo de lo impensable.

A forjar un consenso que legitime esa estabilidad se dirigió, en los últimos meses del 98, el continuo reclamo de la prensa hacia Mahuad. Se le demandó tomar decisiones, porque «hubo temporadas en las cuales el presidente desaparecía de la escena política, no se lo veía, tampoco se lo escuchaba, era un fantasma habitando el Palacio de Gobierno».¹⁰ De allí nacería la coartada de que el límite del gobierno obedecía a la falta de liderazgo presidencial.

Una vez constituido el entorno, se dio por sentado que atravesábamos una crisis que nos involucraba a todos. La «solución» al problema se tornó secundaria frente al tópico central articulado por la aceptación aporreada de un conflicto general,¹¹ capaz de identificar una crisis económica con una catástrofe natural.

10. Felipe Burbano de Lara, «Cuando todos deciden saltar al vacío», *Iconos*, No. 9, Quito, FLACSO, abril 2000, p. 13.

11. ¿A dónde conduciría el problematizar la noción socialmente aceptada de que la crisis finan-

Bajo la misma lógica aplicada al problema limítrofe, cuánto perdieron los depositantes con la congelación fue de poca relevancia. Que la decisión tomada beneficiare a un sector extremadamente limitado fue considerado un hecho secundario; lo importante era que la decisión se tome y esté enmarcada en los presupuestos correspondientes a la política económica que ha dirigido al país los últimos veinte años.

Cuando los *mass media* construyen un acontecimiento político no buscan promover una decisión gubernamental, cuanto consolidar la percepción unánime del entorno conflictivo. Una vez que la naturaleza de la crisis sale del espacio de discusión, una solución que responda al modelo dominante será fácilmente aceptada, al menos por la mayoría.

La noción de crisis económica ingresó a tal grado en lo aporoblemático que, cuando Mahuad planteó la dolarización, la prensa la asumió como un elemento que recualificaba la política económica del país. Y, una vez más, los especialistas –fuentes legitimadoras– se encargaron de reducir el debate a las características, plazos y ritmos de la desaparición del sucre.

El mejor ejemplo lo proporcionó *Hoy* (enero 16, 2000). Bajo el título «La dolarización ya tiene una respuesta», inició la difusión de «un folleto con respuestas a todas las inquietudes que han hecho llegar a Don Elhoy y las que se hacen en casas, oficinas, calles y parques del Ecuador». Más discreta, pero no menos eficaz, fue la acción de los diarios guayaquileños. El mismo 16 de enero, *El Telégrafo* anunció en portada: «Dolarización: última carta que tiene el gobierno», titular extensamente explicado por el ex ministro de Finanzas, Francisco Swett, en un artículo que copó toda la segunda página de esa edición.

Por un sendero semejante se enrumbó *El Universo*, «El tiempo apremia para la dolarización», rezó la noticia de portada que remitía a apreciaciones recogidas de fuentes «autorizadas», desplegadas en interiores. Aunque los consultados llegaron a mostrar diferencias, se impuso la noción de que la dolarización era una medida «sin retorno». Por ello, el resumen semanal del mismo *El Universo*, destacó la declaración de un «analista económico» que sintetizaba el conjunto de opiniones publicadas: «Como propuso la dolarización, hay que dejar atrás el debate de si conviene o no, ahora simplemente hay que apoyarlo» fue lo que el periódico relievó de la palabra de Walter Spurrier. Y, cuando la prensa recurre a una fuente como esa, no solo reconoce como legítimo el discurso del especialista sino que autolegitima su propia narración.

ciera no es un problema nacional? Ubicar su origen en la quiebra fraudulenta de una o varias empresas privadas, que debía ser resuelta en su ámbito, podía deslegitimar la creación de la AGD, el congelamiento de depósitos, la adquisición de bancos quebrados con dineros públicos...

Las posiciones opuestas a la medida monetaria fueron perdiendo espacio de visibilización.

Un proceso semejante se impuso en las instancias de decisión política. «Es una posición ante la crisis y debemos contribuir para que funcione. Pero aclaro que no es responsabilidad del Congreso», (*El Universo*, enero 16, 2000) fueron las declaraciones recogidas del presidente del Parlamento Juan José Pons. Al relieves la legitimidad del lugar en que se asumió la decisión de política monetaria se contribuía a confirmar la validez de la medida.

La dolarización gestó la expectativa de nuevos espacios de negociación y acuerdos. Fue un nuevo punto de partida, desde el cual se podían reconstruir los deteriorados nexos entre la élite y el gobierno. «La dolarización impone un acercamiento obligado entre Jamil Mahuad y Jaime Nebot», auguraba *El Comercio* (enero 16, 2000). La dolarización fue vendida por el gobierno como tierra firme para el naufrago y, en los mismos términos, fue distribuida por la prensa. Una semana antes de su caída, el periódico aún consideraba que Mahuad había logrado «reoxigenarse y ganar tiempo, una vez que su situación política era complicada. Y consiguió que el Ecuador se vuelva a instalar en la confianza» (*El Comercio*, enero 16, 2000).

La frase surge de un supuesto, el sujeto concreto que recuperaba «la confianza» no requería ser nombrado. Entre líneas, el lector entrenado podía identificar a los grandes capitales nacionales y los centros financieros internacionales; ese es un sujeto universalmente aceptado, los sectores no poderosos, los del pueblo, están fuera de la construcción y también de «la confianza».

Quizá esto ayude a explicar por qué fueron precisamente los indígenas y otras organizaciones gremiales quienes evidenciaron la fractura en el discurso del poder, al exigir la supresión de la dolarización. Esa demanda alertó a la prensa del peligro que surgiría si se ponía en duda una medida que debía ser incuestionable. «Ecuador no se ha dividido en dos. Pero, en las circunstancias políticas en las que se han colocado los indígenas y los movimientos sociales, la dolarización se ha convertido en la frontera divisoria entre estos grupos y buena parte de las élites de poder», afirmó entonces *El Comercio* (enero 19, 2000).

Todo discurso subordinado tiene un escaso potencial de realización, como ya lo había demostrado el deterioro sufrido por la palabra del presidente Bucaram. También en su caso, la prensa reaccionó con las estrategias que consolidaban el principio de no visibilidad. De igual manera que la visita a Perú fue reducida a un hecho insignificante, el planteamiento de la convertibilidad enfrentó una validez muy disminuida en relación con la otorgada a la dolarización.

La convertibilidad fue propuesta por un gobierno *no serio*, «El sacrificio impuesto habría requerido compensaciones sociales apropiadas, raciona-

lidad y tiempo en su aplicación y la garantía de un gobierno sobrio, creíble que suscite las esperanzas, lo cual, francamente, no es la situación del país en el momento del paquetazo» (*Hoy*, enero 9, 1997). La ilegitimidad del gobernante roldosista ilegitimó la medida, «El hecho es que no se ve la capacidad de gestión para conducir la economía apropiadamente, menos para asumir los enormes riesgos de la convertibilidad» (*Hoy*, enero 24, 1997).

Las diferencias en el enfoque otorgado a la convertibilidad y a la dolarización no respondió, únicamente, a su relación con la soberanía monetaria del Estado ecuatoriano, ni a sus diferentes posiciones ante los centros de poder mundial; el conflicto nacía de un distinto protagonismo presidencial. Formulada por Bucaram, desde esta zona fronteriza de la economía internacional que es Ecuador, ni siquiera pudo ser vista por la sociedad ecuatoriana.

Bucaram solo podía protagonizar temas banales, razón por la cual la agenda elaborada por el gobierno se volvió secundaria. Sus planes sociales, propuestas políticas o proyectos económicos no adquirieron la jerarquía de noticias dominantes, se mantuvieron en el nivel destinado a las palabras sin capacidad regulativa.

Es que el discurso informativo tiende a reforzar la capacidad del enunciado, difuminando las condiciones de enunciación, con lo cual el peso denotativo del texto parece absorber al hecho mismo. Sujeto, posición y lugar de enunciación conforman una unidad textual cuya concordancia se torna problemática. Tanto para el productor como para el receptor de la noticia, la enunciación se encuentra en el marco de lo dado, y como éste es impensable, dejando para dominio exclusivo del enunciado el mundo de lo visible que, finalmente, es el ser.

No obstante, la política ecuatoriana nos demuestra que también existe la posibilidad de que una ruptura en la concordancia de los aspectos que integran la enunciación llegue a problematizarla. Cuando el actor no corresponde a la posición o al lugar de enunciación, ésta pierde su transparencia, ingresa al campo de lo visible y lo abarca como lo único real. Entonces, es el enunciado el que corre el riesgo de diluirse o –lo que finalmente es igual– de volverse ilegible.

UNA MORAL VACIADA DE POLÍTICA

Con la economía y la política desplazadas del enfoque de los media, desde el inicio mismo del gobierno roldosista, éstos dirigieron su lente hacia la impugnación moral. En tanto el protagonista era extraño a la representación del poder, su moral también se presupuso reñida con él. Para fines de enero

del 97, *Hoy* (enero 27, 1997) certificó que «Si algo ha derrochado el gobierno, quizás hasta el agotamiento de sus reservas, es la autoridad moral». La imagen, crecientemente difundida, de un gobierno culpable de nepotismo y corrupción se conjugaba con la visión negativa y estereotipada del actor subordinado y su marginalidad cobró el rostro familiar de la delincuencia.

Ya en ese plano, cualquier acción del presidente cuestionado era susceptible de sospecha. El rumor se volvió verosímil y es que «¿Acaso el presidente defenestrado no rompió con arrogancia, desde su llegada al poder, principios legales y éticos? [...] ¿Acaso no confundió la propiedad pública con la propiedad personal y dispuso de bienes estatales, que no le pertenecían, para asuntos particulares?». ¹²

Diez días después de la posesión de Abdalá Bucaram la prensa ya se sentía autorizada para sospechar. «¿Era necesaria la intervención personal del presidente en las aduanas o se trataba de un show?», interrogaba *Hoy* (agosto 22, 1996). Para fines de año, no quedaba duda: «El presidente Bucaram canta y baila en la teletón organizada por él. Afirma que logró recoger 17 o 18 mil millones de sucres. Al final la teletón dispuso de menos de la mitad de esos fondos. El oscuro manejo del dinero no fue aclarado» (*Hoy*, diciembre 16, 1996).

Del espacio en *off*, el rumor había saltado al de la noticia y allí se inscribieron las denuncias sobre latrocinios atribuidos a Bucaram y sus allegados. A la insinuación de un negociado en la teletón se sumó la del lanzamiento del «Programa de la mochila escolar». Posteriormente, las alusiones acusatorias encontraron un fácil refuerzo en nuevas acciones banales del presidente, que ya no solo atentaban contra la *majestad* del poder sino que, al insinuar-se un fin *non santo*, se miraron como sucesos propios de la crónica roja.

En ese mecanismo retórico se regodeó la prensa escrita al informar que «Abdalá Bucaram entró a Barcelona con el dinero por delante» (*El Comercio*, enero 21, 1997). Luego amplió su mirada al entorno familiar y acicateó la curiosidad por comprobar si su hijo Jacobito celebró con una farra «su primer millón de dólares». Por último, la impugnación moral confluyó con la política y el legislador «Guillén denunció que el régimen permanentemente ha intentado comprar la voluntad de los diputados» (*Hoy*, enero 20, 1997).

La ausencia de pruebas jurídicas no era relevante; la impugnación moral convertida en contexto bastó para proveer de realidad a la referencia del delito. Como recuerda el propio ex presidente, «Durante el golpe y, en los primeros días posteriores a él, los medios se convirtieron en tribunales inquisitoriales. Las declaraciones de cualquier enemigo mío se consideraron prue-

12. *Vistazo*, editorial central, No. 708, Guayaquil, febrero 20, 1997, p. 6.

bas; las publicaciones de prensa, pruebas plenas; los absurdos más descabellados, silogismos perfectos si denigraban a Bucaram y los suyos». ¹³

Un derrotero semejante vivió Jamil Mahuad en los últimos meses de su gobierno. Se inició con el cuestionamiento a la moral del presidente desencadenado por la denuncia del propietario del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, de que «Hubo manejo indebido de fondos, en financiamiento de campaña electoral de Mahuad» (*El Telégrafo*, octubre 21, 1999).

Las dos crisis anteriores —el problema limítrofe con Perú y el congelamiento bancario— no afectaron a Mahuad en su condición de representante del poder, la tercera sí lo hizo. El mandatario solo podía superar la denuncia de Aspiazu a condición de revertir el enjuiciamiento a su moral, ¹⁴ hacia la naturaleza del control financiero privado sobre el Estado, lo cual suponía cuestionar las razones del congelamiento bancario.

Preservar el *statu quo* exigió cumplir con el axioma de que el colectivo —léase los intereses dominantes— están por sobre el individuo y, para que la norma se mantenga, bien podía deconstruirse un representante.

La crisis financiera se desató en marzo del 1999, pero solo en enero de 2000 voces aisladas se interrogaron por su relación con la donación del Banco del Progreso y sus préstamos vinculados. Incluso entonces esas dudas se mantuvieron en el campo del rumor.

La mirada mediática se concentró en una relación personal ajena al nexo entre la política monetaria del gobierno y una forma especulativa de acumulación de capital. Al ingresar al terreno moral, la acusación ubicó culpables individuales. Un candidato a la Presidencia, un banquero encarcelado y un banco cerrado fueron individuaciones que no problematizaban el origen de la quiebra financiera. Sin embargo, Jamil Mahuad había perdido credibilidad ética, fue sindicado política y penalmente, ¹⁵ poniendo en cuestión su propia representación política.

No obstante, el entorno creado por la dolarización propició una efímera reconstrucción de la imagen presidencial. «El presidente Jamil Mahuad de-

13. Abdalá Bucaram, *Golpe de Estado*, Ecuador, Predicciones, 1998, p. 20.

14. Partimos de la noción habermasiana de que la modernidad desinstitucionalizó la moral, al punto en que su único anclaje es la personalidad, comprendido como sistema de control interno del comportamiento. En la misma medida, el derecho se transformó en un poder externo sancionado por el Estado. Ver Jürgen Habermas, *Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón Funcionalista*, México, REI, 1993, p. 246.

15. La denuncia de Aspiazu de que, solo su banco entregó 3 millones de dólares en aportes para la campaña de Jamil Mahuad, cuyas cuentas nunca recibió el Tribunal Electoral, obligó al Congreso a formar una comisión para investigar el uso de fondos electorales. Desde la Función Judicial, la jueza séptima de lo Penal del Guayas llegó a sindicarse al presidente de la República, decisión que concluyó con la remoción de la propia jueza.

«cidió jugarse el todo por el todo para enfrentar la crisis política y económica del país», celebraba la prensa, (*El Comercio*, enero 10, 2000) al tiempo que los partidos del poder y las Cámaras de la Producción daban su visto bueno. Desde la certeza de un consenso entre las élites, *El Comercio* afirmó que, gracias a la dolarización, «Mahuad volvió a granjearse un espacio en el cual el país le otorgará, sin duda, tiempo», (*El Comercio*, enero 16, 2000) y *Hoy* recalcó: «Mahuad recupera popularidad: por el anuncio de la dolarización» (*Hoy*, enero 17, 2000). Así, cuatro días antes de su caída, varios periódicos aún trabajaban en la construcción de la imagen protagónica del presidente.

Dolarizar la economía ecuatoriana nunca fue considerado por los *mass media* como una causal de la caída de Jamil Mahuad. Al contrario, su realización prometía el regreso al orden y, en ese marco, la medida monetaria adquirió carta de naturalidad. «Ecuador ha tomado la vía del no retorno. ‘Es como cuando el conquistador Hernán Cortés ordenó quemar las naves’, es decir no hay marcha atrás para un proceso de dolarización» (*Hoy*, enero 21, 2000). Esta visión del *Miami Herald* reproducía el discurso de la prensa ecuatoriana, pero en boca de una fuente considerada de alta legitimidad –un periódico estadounidense– reforzó la credibilidad de quienes lo citaban.

Para que la dolarización –al igual que la subordinación a los criterios vinculantes en el problema limítrofe o el convenio que entregó la Base de Manta al ejército estadounidense– se mantuviera apromblemática era imprescindible que quien la llevase a cabo dispusiera también de un discurso incuestionado. La élite del poder apoyó las medidas, pero ya no se sentía representada por quien las tomó y, para garantizar su viabilidad, prefirió la conducción de otro protagonista. La sucesión se impuso.

Sin embargo, esta pérdida de representatividad no fue asumida de inmediato por los media, todavía seducidos por la imagen de un Mahuad digno, demócrata, gestor de consensos. Por ello es que a los pocos días, abocado a explicar una caída incomprensible desde la imagen mediática construida, el discurso periodístico se refugió en las condiciones individuales del presidente, insistió en la incapacidad de liderazgo, lentitud y desorganización.

El diagnóstico fisiológico fue el argumento final, «Y todo se deriva, según testimonio de quienes estuvieron en su entorno, de esa trágica condición de impávido, abúlico e irresoluto que [...] se debe atribuir a la lesión cerebral que, para desventura del país y la suya propia, sufrió en abril de 1997».¹⁶ ¿Quién podría dudar de una razón médica? No fueron los intereses de la élite hegemónica los que llevaron al país a la debacle, fue la enfermedad. El individuo quedó definitivamente liberado de todo nexo con el destino colectivo.

16. *Vistazo*, No. 779, Guayaquil, febrero 3, 2000, p. 36.

CUANDO EL MANDATARIO PIERDE REPRESENTACIÓN

Durante su etapa de aspirante presidencial, el protagonismo de Jamil Mahuad se construyó desde la figura del héroe, justiciero, protector del pueblo que, frente a los desafueros de Bucaram, lideró la Asamblea de Quito.¹⁷ Como presidente, revistió el rostro de la víctima: heredó crisis políticas y económicas –semejantes a heredar una maldición familiar–, enfermó, no podía trabajar, no tenía capacidad de decisión, se aisló. En un tercer momento, de corta duración, Mahuad se convirtió en un traidor ante el pueblo. Pero, la prensa recuperó rápidamente a la víctima para la memoria social. Es que, como el melodrama enseña, mientras el traidor convoca a la venganza, la víctima suscita compasión, por tanto desmoviliza.

La imagen de Abdalá Bucaram no atravesó por momentos tan diversos. Como muestra, basta leer la siguiente síntesis: «Abdalá Bucaram representó el papel de Nerón: la Costa fue su Roma Imperial; Quito y la Sierra, la región de los bárbaros; el pan, el circo, los gladiadores, las fieras: su propuesta de gobierno».¹⁸ Su protagonismo transitó del antihéroe plebeyo, torpe y grotesco, justiciero popular contra la oligarquía, mientras fue candidato, al traidor cuando asumió la Presidencia. Bucaram siempre fue culpable.

La construcción de su rol presidencial fue un proceso truncado por la intuición de la emergencia de un contrapoder aún indefinido o, por lo menos, de una expectativa de modificación en la hegemonía dominante.

Aunque no prefiguró un proyecto distinto, la presencia de Abdalá auguró la del inconforme. Su ruptura con la estética dominante no basta para explicar las determinaciones del golpe que lo derrocó, pero sí exhibió su carencia de representación. Como afirmó el propio ex presidente, «Bucaram encarnaba lo absurdo del poder, lo torpe, lo innecesario. No tenía maquillaje suficiente para llegar a la Presidencia de la República».¹⁹

Las acciones de Bucaram fueron cuestionadas por su impertinencia respecto al campo del poder y abrieron un espacio mediático para forjar el consenso alrededor de la locura. Gracias al aporte de fuentes de reconocida legitimidad, este proceso –iniciado aún antes de que Bucaram asumiera el car-

17. Reunión altamente combativa, como lo revelan algunas frases de su Manifiesto: «El pueblo ecuatoriano ha dicho ¡basta!... Está harto de la insolencia y grosería...; está harto de las acusaciones falsas...; está harto de ver cómo el jefe de Estado desprestigia al país y se enorgullece de hacerlo...; está harto de la desvergüenza y de la corrupción institucionalizada...».
Vistazo, No. 707, Guayaquil, febrero 7, 1997, p. 7.

18. Simón Espinosa Cordero, «Pastor y navegante», *op. cit.*, p. 25.

19. Abdalá Bucaram, *Golpe de Estado*, *op. cit.*, p. 351.

go— encontró un eco temprano en la republicación del editorial del *Miami Herald* titulado «El loco ataca de nuevo», según el cual «El presidente Abdalá Bucaram trata en todo lo posible de justificar su apodo de ‘El Loco’, pese a que prometió madurar sus acciones» (*Hoy*, agosto 31, 1996).

Dos meses después de que Abdalá se posesionara, el ex presidente Rodrigo Borja anticipó: «Bucaram es indigno de ocupar la Presidencia» (*El Telégrafo*, octubre 2, 1996) y, un mes después, recurriendo a otro referente también estigmatizado, reafirmó su oposición: «Borja compara a Bucaram con Saddam Hussein» (*El Telégrafo*, noviembre 13, 1996).

Al asumir un protagonismo político directo, la prensa se convirtió en uno de los espacios más importantes para que los sectores opuestos a Bucaram pudieran mirarse a sí mismos, acumular fuerzas y, por último, organizarse. Todo ello precedido por un decidior reclamo de *El Comercio*, (octubre 2, 1996) «Donde está la voz de la oposición? A casi dos meses de gobierno, la oposición no termina de articularse».

Un mes después, «ID declara oposición al gobierno», (*El Telégrafo*, noviembre 19, 1996) «PSC, ID y DP firmaron acuerdo de oposición al gobierno», (*El Telégrafo*, noviembre 29, 1996) «FRA rompe con el gobierno» (*El Telégrafo*, diciembre 11, 1996). Finalmente, el consenso para el golpe había madurado: «Se arma la oposición. Se va cerrando el camino para que el Ejecutivo conforme mayoría en el Congreso» (*Hoy*, enero 7, 1997). Casi parecería que dirigentes y partidos políticos solo esperaban el llamado de los media para desatar la oposición.

Como subordinado, Bucaram no tenía condiciones para producir los acuerdos que las élites dominantes exigían, lo cual se tradujo en la denuncia de su incapacidad para comunicarse. «El gobierno del PRE ha preferido la confrontación al diálogo», fue la afirmación de *Hoy* (enero 16, 1997), a la que el contexto informativo forjado en los meses anteriores convirtieron en verdad incuestionable.

En momentos en que ya se organizaba el golpe, *Hoy* (enero 21, 1997) volvió a recurrir a otra reproducción de una fuente reconocida, esta vez el *New York Times*. «Seis meses después de que Abdalá Bucaram, el auto denominado loco de la política ecuatoriana, llegó al poder en la más irreverente campaña presidencial del hemisferio occidental, parece que no logra satisfacer a las clases poderosas ni a las abandonadas multitudes que lo eligieron». A continuación, en una curiosa particularización del conflicto, la nota señalaba que «Bucaram ha minado su propio plan, cuando saliéndose del tema de su discurso lanzó un prolongado ataque a *Hoy*, un periódico de Quito».

La traducción y reproducción del artículo las realizó el mismo *Hoy*, con lo cual consiguió delegar su denuncia, crear un nuevo sujeto de enunciación y elevar la verosimilitud de lo enunciado. Con ello, el periódico no solo

jerarquizó esa palabra, sino que la convirtió en hecho noticioso, cuya importancia crecía gracias al origen extranjero del medio.

Para inicios de 1997, los pilares del clima de opinión que viabilizarían el golpe de Estado, estaban listos. «Pocas veces, como en estos momentos, el país ha estado tan vacío de sentido, tan huérfano de perspectivas. Pocos mandatarios como Abdalá Bucaram han hecho esfuerzos tan extraordinarios para desorganizar el país, para quebrar toda institucionalidad»,²⁰ afirmó una de las voces oficiales de *Hoy*.

Su protagonismo había transgredido elementos fundamentales para la legitimación de la dominación, la sola presencia de Bucaram cuestionaba las formas de reproducción de la estructura institucional del país. Abdalá Bucaram introdujo formas profanas en el ámbito de la Presidencia y eso era un grave atentado contra lo sacro del poder. De prolongarse ese proceso, se habría resquebrajado la inmunización que la apromaticidad otorga a la dominación.

Cinco meses después de su posesión, la exhibición exhaustiva de «su estilo bufonesco» aportó la acusación que viabilizaría el golpe. *Hoy* (enero 26, 1997) la concretó en el gran titular: «Seguro: el presidente está loco». También en esta ocasión, la *noticia* provino de otra fuente legitimadora, un periódico de Ginebra escribió que «Abdalá Bucaram encarna el populismo más delirante de América Latina». Bucaram había caído.

Primero la locura, luego la enfermedad. La historia reciente demuestra que en Ecuador los presidentes carecen de condiciones físicas o mentales para gobernar. Los media se encargarán de recordarnos esta causal de la tragedia nacional.

En ambos casos, tanto frente al presidente de maneras perfectas como al intruso que irrumpió en la Presidencia, la agenda mediática cumplió con la construcción y deconstrucción de sus imágenes protagónicas. Tras el derrocamiento de Abdalá Bucaram, en febrero de 1997, y de Jamil Mahuad, en enero de 2000, el poder ungió a sus nuevos representantes y los *mass media* se abocaron a su legitimación. Sin embargo, la naturaleza de las movilizaciones que precedió a cada caída presidencial, determinó el uso de dispositivos de comunicación diferenciados, que se reflejaron también en agendas mediáticas distintas durante los gobiernos de Fabián Alarcón (febrero 97-agosto 98) y Gustavo Noboa (enero 00-enero 03).

20. Javier Ponce, editorial publicado por *Hoy*, enero 23, 1997.

CAPÍTULO II

Pasiones que movilizan y temores que ordenan

LA FELONÍA DEL UNGIDO

El humo se esparcía por el Ágora. Entonces Vargas, el líder principal, habló: «El triunfo está más cerca, vamos con energía a esta nueva marcha, no se desanimen, vamos a cortar la mala raíz. Viva el Ecuador, vamos a resistir». Los pífanos y los churos (caracoles) sonaron con fuerza (*El Comercio*, enero 20, 2000).

El llamado se revistió de símbolos que presagiaban una acción ajena a la cultura oficial y suprimía la racionalidad que guió a la movilización del 97, cuya combativa convocatoria anticipaba inclusive que «a las 19h00 habrá un apagón en todo el país». La marcha organizada contra Bucaram contaba con planos del recorrido desde varios sectores de la capital y se anticipaba exitosa, pues «la Coordinadora de Movimientos Sociales y los políticos desfilarán juntos y confluirán al final de la tarde al Congreso. El anuncio lo hicieron los ex presidentes Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja y el alcalde Jamil Mahuad» (*El Comercio*, febrero 5, 2000).

Perder su condición de representante del poder es factor determinante para que un presidente sea sustituido, pero no basta para explicar masas congregadas exigiendo su salida. La movilización social es una respuesta que conjuga factores políticos, económicos, sociales y, en las sociedades mediáticas, también la comunicación colectiva.

La producción noticiosa se orienta, de manera explícita, a satisfacer los requerimientos cognitivos del receptor. Sin embargo, imbricado en ese discurso se halla el estímulo emocional. Lo que mejor comprendemos es aquello que sentimos. Las emociones profundas elevan la memoria de un hecho y la dramatización de una noticia incrementa la efectividad del mensaje, porque interesa y conmueve. De allí la fortaleza del discurso dramático, en el cual reminiscencias simbólicas y religiosas despliegan una dicotomía entre el bien y el mal en lucha, escenario para que la maldad de unos realce la bondad de otros.

Durante su primer año de gobierno, la imagen de Jamil Mahuad fue la de un presidente carente de liderazgo, enfermo y aislado. Era una víctima, de

sí mismo principalmente. Pero, como enseña la lógica del melodrama, la víctima suscita sentimientos de compasión, indiferencia o desagrado. En general, emociones pasivas. El único personaje dramático cuyas acciones pueden desencadenar reacciones dinámicas e, incluso violentas, es el traidor.

Una traición develada es eje aglutinador de traicionados dispuestos a castigar al culpable. Nada es más movilizador que el deseo de venganza, bajo cuyo manto el castigo adquiere el rostro de la justicia. Para fines de 1999, la información desplegada por la prensa escrita dio cuenta de un giro de esa naturaleza en la imagen del ex presidente. Mientras a inicios del mes de noviembre, todavía le exigía que rectifique, para mediados de diciembre su renuncia ya era insuficiente.

El cambio de tono en la relación con Mahuad, se evidenció en titulares centrales y opiniones publicadas luego de que «un sorpresivo acuerdo del Gobierno con los roldosistas permitió el jueves [noviembre 25] la aprobación del presupuesto del próximo año». Aunque la misma nota reconocía que el presidente «desmintió que exista un compromiso para facilitar la llegada del cesado mandatario [Abdalá Bucaram], a cambio de la aprobación del presupuesto», (*El Universo*, noviembre 28, 1999) el acuerdo en el Congreso dejaba sin piso una posible reconstitución de la alianza PSC-DP.

Intuyendo un fortalecimiento del enemigo reconocido, *El Comercio* (diciembre 12, 1999) alertó que «El PRE, que apareció como una llanta de repuesto, parece haber cumplido su misión: ayudar a votar el presupuesto y enviar un mensaje tan claro, como lapidario al PSC: Bucaram puede volver».

La inmortalidad es parte consustancial de todo fantasma. Después del 6 de febrero del 97 –y quizás aún antes– Abdalá Bucaram conquistó esa naturaleza. Años de acción constante de los *mass media* construyeron estigmas que parecían lo suficientemente sólidos para tranquilizar a los conductores del Estado. Sin embargo, el temor al regreso del líder roldosista permanece latente y Mahuad lo reactivó, excediendo su capacidad de presión ante los pilares políticos de su gobierno.

El acuerdo con el PRE insinuó la imagen de un Mahuad que iba semejándose peligrosamente a la de Bucaram. Denunciando este acercamiento, *El Comercio* (diciembre 15, 1999) recordó que «Ocho días antes del 6 de febrero, Abdalá Bucaram visitó ese diario». Aunque para entonces, «El escenario no podía ser peor. Sin embargo, Abdalá Bucaram, negando visiblemente la realidad se dedicó durante el largo diálogo a tratar de tapar el sol con un dedo. Unos días después se cayó». A continuación se establece el paralelo con el gobierno en ejercicio, «Todo parece confirmar que el presidente Mahuad no escapa a esa suerte de fatalidad. [...] Ese contexto no parece haber calado lo suficientemente en el equipo de Carondelet. Ni en el Presidente, quien consi-

dera [...] que él está en la buena dirección. Y las críticas son solo palabras. Eso pensaba Bucaram».

Una vez gestado el paralelo con el presidente derrocado, el destino de Mahuad no podía ser distinto. La voz de mando la dio quien tenía autoridad para hacerlo. Pocos días después de que el gobierno hizo público su acuerdo con el PRE, el ex presidente León Febres Cordero dispuso: «Mahuad debe renunciar al cargo» (*El Telégrafo*, diciembre 10, 1999) y, una semana después, el líder socialcristiano Jaime Nebot informó: «el plazo para que Mahuad renuncie ha concluido» (*El Telégrafo*, diciembre 16, 1999). Dirigentes y analistas políticos no tardaron en sumarse a esa demanda y la prensa ofreció el escenario para su encuentro.

Al aliarse con un elemento satanizado, Mahuad asumió el estigma para sí. El acuerdo con el PRE tornó irreversible su distanciamiento con el PSC, al tiempo que debilitó su relación con la Democracia Popular. Para fines de diciembre, se concretó la idea de una traición presidencial. Una reforma al Código Penal, aprobada por el Congreso a iniciativa de Mahuad, se consideró el camino para anular los juicios penales contra el ex presidente Bucaram.

Repicando campanas de alarma, *El Comercio* alertó que «Abdalá Bucaram debe estar preparando las maletas. [...] La historia le ha dado la razón. No la historia de la Justicia, sino la historia de una política circunstancial, hecha de amarres, arreglo de cuentas y visiones tan chatas como mezquinas». La culpa recayó sobre Mahuad, olvidó que, tres años antes, «hacía parte del grupo que estaba preparando la caída de Bucaram. Ahora, sin taparse la nariz –la expresión es de Vladimiro Álvarez– hace una mayoría para tratar de que Bucaram vuelva» (*El Comercio*, diciembre 23, 1999).

El editorial lleva el significativo título de «La Hoguera de las traiciones». Mahuad fue traidor ante su propia *acción heroica* de febrero del 97, ante quienes estuvieron a su lado en *La Camioneta* y ante quienes le permitieron llegar a la Presidencia de la República. Por ello, su acción era tan sucia que resultaba incomprensible ni siquiera se «tape la nariz» para cometerla.

Esta palabra pronunciada por un periódico de alta circulación, nos permite recordar que más allá de los resultados de una votación –cuyo escrutinio fue siempre de dudosa transparencia–, Jamil Mahuad fue reconocido como un aspirante legítimo a la Presidencia de la República por la alianza de Cusín.¹

Como otro medio escrito precisó en ese entonces, el acuerdo de Cusín actualizó la legitimidad de la victoria –y también de la derrota– de 1997. «Ab-

1. Ex presidentes, ex vicepresidentes, jefes de partidos y representantes de todo el espectro político del establecimiento, tras el cónclave de Cusín (junio 22, 1998) acordaron su apoyo unánime al candidato Jamil Mahuad contra Álvaro Noboa, candidato auspiciado por el PRE y otros sectores marginales.

dalá Bucaram ha vuelto a ser el protagonista del drama ecuatoriano: el terror hacia el retorno de la corrupción y el nepotismo, y no el consenso sobre un proyecto nacional, ha sido el factor unificador de líderes de distintas tendencias de la clase política, la industria y la cultura en torno a Mahuad». ²

El pacto parlamentario con Bucaram rompió la alianza que llevó a Jamil Mahuad a la Presidencia. La felonía del ungido precipitó el desenlace y aportó un elemento de coincidencia entre la oposición de los de arriba y la de los de abajo. El mes de enero de 2000 fue de creciente movilización y la prensa contribuyó activamente. Como una bola de nieve, la publicación cada vez más frecuente de declaraciones que exigían la renuncia del presidente, estimuló la incorporación de nuevos sectores a la oposición.

Es así como se establece un clima de opinión. Gracias a la moral, la retórica periodística aproxima el discurso político a lo cotidiano del imaginario mediático, contribuyendo tanto a la movilización como a la desmovilización social. Así, el discurso dramático promociona consensos, diluye disensos, eleva creencias y consolida el *statu quo*.

SOLO SE TRAICIONA A LOS PROPIOS

La traición también había demostrado su potencial generador de emociones movilizadoras durante el derrocamiento de Abdalá Bucaram. Solo que, a diferencia de Mahuad, Bucaram no podía traicionar a una élite que se opuso a su triunfo y a su gobierno. Un traidor solo puede serlo ante los propios; Abdalá debía traicionar a los marginados.

Aquella ocasión, el detonante fue la supresión de los subsidios, en especial al precio del gas de uso doméstico, medida que permitió denunciar al presidente por incumplir sus promesas de campaña. ³

Fue un «Abdalazo a todo bolsillo», tituló irónicamente *Hoy*, (enero 9, 1997) apuntando a la construcción de una opinión mayoritaria de rechazo a la medida. La construcción de un clima de opinión se dinamiza gracias a connotadores específicos y, uno de los más importantes, es la diagramación de la prensa escrita. Este es un universo semántico compuesto por titulares, colores, fotografías y pies de foto.

2. *Vistazo*, No. 740, Guayaquil, junio 18, 1998, p. 25.

3. Alrededor de la supresión de los subsidios se dio una verdadera batalla informativa. Se inició con la información extraoficial de que el tanque del gas llegaría hasta 18 000 sucres (*El Comercio*, enero 8, 1997) para a día seguido aclarar que el incremento se había pensado a 15 000 y que el gas quedaría en 10 000 sucres. La prensa había añadido, sin soporte oficial, un incremento del 80% al precio del gas, acicateando el enojo popular.

De ese conjunto emerge la fuerza de la imagen. Una fotografía está fuera de todo cuestionamiento, puede dar fe de la autenticidad de un suceso. Por ello, imágenes de ancianos, jóvenes, hombres y mujeres, marchando en varias ciudades del país confirmaron la naturaleza popular de la oposición a las medidas tomadas por el gobierno roldosista. El pie de foto generalizó la movilización y la volvió de todos: «A los cinco meses de gestión, el gobierno de Abdalá Bucaram enfrentó ayer las primeras protestas masivas. La causa: el paquetazo. Jubilados, maestros, estudiantes y desempleados salieron a las calles» (*El Comercio*, enero 9, 1997).

Con ello, la prensa asumió el papel de *vocero de los desposeídos*. Reclamó contra el alza del precio del gas, porque se resolvió «sin mediar consideraciones sobre sus efectos en la sociedad, menos todavía en más del 60 por ciento de la población, formada por los pobres» (*Hoy*, enero 9, 1997). Exigió «compensaciones sociales apropiadas», pero cuando el gobierno anunció un bono de 84 000 sucres [alrededor de 24 dólares], tampoco fue aceptado porque «aunque el gobierno no sabe aún cuanto le costará el ofrecimiento, lo hizo» (*El Comercio*, enero 21, 1997).

Para ese momento ya no importaba lo que dijera o hiciera Bucaram, cualquiera acción sería rechazada y siempre en nombre de los más pobres. Argumento que encontró un importante pilar de legitimación en las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, José Mario Ruiz: «La Iglesia pide que no sean los pobres los sacrificados con las medidas económicas» (*El Comercio*, enero 29, 1997).

Ya organizada la inconformidad popular liderada por la élite política, la supresión de los subsidios aceleró el derrocamiento de un gobierno caído. Las medidas de ajuste fueron el factor movilizador para los de abajo, así como la *falta de decoro* lo fue para los sectores medios.

Además, este paquete económico era una *traición anunciada*. Ya el 7 de agosto del 96, tres días antes de que Abdalá Bucaram se posesionara como presidente, los media consideraron que en su gira por Estados Unidos dejó entrever el destino de su gobierno, razón por la cual «el sector laboral se coloca ahora en actitud defensiva. Considera que Abdalá incumple ofertas de campaña» (*Hoy*, agosto 7, 1996).

Si esa noticia pudo publicarse –si resultó verosímil para el periodista y el medio– cuando el presidente ni siquiera había asumido el cargo, es fácil entender por qué seis meses más tarde «Los trabajadores no creen en las buenas intenciones de Abdalá Bucaram» y los sindicatos declaran «La Ley del hielo a Bucaram» (*Hoy*, enero 28, 1997).

Una semana después, el mismo periódico informó que «nueve de cada diez ecuatorianos han expresado su respaldo para el paro nacional que se celebra hoy en protesta contra el Gobierno del presidente Abdalá Bucaram y, en

especial para oponerse a la brutal alza del costo de la vida, la corrupción y los atropellos del régimen» (*Hoy*, febrero 5, 1997).

Una vez constituida la opinión dominante, ésta se legitima exhibiéndose como mayoritaria. En esas condiciones, lo que resulta extraño es que aún un diez por ciento de los encuestados haya declarado una posición contraria, exponiéndose al aislamiento social con que se castiga a quienes disienten de la mayoría.

La eliminación de los subsidios a los combustibles fue una decisión unánimemente repudiada por la «nación ecuatoriana», según se desprende de la indignación periodística en defensa de los pobres. Pero extrañamente, cuando Bucaram anunció la supresión de estas medidas, la indignación fue aún mayor. «Abdalá Bucaram se fue del poder malogrando el mandato de su sucesor. Con el precio del gas a 2 900 sucres, sin el alza de las tarifas eléctricas y con un precio congelado de los combustibles», reclamó *Hoy*, (febrero 7, 1997) en noticia de portada –no lleva formato de editorial ni de análisis–, al día siguiente del derrocamiento. Bucaram había traicionado también a su sucesor, fue incapaz de dejar hecho el trabajo sucio y, quizás, eso era lo único que las élites esperaban de un marginal en la Presidencia.

Una vez caído el gobierno del PRE, incluso la convertibilidad ya no era tan mala. Pocos días después, una diagramación adecuada del mismo diario –también esa ocasión en portada y con formato de noticia– relievaba que mientras «Hace apenas una semana se hablaba de un crecimiento superior al cuatro por ciento y de una inflación anual menor a 10 puntos porcentuales (si se cumplía el plan de convertibilidad). Hoy todo ha quedado en el olvido» (*Hoy*, febrero 10, 1997).

Esas publicaciones dan cuenta que la caída de Bucaram fue resuelta al margen del paquete económico y sugieren que elementos de ese «paquetazo» encontrarían continuidad en gobiernos posteriores;⁴ aunque entonces el destino de los recursos no sería programas de vivienda popular sino el salvataje bancario.

Otro elemento constructor de la opinión dominante que condujo el derrocamiento de Bucaram fue la intervención del embajador estadounidense. Leslie Alexander consideró que «Ecuador se está ganando ‘una reputación’. El Ecuador debe perder millones de dólares, debido a los actos de corrupción en el proceso de privatización», según recogió *El Comercio* (enero 30, 1997). A continuación, la interpretación del reportero convirtió la denuncia en ame-

4. El 1 de octubre de 1998 se dio el primer paro nacional contra medidas tomadas por Jamil Mahuad. La impugnación principal fue a la supresión al subsidio al gas de uso doméstico, cuyo precio se elevó en 25 000 sucres.

naza: «O se corrige el problema o el embajador de EE.UU., Leslie Alexander, pedirá a sus conciudadanos que no inviertan en el Ecuador».

Las palabras del diplomático norteamericano tuvieron la más alta difusión en la prensa nacional. Aunque el gobierno roldosista no había puesto en venta ningún bien estatal, el contexto de opinión forjado durante los meses anteriores era propicio para aceptar como verdadera cualquier alusión a «actos de corrupción». El cuestionamiento pasado proporcionaba credibilidad a la denuncia presente.

La prensa actuó como alto parlante. «Penetrante corrupción», «Estados Unidos denuncia corrupción estatal», «Denuncia al mundo», «Alexander logró lo que nadie pudo», fueron algunos de los titulares publicados el 31 de enero, cuyo creciente dramatismo demostraba la empatía ideológica entre el diplomático y el periodismo nacional. En tanto la palabra provenía de una fuente de máxima legitimación –nada menos que el embajador norteamericano–, aparecieron con rapidez voces que lo secundaron. Es que «la lengua se suelta cuando uno se siente en armonía con el espíritu de la época».⁵

Quien se mostrase en desacuerdo, se asumía miembro de la minoría estigmatizada y sería objeto de acusación pública. Ese fue el caso del secretario de la Administración, porque –como afirmó la misma publicación– «Con cinismo, sostiene que ‘está de acuerdo con las expresiones del embajador de EE.UU.’, cuando las palabras del representante de la primera potencia mundial y fuente de las mayores inversiones extranjeras, condenan sin duda a la actual administración».

Las declaraciones de Alexander auspiciaron una amplia movilización de los mayores gremios económicos del país: «Cámaras coinciden con lo que dijo embajador de Estados Unidos [...] porque el nombre del Ecuador se deteriora seriamente en el plano internacional» (*El Universo*, febrero 5, 1997).

Y, en decisión saludada por la prensa como «hecho inédito en el Ecuador: el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción de Pichincha decidieron sumarse a la jornada de protesta del 5 de febrero»⁶ (*El Comercio*, enero 22, 1997). Los empresarios también enarbolaron la bandera de los más

5. Como afirma Noëlle-Neumann, el estatus de quién dice se da por lo que dice y viceversa. Un discurso legítimo que nace de una fuente legítima, estimula pronunciamientos semejantes. Ver Elisabeth Noëlle-Neumann, *La espiral del silencio: opinión pública nuestra piel social*, Buenos Aires, Ediciones Paidós, 1995, p. 44.

6. Como un ejemplo de la novedad en que se sepulta la memoria social, esta calificación de «inédito» revela amnesia. «Las Cámaras de Guayaquil conceden plazo hasta lunes a Junta Militar de Gobierno», fue el titular con el mismo *El Comercio* (octubre 3, 1966), anunció la incorporación de los gremios de la producción al paro que precipitó la caída del gobierno que entonces dirigía el país.

pobres y confirmaron que el «Paro será por el bien del país» (*El Telégrafo*, febrero 5, 1997).

Para entonces, León Febres Cordero ya había anunciado el fin del gobierno de Bucaram, señalando que «en el país existe una rebelión, que Bucaram se expone a ser destituido por el Congreso y que se ha convertido en rey de burlas a nivel internacional».⁷ Al igual que en 2000, su palabra fue decisiva. A ella plegaron la dirección de partidos políticos y organizaciones sociales. Era la palabra que sería difundida por los medios como la opinión de todos, el exigido consenso.

PRENSA PARTIDARIA Y MOVILIZADORA

El discurso dramático contribuye a crear climas de opinión favorables –o desfavorables– a la movilización social y quienes trabajan en los *mass media* no son ajenos a ese efecto. Una prensa movilizadora es también una prensa movilizadora.

Los periodistas no participaron en la rebelión que precedió al derrocamiento de Mahuad, acción a la que calificaron de antidemocrática. En cambio, en 1997 se reconocieron parte del pueblo *traicionado* por Bucaram y marcharon hasta el Palacio de Gobierno, «en defensa de la libertad de expresión y en rechazo a los ataques de algunos funcionarios del régimen contra la prensa» (*Hoy*, enero 10, 1997). Considerada por sus realizadores como «significativa y realmente sin antecedentes», la protesta contó con una amplitud informativa que magnificó tanto la acción como su *carácter democrático*.

Ese hecho se inscribió en la institucionalidad de la República. Institucionalidad también defendida por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), al enfrentarse a la cadena gubernamental *La Chimenea*. Cuando «Bucaram ‘desenmascaró a la oposición’ y cuestionó a los diputados, a quienes culpó de la adopción de las medidas económicas y de ‘prostituir la justicia’», (*El Telégrafo*, enero 25, 1997) AER exigió que se pregrabe el programa «para evitar que el espacio se convierta en una tribuna para agredir verbalmente o para presentar un informe de obras y de acciones». Los dueños de radiodifusoras, auto designados gran censores del gobierno, advirtieron que, «cuando algún funcionario se exceda, se detendrá y se corregirá». Para ser admitida, la palabra del presidente debía someterse a la censura de los medios, ellos garantizarían que sea *adecuada* para el oyente. Así, los *mass media* se erigieron en interlocutores entre ciudadanía y gobierno.

7. Entrevista a León Febres Cordero, *Vistazo*, No. 707, Guayaquil, febrero 7, 1997, p. 15.

En claro contraste, a la palabra de Jamil Mahuad siempre se la supuso pertinente. Mahuad fue un presidente mediático, mimado y aupado por los media, primero como alcalde, luego como candidato y, finalmente, como presidente. Su ruptura final dejó un sabor a nostalgia en la prensa, una sensación de pérdida que se prolonga en la imprecisión con que se leen las causas de su caída y en los ambivalentes sentimientos que su derrocamiento despierta.

Así se explica que, un día después que el Congreso declarara vacante la Presidencia, *El Comercio* evaluara: «Sube Jamil Mahuad: El ex presidente de la República enfrentó a los golpistas al negarse a renunciar a su cargo. Luego de ser derrocado tuvo un buen gesto y pidió apoyo a todos los sectores políticos, sociales y económicos para respaldar a Gustavo Noboa en sus funciones». Por supuesto, Mahuad sube mientras «Baja Antonio Vargas» (*El Comercio*, enero 23, 2000).

Un año antes, cuando el gobierno empezó a evidenciar dificultades, esa misma prensa había ofrecido otra oportunidad al mandatario. «Presidente, haga un pacto con la nación» tituló entonces la carta abierta que urgía por «un acuerdo nacional y un nuevo contrato social» (*El Comercio*, febrero 3, 1999). Tras esa demanda, se mantenía latente el fantasma del regreso de Abdalá Bucaram y la exigencia, a Mahuad, de volverse a diferenciar de él.

La carta precisaba: «Tras el triunfo electoral del populismo, muchos en la nación se tornaron hacia las élites políticas. Ese fue, Usted lo recuerda, un voto de confianza que, a la postre, fue malgastado por aquellos que, a pesar de la catástrofe nacional que tanto evocan, solo viven pendientes del calendario electoral». Mahuad había sido llamado a soldar esa ruptura entre «la nación» y las élites; el periódico lo vindicó por no haberlo logrado.

A través publicaciones de este tipo, varios medios asumieron un protagonismo político directo. Del análisis pedagógico de la coyuntura, pasaron a la prescripción de una solución y concluyeron exigiendo acciones. Similar fue la carta abierta enviada a Bucaram por *El Comercio* y convertida en noticia, gracias a su reproducción por otros diarios: «Ayer, diario *El Comercio* de Quito publicó una carta abierta de casi una página, titulada ‘Señor presidente no siga amurallándose’, donde se invita a Bucaram a negociar, concertar y construir» (*El Telégrafo*, enero 27, 1997).

Entonces, el periódico recordó al presidente: «Usted no era, y lo sabe, el candidato de las clases dirigentes». Reclamó: «Varias veces la redacción de este Diario ha solicitado una entrevista con usted. Sin resultado. Le hemos querido preguntar ¿por qué su Gobierno parece animado de un afán autodestructor?». Amenazó: «no habrá más concertación porque usted responde a un clamor nacional —expresado en un paro pacífico— con mano de hierro». Exigió: «sosiéguese señor presidente». Y aconsejó: «No se amuralle como lo está haciendo». Finalmente, anunció: «Mañana este Diario enviará, con el mis-

mo sentido de país, una carta a la nación ecuatoriana» (*El Comercio*, enero 26, 1997).

La capacidad de crear climas de opinión no se reduce al discurso editorial de un periódico, éste es solo un complemento de la retórica dramática. Menos visible, pero más efectiva, es aquella información que bajo el formato de noticia contribuye a gestar estados de ánimo en la población.

En el caso de Bucaram, la posición de los media fue unánime. La ruptura se inició aún antes de su posesión, en los meses siguientes solo se confirmó. Aunque no haya sido la intención del autor, el editorial que encaró a la prensa por ubicarse «en la primera línea del frente para conspirar en la caída de Mahuad», para luego añadir: «La prensa pide al Presidente que reconozca sus errores. Debería ella reconocer los suyos, sobre todo este último monumental de apoyar el caos»,⁸ no dejó de reproducir la denuncia del gobierno de Abdalá Bucaram sobre el papel semejante que los media cumplieron dos años antes.

Seis meses de campaña confirmaron lo espurio de la presencia de Bucaram en la Presidencia de la República y consensuaron los intereses dominantes con los prejuicios estéticos de la clase media. La dramatización en el enunciado motivó al lector, más allá del contenido informativo. Finalmente, conceptos como corrupción, indignidad y derrocamiento se entrelazaron en un solo significado.

Guardiana de la moral y la estética dominantes, la prensa fue el escenario de la confluencia opositora. Una fotografía del Loco que ama, cantando el *Rock de la Cárcel* junto a una bailarina que exhibe sus piernas junto a la indignidad presidencial, fue profusamente difundida en Quito y Cuenca los días del golpe. Gracias a mecanismos como ese, el discurso simbólico ratificó que Bucaram «avergonzó» al país y «denigró» la majestad de la Presidencia.

La realización de la vocación performativa de la palabra, evidenció la existencia de un sistema de valores socialmente aceptado, gracias al cual el lector fue empujado a la acción y la información devino llamamientos, órdenes y movilizaciones. Las retóricas con que la información se despliega, forman parte de la naturaleza de *mass media* que inevitablemente toman partido, son espacio de polémicas, decisiones, apoyos o confrontaciones.

En Ecuador ello no es nuevo, baste recordar la incidencia de los media en la sindicación, juicio y salida del vicepresidente Alberto Dahik, en 1995. Desde entonces, su protagonismo político se ha robustecido, diversificando sus funciones y sentidos, al grado en que durante «la coyuntura de Bucaram los medios se convirtieron en coprotagonistas del proceso con sus propios intereses. Cuando Mahuad, los medios ocultaron la información respecto al

8. Simón Espinosa, «Nosotros», *Hoy*, enero 2, 2000.

asalto del milenio. Y si dijeron algo no lo denunciaron con la suficiente fuerza».⁹

CAMBIAR UN PRESIDENTE, RECREAR EL PODER

En febrero de 1997, la movilización fue única; el movimiento popular se mantuvo a la sombra de un colectivo que adscribió al poder. En enero de 2000, dos movilizaciones con orígenes distintos confluyeron en un fin único para, casi de inmediato, volverse a diferenciar.

Las voces que difundió la prensa escrita dieron cuenta de esa dualidad. Frente a Mahuad, su deslealtad con los de arriba encontró un complemento espontáneo en aquello que los de abajo consideraron un engaño.¹⁰

El recambio presidencial debía responder a un acuerdo entre las élites, era un problema de gobernabilidad.¹¹ De allí que la sucesión precisara de la anuencia de los votantes, pero no de una movilización de sectores populares con pretensiones protagónicas como las que exhibieron las organizaciones indígenas en enero de 2000. Allí surgió un nuevo peligro y, frente a él, la prensa estimuló la idea de que el eje del problema radica en la naturaleza misma de la democracia ecuatoriana, constituyendo al «bloqueo» en categoría permanente de análisis.

Sintetizando el panorama político al momento de la caída de Mahuad, *El Comercio* desplegó un imponente titular de portada: «Las lógicas en contravía se acentúan». Pasando del discurso descriptivo al explicativo, esa primera apreciación se sustentó en un singular análisis en páginas interiores: «El país tiene el secreto del bloqueo» y, para superarlo «una mediación se revela necesaria. No entre el Gobierno y los movimientos en abierta rebelión, sino

9. Esta afirmación corresponde a Fernando Buendía en entrevista titulada «Un enfoque crítico sobre los medios», *El Comercio*, junio 13, 2000.

10. Como lo sintetiza Alfredo Castillo, en editorial titulado «La capitulación del poder»: «El último año y medio asistimos a una subrepticia cesión de la soberanía. Se encubrió (para no reconocer la derrota) la irresponsabilidad en la fijación de límites con Perú, con la ‘caballerosa’ fórmula de aceptación de ‘criterios vinculantes’. [...] Por eso, la rebelión del 21 de enero –pese a todos sus límites– insurgió contra esa infamia y por sentimiento de orgullo nacional». (*El Telégrafo*, marzo 8, 2000).

11. Asumimos el concepto desarrollado por Coppedge, para quien «la gobernabilidad es el grado en que las relaciones entre los actores poderosos obedecen a unas fórmulas estables y aceptadas», lo cual supone que «sólo los actores poderosos son capaces de crear los disturbios al orden público o a la economía que consideramos síntomas de ingobernabilidad». Ver Michael Coppedge, *El concepto de gobernabilidad*, Quito, Cordes, 1996, p. 28.

entre éstos y el país para admitir dos hechos: al poder se llega por las urnas y en el país hay enorme factura social por pagar» (*El Comercio* enero 21, 2000).

Para el diario, no había ruptura entre el gobierno y el país. No es el poder quien ha dejado de representar los intereses nacionales, era solo uno de sus representantes. Una vez sustituido el mal funcionario, todo volvería a la normalidad. No obstante, quedaba pendiente el peligro surgido por la incurción de un elemento ajeno a la relación entre el gobierno y «el país». Para contrarrestarlo, los indígenas fueron señalados como tercer actor, «cuyas posiciones extremas» conducían al «bloqueo del diálogo social y los trastornos, y ahonda la crisis» (*Hoy*, enero 21, 2000). En síntesis, era la acción indígena la que atentaba contra el pueblo.

En esos editoriales centrales, publicados el día de la rebelión popular por los dos periódicos de mayor circulación en Quito, el nombre de Jamil Mahuad ya no aparece. El protagonista individual fue semantizado por ausencia, lo que contribuyó a consolidar la demanda institucional tras la salida del representante temporal. La sucesión presidencial no tenía por qué significar ruptura, bastaba desplazar al rostro manchado por una cara limpia que asegurase continuidad, estabilidad, superación de la crisis.

Encasilladas como minorías distintas al pueblo, las organizaciones indígenas carecen de derechos para determinar la conducción del país. Su condición de actores era inocultable, pero seguían siendo protagonistas ilegítimos. «En esta ocasión, el ‘levantamiento’ [...] no ha tenido la espontaneidad de oportunidades anteriores, por lo que no cuenta con la adhesión suficiente como para comprometer la estabilidad del régimen, más preocupado en dar forma a un vuelco en el sistema monetario, la dolarización», informó *Hoy*, (enero 21, 2000) estimulando la percepción de estrechez en el movimiento popular.

El escenario se había desplazado resignificando a los propios actores. El discurso informativo se centró en enfocar al gobierno, al Parlamento, los indígenas, los militares. Enfocó actores colectivos con representaciones individuales de bajo perfil.

Ese protagonismo colectivo fue resaltado por el titular de portada de *El Comercio* (enero 14, 2000), «Ejército e indígenas están listos». Ilustrado por una gran fotografía de un primer plano de escudos antimotines de la Policía que convirtió a los uniformados en barrera infranqueable para la masa de anónimos indígenas que, desde el otro lado, miraban absortos el despliegue de fuerza.

El texto al pie ofrece un anclaje preciso, indica al lector qué debe extraer de la escena representada, qué conocer de lo sucedido, que retener y qué pasar desapercibido. Una función semejante cumplen los titulares. El título central define el suceso que domina el conjunto, organizando la clasificación

de la información publicada. Es un sendero para jerarquizar la lectura, superar las diferencias y homogeneizar su comprensión.

La prensa aportó con la dramatización necesaria para que la caída de Mahuad fuese, no solo un hecho predecible, sino necesario. El clima de opinión que estimularon los *mass media* promovió una movilización controlada, destinada exclusivamente a exigir la renuncia del presidente. El discurso simbólico jugó un doble papel, al tiempo que estimuló la movilización social, procuró su contención, anunciándola como un «Levantamiento a medias» (*Hoy*, enero 17, 2000).

Mahuad debía ser sustituido, pero garantizando la continuidad institucional. Con títulos como «Protesta continúa y el diálogo en espera», (*Hoy*, enero 21, 2000) los periódicos mantenían la expectativa de una reconciliación.

La movilización que se esperaba de las organizaciones sociales, de derechos humanos, barrios, sindicatos, respondía a un estímulo moral. Cuestionaba a un protagonista que perdió legitimidad, abriendo paso a la sucesión. Una movilización de estas características bien podía inscribirse en los canales de participación institucional, debió haber sido la continuación de febrero del 97.

DE PUEBLO ORDENADO A POPULACHO VANDÁLICO

«Hoy habla el país» fue el saludo de diario *Hoy* a la huelga general del 5 de febrero de 1997. «Este día se desatarán las tensiones políticas acumuladas en los últimos seis meses en el Ecuador», informó en su portada. Los media reconocieron la presencia —entonces sí *democrática*— de un pueblo que, en las calles, demandaba la salida de un presidente por los canales que el orden determina.

En cambio, en enero de 2000, la presencia indígena con el respaldo de algunas organizaciones gremiales y un sector de militares jóvenes abrió un espacio no previsto por la institucionalidad. Los insurrectos rompieron con un proceso de sucesión que se preveía legal y ordenado.

Esa distinta percepción de las movilizaciones que precedieron a los dos derrocamientos obedece también a la naturaleza distinta de sus protagonistas principales. En 1997, era el presidente Bucaram quien atentaba contra la institucionalidad y la movilización popular apuntó a su restauración, reconociendo al Congreso Nacional como instancia legítima de resolución. Al contrario, Mahuad siempre protegió las formas institucionales, fue la movilización indígena quien las negó irrumpiendo en espacios-símbolo del poder.

La fase conclusiva del gobierno de Bucaram se inició con el llamado a un paro nacional. El 9 de enero, se difundió la noticia de que «Los sindicatos convocan a una huelga general para el 5 de febrero, en protesta por las medidas económicas y la corrupción».¹² El día 18, *El Comercio* informaba: «El paro tiene su propia lista de demandas. Una de ellas, exigir al gobierno que derogue el ‘paquete económico antipopular’, que contempla el incremento de los precios del gas, combustibles, pasajes de transporte público y las tarifas de servicios públicos».

El liderazgo de las organizaciones sindicales, conducidas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), determinó el horizonte de la plataforma reivindicativa. Inicialmente circunscrita a los andariveles de la protesta gremial, uno de sus dirigentes afirmó que «no se pretende desestabilizar al régimen».¹³ En un segundo momento, el apoyo de diversas organizaciones, aglutinadas tanto por la Coordinadora de Movimientos Sociales como por las Cámaras de la Producción, politizó la exigencia y demandó al Legislativo que enjuicie al Ejecutivo.

Posteriormente surgió, desde los sectores que tomaron la Catedral Metropolitana de Quito, la propuesta de «una Asamblea Constituyente, la dimisión de Abdalá Bucaram y la formación de un gobierno transitorio de consenso» (*El Comercio*, enero 31, 1997). Pero esa posición se diluyó rápidamente, aceptándose el interinazgo de Fabián Alarcón.

En contraste, en enero de 2000, la movilización popular surgió bajo el liderazgo de una estructura étnica, la Conaie, con proyección política en el Parlamento de los Pueblos del Ecuador. La instancia era, por su propia nominación, el germen de un espacio extra institucional y su posición se plasmó en el Mandato de esa organización que, el 11 de enero, «asume plenos poderes para decidir el nuevo rumbo económico, político, administrativo y moral de la patria».¹⁴

Así, las demandas del movimiento étnico rebasaron, desde su origen el horizonte de lo gremial. Su planteamiento inicial fue la renuncia de Jamil Mahuad, no solo por ser un mal funcionario sino como representante de un Estado en decadencia, lo cual volvió inevitable la exigencia de sustituir también a los miembros del Legislativo y el Judicial.

En febrero del 97, el pueblo que salió a las calles –principalmente a la avenida de los Shyris en el norte de Quito– se mostró disciplinado, ordenado,

12. Información recogida por «Cronología de los acontecimientos», *El Universo*, febrero 8, 1997.

13. Declaración de Jorge Loor, presidente de la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, *Hoy*, enero 15, 1997.

14. «Mandato del Parlamento de los Pueblos del Ecuador para la Salvación Nacional», reproducido por 21 de enero: *la vorágine que acabó con Mahuad*, Quito, *El Comercio*, 2000, p. 263.

honrado, higienizado, homogeneizado. La concentración evidenció el control corporal¹⁵ que el poder ejerce sobre sus subordinados, ratificando la importancia de la vigilancia, más que del castigo, en la reproducción del orden estatal.

Como resaltó *El Comercio*, (febrero 6, 1997) «Industriales, banqueros y políticos reconocidos confluyeron en la exclusiva zona quiteña. Fue curioso, no sólo que se olvidaron de sus corbatas sino que empuñaron banderas con crespones negros¹⁶ y se unieron al coro ‘Que se vaya Bucaram’».

La mirada mediática sobre enero del 2000 fue diametralmente opuesta. Abundantes titulares, fotografías y textos dieron cuenta de que el pueblo ordenado se había transformado en *populacho* y, además, rebelde. La canalla tomó las calles y exhibió su naturaleza violenta, destructora, agresiva. Masas de sensibilidad exacerbada pusieron en escena emociones y pasiones, llegando a agredir a ciudadanos honrados, a funcionarios públicos que circulaban por el sector que ellos controlaban.¹⁷ Carente de guía, se reveló dispuesta a la violencia y el caos.

Junto a su radicalización, la dirección indígena evidenció una disposición *antidemocrática*. Se dirigieron al Ministerio de Defensa, pidiendo «intervenir a los militares en nombre de los 12 millones de ecuatorianos, con el fin de evitar una conflagración social de impredecibles consecuencias», según informó *El Universo* (enero 20, 2000).

Pero las normas constitucionales obligan a dirigir una solicitud de estas características al presidente de la República o –si éste tiene las horas contadas como en el caso de Mahuad– al Congreso Nacional. Para eso están los representantes democráticamente elegidos por el pueblo, en las urnas, y no las Fuerzas Armadas que deben mantenerse obedientes y no deliberantes.

No obstante, para que este mensaje llegase al receptor y este admitiese el carácter «antidemocrático» de la lucha indígena, era necesario que periodista y lector compartiesen otros supuestos. Por ello, la prensa destacó la ruptura de las normas cuando la «Conaie muestra su fuerza», (*El Universo*, enero 20, 2000) y se pretende actor legítimo y protagónico de la política ecuato-

15. De Bourdieu retomamos la noción de que la sumisión inmediata al orden estatal, no responde tanto a estructuras cognitivas cuanto a disposiciones del cuerpo, que responde a los «llamados al orden» sin pasar por las vías de la conciencia y del cálculo. Ver Pierre Bourdieu, *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*.
16. «Industriales, banqueros y políticos» portando «crespones negros», la imagen se volverá familiar en posteriores movilizaciones regionalistas.
17. Bajo el título de «Cercos y humillación en el Parlamento» se describía que «Los indígenas, cada vez en mayor número, optaron por ‘cercar el cerco’ tendido por el Ejército y la Policía y humillaron a los ciudadanos que se atrevieron a pasar junto al sitio», *Expreso*, enero 21, 2000.

riana. O cuando Antonio Vargas reafirmó que «A nosotros no nos interesa cojer el Palacio, ni el Congreso, lo que queremos es el cambio total».

Es que los media estaban prevenidos. La «naturaleza antidemocrática» de los líderes indígenas ya se insinuó en febrero del 97. «Al buscar la salida del presidente Bucaram, ¿dónde quedan las reglas del juego de la democracia?», fue la pregunta a la que Antonio Vargas respondió: «No es sólo la salida de Bucaram sino de todo su grupo. [...] No queremos que vengan los mismos partidos políticos» (*El Comercio*, febrero 1, 1997). Entonces, como ahora, el jefe de la Conaie hizo gala de un peligroso irrespeto a las instituciones y a su *democrática* esencia.

La rebelión de la Conaie, en enero de 2000, fue una acción disruptiva ya que la exhibición de fuerza del dominado es inadmisibile, el no-poderoso no está autorizado para demostrar poder.

LA IRRUPCIÓN DEL MARGINAL CORPORIZÓ EL MIEDO

Un pueblo vengador es una imagen heroica solo a condición de garantizar su límite y temporalidad. Pero, cuando una movilización social excede los espacios que la institucionalidad prevé, aquellos asimilables por el orden instituido, surge la amenaza del caos y, frente a ella, el miedo se impone. La rebelión del 21 de enero quebrantó la certeza que el *statu quo* promueve y la sociedad mestiza volvió su mirada a la institucionalidad en búsqueda de estabilidad, de continuidad, del «malo conocido» que siempre será mejor que «el bueno por conocer».

La retórica dramática de la prensa, sustentada en un temor forjado por siglos de colonización y recreado por las relaciones cotidianas de dominio, reforzó la frontera identitaria que «engendra la diferencia como inferioridad y, por consiguiente, legitima la dominación de la población indígena por la ciudadana blanco-mestiza».¹⁸ De allí que la palabra que estimula el miedo estuviera básicamente dirigida a los sectores medios, llamados a contener la movilización de los de abajo, antes de que el uso de las armas se torne inevitable. El miedo al Otro actuó como gran desmovilizador.

«La Conaie suma y asusta» fue el titular que antecedió a la información de que los «indígenas cometen excesos» (*Expreso*, enero 21, 2000). Notición eficazmente reforzada por una fotografía que, a todo lo ancho de la por-

18. Andrés Guerrero, «Ciudadanía, frontera étnica y compulsión binaria», *Iconos*, No. 4, Quito, FLACSO, marzo 1998, p. 114.

tada, daba cuenta de un grupo de indígenas realizando rituales shamánicos en las afueras del Palacio Legislativo, encabezados por «un ciudadano con un atuendo que representa la muerte del actual sistema».

La imagen –que en otro momento pudo ser leída como una expresión de *folclor* andino– adquirió sentido político gracias al explícito discurso escrito que le acompañaba. La fotografía reforzó la palabra y devino documento gráfico que daba fe de la orientación periodística.

La construcción del miedo social hacia los indígenas dejó en su camino huellas decisivas, como la supuesta amenaza de que «En la toma de Quito habría 50 000 muertos». Título de portada de diario *Hoy* que tuvo por toda fuente *cálculos* realizados por un reportero sobre la base de declaraciones de un dirigente de la Conaie, según los cuales, «un millón de indígenas y manifestantes ingresarán a Quito en busca del poder. Admitió que la represión podría significar la muerte del 5% de ellos» (*Hoy*, enero 14, 2000).

Aunque la información fue desmentida por la Conaie, por considerar que hablar «de un levantamiento que cueste 50 000 muertos es hablar de un estado de guerra y desvirtuar el sentido de una forma de protesta»,¹⁹ la relevancia dada a la primera noticia y, sobre todo, el tono extremadamente dramático de su titular garantizó su permanencia en la memoria del lector.

El ejemplo nos remite no tanto a un conflicto surgido del escaso profesionalismo de un reportero, cuanto a la veracidad noticiosa. Es necesario recordar que en la lógica de la producción informativa no existe un anhelo de engañar al lector, el periodista está sometido a las reglas que estructuran el campo y su trabajo se inscribe en ese hábitus, generalmente sin conciencia de ello.

Anticipar que habrían «50 000 muertos» en la toma de Quito, solo era posible por la existencia de prejuicios sociales de larga data. Su aporreada aceptación por el reportero, jefe de sección y editor del periódico citado –podemos suponer un mínimo de tres personas–, permitió creer en esa información, considerarla verosímil y, además, de alta jerarquía, para publicarla en portada.

Ediciones de ese tipo demuestran que las nociones impuestas por reminiscencias de la conquista pueden reactivarse fácilmente. Bastó que los media sospecharan de la existencia de una conspiración contra el *statu quo* para dar vida a un mítico levantamiento indígena. Informar que habrían «50 000 muertos» era una imagen de algún modo necesaria. Se inscribía en el clima de

19. Esta aclaración fue recogida por *Hoy* en la Columna del Lector, dos días después, en enero 16, 2000, p. 9, en condiciones de exposición absolutamente inferiores a las de la noticia inicial.

opinión ya creado y respondía a los viejos temores del blanco dominante. Por tanto, fue verosímil.

La prensa resucitó fantasmas coloniales y las formas culturales recuperadas por la movilización sirvieron para alimentar el estigma.²⁰ En el escenario mediático, los indígenas solo pueden ser vistos como subalternos y el discurso oficial rechaza la palabra que nace de la oralidad popular. Por ello, cuando los actores marginales rompieron el silencio impuesto su voz fue sometida a lecturas distorsionadas. Más de un periodista sospechó que el discurso de los dirigentes indígenas escondía cosas no-dichas, mensajes cifrados, ocultamientos intencionales.

Protectora de la fe colectiva, la prensa exigió una actitud transparente, propia de la que surge de una relación entre iguales. Era un nuevo factor de desconcierto, la palabra indígena no es transparente para el periodista y, muchas veces, tampoco para el receptor mestizo. El Otro ingresó en la zona de lo ilegible y su silencio ya no fue solo sospechoso, sino que se lo percibió como una agresión a la lógica comunicativa de los *mass media*.

Entonces se acusó a los líderes de no cumplir con las reglas del juego. «Conaie, el ajedrez secreto: indígenas no evidencian su estrategia y mantienen al país en incertidumbre», fue el título del artículo central con que el miedo del medio –asumiendo la representación del país– dio paso a la interrogante: «¿Cuáles son las piezas con las que la Conaie abre esta nueva partida de ajedrez contra el Estado?» y exigió una rápida respuesta porque «Quito no puede respirar con tranquilidad y el dirigente Antonio Vargas dijo que el control de carreteras es inútil, ‘pues los indígenas ya están en la capital’» (*Expreso*, enero 18, 2000). Primó la sensación de haber sido burlados, «La calma del pasado fin de semana despistó a muchos: aparentemente la temida revuelta había fracasado», reclamaba la misma publicación.

Pero no, negándose a actuar frontalmente, «Al parecer los indígenas burlaron la vigilancia de las fuerzas del orden en las carreteras, porque llegaron en camionetas que transportaban víveres, a pie y sorteando muchos obstáculos, pese a las condiciones climáticas adversas que se presentaron en la Sierra» (*El Telégrafo*, enero 19, 2000).

El peligro alertó a la prensa sobre la necesidad de recanalizar institucionalmente la movilización, para evitar «consagrar la marginación y promover la confrontación», precisó el editorial de *El Universo* (enero 17, 2000). A

20. Gracias a ese tipo de comprensiones o incomprensiones de la cultura indígena, el futuro ministro de Gobierno, Francisco Huerta, afirmó: «No vamos a curar la República con brujerías ni con manifestaciones hostiles. La potencialidad de los indígenas no puede estar ni en el shamanismo ni en el alcohol». (*Hoy*, enero 24, 2000) una vez más, es la mirada estigmatizadora del blanco dominante.

continuación añadió que «El activo protagonismo de las comunidades étnicas demanda del Estado y del resto de la sociedad civil una estrategia de integración».

Afirmaciones en la misma línea se multiplicaron en todos los periódicos tanto en los días de la rebelión como después de ella. En permanente referencia a los indígenas como colectivo dominado, la prensa exigió del gobierno, no el reconocimiento a un igual, sino mejorar las políticas de bienestar social, de ayuda internacional, de bonos de solidaridad... El poder puede absorber al diferente a condición de que éste se mantenga como subordinado y la producción del campo periodístico apuntó a preservar ese estatus.

Mientras los subordinados permanezcan en sus escenarios, aquellos considerados como naturales, pueden ser objeto incluso de ayuda social por parte del Estado. Pero, en cuanto los abandonan se convierten en sujetos peligrosos para la estabilidad institucional. Quito «tomada» no era de los indios. Pese a la aclaración de la Conaie, una guerra inconclusa se tornó visible como forma de continuidad de la política. Los pueblos indios siguen caminando por territorio ocupado y fueron sindicados como invasores.

El estigma se construyó en doble dirección. Por una parte, los líderes indígenas fueron acusados de pretender modificar su condición de dominados ingresando a espacios que no les corresponden. Por otro lado, ese ingreso lo realizaban sin el adecuado *blanqueamiento*. De alguna manera, la sociedad ecuatoriana volvió a enfrentar el conflicto que supuso superado con el derrocamiento de Abdalá Bucaram. El fantasma de lo marginal volvía a levantarse.

CLIMA MOVILIZADOR, PERO CON LÍMITE

Para el 21 de enero, entre los sectores medios, mestizos y ciudadanos, el miedo había sentado sus reales. Así lo demostró la exultante contraportada con la que, en esa fecha, *Hoy* exhibió todo el potencial dramático que guarda la diagramación. A todo lo ancho de la página, el título «Tensión telúrica en la protesta» ubicó la naturaleza de las acciones temidas, «telúricas» más que racionales. Un gran titular equivale a una exclamación, es una exageración retórica que produce un nivel de generalización.

Bajo la altisonante titulación, se recalcaba la estrechez de la protesta. «La multitudinaria presencia de las comunidades indígenas de la Sierra contrasta con la ausencia de diálogo y galvaniza una inútil radicalización de las demandas políticas del movimiento». Idea reforzada por el pie de foto que daba cuenta de que «Soldados protegidos con alambradas de púas resguardan el palacio de Carondelet, donde el presidente de la República, Jamil Mahuad y

su Gabinete trabajan el plan de la dolarización, ajenos a las voces que piden su renuncia».

Esa publicación circulaba en la capital, al mismo tiempo en que el «inútil» y «radical» movimiento ingresaba al Palacio Legislativo sellando el fin del gobierno de Mahuad.

Los *mass media* no crean el miedo social, pero lo estimulan direccionada y selectivamente. Son una fuerza indiferenciadora, unificadora de lo cotidiano; la normalización es la meta de la opinión dominante, aquella que puede expresarse en público sin riesgo de sanciones. Mirar como todos miran, pensar como todos piensan, decir lo que se espera que sea dicho. Como afirman los encuestadores, las masas son previsible y el 21 de enero así lo demostraron.

La intensidad de la dramatización mediática fue del desasosiego a la aprensión y al temor. Este último demandó que se cerque a los insurrectos, a quienes la vindicta mediática había sindicado como vándalos. El discurso periodístico dejó entrever la posibilidad de acciones delincuenciales, devastadoras, subversivas. Y, poco a poco, estos adjetivos –semánticamente diferentes– se fusionaron en un significado similar: miedo.

En enero de 2000, la difusión periodística logró que el ecuatoriano se mire a sí mismo como minorías dispersas. La información de desmanes rompió la unidad y el pueblo mestizo fue impulsado a enfrentarse con el «populacho», para *defender la democracia*. La clase media se alineó y exigió castigo para los «golpistas». Con la memoria de febrero del 97, se volcó a la avenida de los Shyris en Quito,²¹ aunque en escaso número y ninguna disposición combativa.

Esta última constatación no sugiere un acto fallido. Al contrario, el fantasma del *indio alzado* no fue convocado para movilizar, sino para desmovilizar a los sectores medios. Las revitalizadas fronteras étnicas impidieron la concreción de una alianza entre los indígenas y la clase media, la misma que días antes permitió asegurar a las encuestadoras que la popularidad de Mahuad había caído en picada. Así, la retórica periodística contribuyó a que la exigencia de recambio presidencial de los sectores medios –que son el mayor cliente de la prensa– no se tradujese en apoyo a la rebelión popular.

En enero de 2000, los sectores medios fueron arrastrados por la lógica discursiva de la prensa que apoyaba al movimiento que exigía la salida de Mahuad, pero que –y eso fue lo determinante– buscaba preservar la instituciona-

21. «Desde las 18 horas, en la tribuna de los Shyris, cerca de 400 personas iniciaban una vigilia 'democrática'. La gente no se da cuenta de lo que puede pasar. Yo no quiero vivir en dictadura, dijo Ricardo Perotti, uno de los organizadores de la marcha». (*El Comercio*, enero 22, 2000).

lidad, frente al caos y la incertidumbre provocados por la irrupción del Otro secular. También entonces, la movilización debía encontrar límite y a ello aportó *El Comercio* (enero 20, 2000) cuando sostuvo: «Hay sí una inquietud dentro de la población, pero contrariamente a los movimientos de marzo y julio, los ciudadanos no apoyan ni con su actitud ni con la logística a los indígenas». ²²

Los sectores medios mestizos estaban a favor de la salida de Mahuad, pero no podían aceptar una dirección proveniente de la organización étnica. La imagen del enemigo se desplazó. Finalmente, quien representó al Otro fue Antonio Vargas; Mahuad era tan solo un rostro circunstancial de la Presidencia. Convertido en clima de opinión, el miedo aisló a la acción indígena y la institucionalidad encontró en él a su mejor aliado.

Invocar al miedo como desmovilizador social no era algo nuevo. Pese a que fue considerado por los media como un llamado a la acción en contra del gobierno de Bucaram, la toma de la Catedral Metropolitana, en febrero del 97, también revitalizó el prejuicio construido alrededor de la participación indígena. Y éste es tan fuerte que, en un primer momento, «La toma de la catedral de Quito por un grupo vinculado al poder indio trajo el fantasma del levantamiento indígena que paralizó a Ecuador en 1990». ²³

Por ello, la impug nación a las medidas económicas, una vez cumplido su papel movilizador, no debía prolongarse y, una vez más, los periódicos actuaron en consecuencia. Sin embargo, era necesario preservar el rechazo hacia el presidente derrocado. La denuncia de actos de corrupción desplegada por los media durante los meses siguientes –talvez años, pues aún no ha concluido– cumple con mantener un clima de opinión adverso a Abdalá Bucaram.

22. El periódico alude a los paros de marzo y julio de 1999. El primero se dio en respuesta a una drástica alza de combustibles decretada por Mahuad, momento en que también se impuso la congelación de los depósitos bancarios. El segundo, también fue una respuesta a una nueva alza de combustibles y precios de los servicios básicos. En marzo, el movimiento popular tuvo como eje a los taxistas, en el segundo hay una mayor presencia indígena. En ambos casos, la reivindicación fue limitada: derogar las medidas económicas. No estaban en juego demandas políticas generales como en enero de 2000, de allí la fácil alianza indígena-mestiza resaltada por el diario.
23. Este recuerdo es recuperado por Juan Carlos Calderón, «¿Por qué tiene que ser un hombre?», *Vistazo*, No. 707, Guayaquil, febrero 7, 1997, p. 10.

CAPÍTULO III

Los media arman el escenario y legitiman el golpe

DE HECHO POLÍTICO A SUCESO MEDIÁTICO

«Hoy habla el país» fue el titular con que diario *Hoy* saludó la movilización del 5 de febrero de 1997. Dos años después, el mismo periódico calificó la acción popular del 21 de enero de 2000 como «Golpe y caos».

Los derrocamientos de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad son los primeros acontecimientos políticos en Ecuador que trascienden como sucesos mediáticos, en tanto fenómenos sociales compartidos desde su construcción comunicacional. En estos momentos, la tecnología hizo del pueblo ecuatoriano público asistente, en vivo y en directo, a la caída de dos presidentes de la República.

Durante la Guerra del Cenepa (1995) ya existían en el país condiciones tecnológicas que pudieron hacer de la conflagración bélica un suceso mediático. Sin embargo, pese a la importancia asignada, la ubicación geográfica y normas militares solo permitieron una información parcial y, casi siempre, en tiempo diferido.

Los escenarios urbanos facilitan la transmisión en tiempo real, así se evidenció tanto el 21 y 22 de enero de 2000, como el 5 y 6 de febrero de 1997. Esa condición impuso que los sucesos acaecidos en Quito y Guayaquil tuvieran una amplísima visibilización, en menor medida los de Cuenca, Portoviejo y otras capitales de provincia; mientras los eventos de las zonas rurales pasaron casi desapercibidos para los media y sus espectadores.

Cientos de horas de transmisión hicieron de la televisión el medio de comunicación líder frente a la prensa y la radio. Los periódicos se precian de entregar información analítica y contextualizada, pero la imposición del ritmo televisivo diluyó la diferencia, homogeneizó la información y la noticia cedió al imperativo de conectarse, de enlazar, de estar simultáneamente en todas partes. Procesar la información fragmentadamente no fue un acto volitivo del editor, se impuso como naturaleza propia de una forma tecnológica concreta.¹

1. Esta es la determinación que permitió decir a McLuhan que «el medio es el mensaje», concepto citado por Román Gubern, *La mirada opulenta*, p. 111.

Las ediciones de los principales periódicos nacionales que circularon los días 22 y 23 de enero, al igual que el 6 y 7 de febrero, se redujeron a la versión impresa y resumida de la transmisión televisada. De la misma manera en que actores y escenarios se sucedían vertiginosamente en la pantalla, así se enlazaron las noticias en los diarios del día siguiente.

Con ello, la prensa escrita incorporó las principales mistificaciones de la televisión: titulares y diagramación dirigidos al shock emocional, fragmentación del suceso, cortedad de los textos y despliegue fotográfico que se ofrece al lector como un mosaico de pequeñas pantallas congeladas en la imagen más espectacular.

«Golpe y caos» tituló *Hoy*, a todo lo ancho de la portada, su edición del 22 de enero. La exageración retórica, destinada a conservar la aproximación emocional del lector, se complementó con bocados que mantenían el clima de temor generado en días anteriores: «El desconcierto fue la tónica generalizada en todo el país», «La jornada dejó un muerto y 103 heridos en manifestaciones».

El campo periodístico impuso una visión especial del movimiento social que hizo de la crónica policial un tipo de discurso capaz de atravesar el campo político. Por ello, aunque las retóricas descriptiva y dramática se deslizaron en la noticia ofertada, la naturaleza del acontecimiento privilegió el discurso político policial en su difusión.

Esa lógica discursiva organizó la portada de *Hoy* sintetizando lo acontecido durante la rebelión popular en los siguientes puntos: a) un «coronelazo» desató el caos, b) el problema surgió por la reducción del presupuesto militar, c) un segundo Triunvirato consolidó el liderazgo militar con «Mendoza, el hombre fuerte», d) a la hora del cierre de edición, se suponía que «Mendoza habría dejado sin efecto lo acordado hasta media noche», e) el diario orientó la expectativa ciudadana en «Defensa de la Constitución» ya que «la salida sólo puede darse dentro del orden constitucional».

De esta manera, los hechos del 21 de enero quedaron reducidos a cuatro noticias y un editorial; cada uno de ellos, desagregado en múltiples detalles. Tres presentes: el levantamiento popular, la concesión de los coroneles a sus superiores jerárquicos y la derrota de la rebelión. Un pasado más que inmediato para explicar la insubordinación militar por una desavenencia presupuestaria. Un futuro «constitucional» demandado por la prensa investida de vocero de la ciudadanía.

Aunque la diagramación desplegó un discurso retaceado, el texto se inscribió en una estrategia de información unificada por el ritmo de producción noticiosa. El modelo estaba completo. La contigüidad proyectó una red de significaciones, produciendo el contexto y, con él, el sentido del acontecimiento que el lector tendería a privilegiar.

Al calificar de «coronelazo» los sucesos del 21 de enero y ubicar su causal en la reducción del presupuesto militar, *Hoy* restringió a un solo detalle las causas del conflicto social, al tiempo que desnaturalizaba la rebelión popular hasta convertirla en una arbitrariedad cometida por un pequeño grupo de militares. Ese tránsito autorizó al periódico para dar su opinión y, bajo el formato de noticia central, *informó* que «Una jornada lamentable vivió, ayer, la democracia del Ecuador».

Unas horas de diferencia en el cierre permitieron a *El Comercio* exponer otro enfoque, el artículo central de portada ya no jerarquizó el levantamiento sino su derrota. El título, «El Triunvirato sólo duró tres horas», dio cuenta de un periódico que consideraba a sus lectores televidentes informados y privilegió los sucesos acaecidos en el espacio en *off* de la transmisión televisiva. Cuando las cámaras se retiraron del escenario, «Carlos Mendoza pidió la disponibilidad y hoy se posesionaría el presidente Noboa».

Dos fotografías complementaron esa página. La primera, Mahuad en su último saludo –no se precisa a quién– desde el balcón de Carondelet. Abajo, en formato más pequeño, los miembros del segundo Triunvirato –formado por Solórzano, Mendoza y Vargas– unen sus manos en señal de unidad y triunfo, que «solo duró tres horas».

Las portadas de los dos matutinos quiteños publicaron un total de cuatro fotos, ninguna de las cuales visibiliza actores colectivos. El lente de los fotógrafos se centró en personajes individuales y resaltó uniformes militares. Así, la corriente que en días anteriores, forjó una mirada estigmatizada de la movilización indígena, fue cediendo primacía a la imagen de una «asonada militar».

La orientación gráfica del 2000 contrasta con la que esos mismos periódicos desplegaron en 1997. El 6 de febrero, con una foto que copaba toda su portada, *Hoy* magnificó la marcha de la avenida de los Shyris en Quito, contextualizada por el inmenso titular: «¡Que se vaya!». La masa anónima que salió a las calles el 5 de febrero fue saludada como un hecho que «quedará marcado en la historia política de la democracia ecuatoriana». Entonces, *Hoy* no llamó a defender la Constitución, consideró que la movilización representaba a «El pueblo y su mandato».

El Comercio desplegó una tónica discursiva semejante, también sus fotografías del 6 de febrero resaltaron el movimiento de masas y su «mandato». «Ecuador le dijo no de un solo toque», tituló a cinco columnas la dramatización noticiosa: «Más de dos millones de personas actuaron en una jornada pacífica». A continuación, el medio asumió funciones de juez y afirmó que «se esperaba una fiesta no violenta, dolorosa por el contenido pero jocosa en sus formas: el país no defraudó».

Más cautos en los cambios de su diagramación, los guayaquileños *El Universo* y *El Telégrafo* publicaron en enero de 2000 portadas semejantes a las de febrero de 1997. El 22 de enero, *El Universo* resaltaba al líder indígena Antonio Vargas junto al coronel Lucio Gutiérrez, frente a un Jamil Mahuad que se despedía. Abajo, una enorme fotografía da cuenta del momento en que indígenas, entremezclados con soldados uniformados, ingresaban juntos a la sede del Parlamento. El título, «Intensos diálogos para integrar nuevo gobierno», respondía a una edición cerrada a media noche e insinuaba la posible continuidad del movimiento del 21.

Sin acudir a adjetivos como golpistas, caos o violencia, el editorial central «aspira a que se mantenga el orden constitucional. Sin embargo, son imprescindibles cambios profundos de las reglas políticas de nuestra sociedad. De lo contrario la estabilidad institucional sería imposible» (*El Universo*, enero 22, 2000).

REDUCCIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR A ESPECTÁCULO

Tanto en el derrocamiento de Mahuad como en el de Bucaram, la gran mayoría de los ecuatorianos vivieron mediáticamente la política. La transmisión en vivo y en directo se impuso al receptor como fiel reflejo del mundo. Sin embargo, la presencia *in situ* de los media contribuye a desencadenar eferescencias destinadas a satisfacer el ojo de la cámara y el acontecimiento político se socializó desde la dramatización articulada por el guión televisivo.

La puesta en escena marcó una huella en el discurso periodístico que puede ser rastreada a partir del análisis de la retórica policial que los diarios privilegiaron en aquel momento. La crónica roja aportó a la mirada del acontecimiento político la expectativa de violencia, sufrimiento e, inclusive, muerte. En ese contexto, el impacto emocional, estimulado por la imagen espectacular, logró forzar una homogeneización en la jerarquía de las acciones y en la orientación de su lectura.

El universo mediático configuró una atmósfera que acogió a cada medio en un conglomerado único y sumergió al televidente, lector u oyente. Impregnada por las demandas del poder, esa atmósfera demostró capacidad para generar movilización y desmovilización social. Por ello, la transmisión en vivo de la marcha del 5 de febrero y su reproducción, al día siguiente en una fotografía de página entera, que casi convirtió a la portada de *Hoy* en un afiche a todo color, se incorporó como un elemento más de la política. Recreó las tomas que la televisión difundió durante todo el día anterior, al punto en

que su continua repetición fue multiplicando en la retina del televidente la magnitud de la manifestación. Así, a una congregación –calculada en cien mil personas– se le arrogó la representación de dos millones de movilizados.²

La repetitiva difusión de la marcha perennizó una movilización efímera. El 6 de febrero, mientras estas publicaciones circulaban profusamente en la capital, el Congreso Nacional se reunía para decidir la suerte del presidente de la República. Los periódicos anunciaron –como en un *exit poll*– que dos millones de ciudadanos habían estado en las calles. Difícilmente, un diputado podía negarse a la exigencia de dos millones de voluntades. Un extraño desplazamiento de escenarios proveía al sucesor de Bucaram de algo muy semejante a dos millones de votos. La resolución parlamentaria estaba legitimada de antemano.

Se había realizado una «sucesión democrática»,³ y así fue aceptada por los movilizados, al grado en que el entonces vicepresidente de la Conaie anunció: «los bloqueos de las carreteras continuarán hasta que Alarcón sea reconocido como presidente de la República» (*El Telégrafo*, febrero 8, 1997). Casi se podría suponer que el Interinazgo había sido el objetivo final de la toma de la Catedral de Quito.

Las imágenes difundidas en el 2000 fueron radicalmente distintas. Las fotografías privilegiaron a dos Triunviratos, respaldados por unos cuantos militares y algunos miles de indígenas. El protagonismo se individualizó en los fallidos gobernantes, con lo cual se dio paso a la intuición de resentimientos y ambiciones personales.

El pueblo movilizado quedó fuera y, una vez deslegitimado el sentido del hecho político, el discurso periodístico solo pudo entregar una visión cínica de los hechos políticos, dominados por intereses particulares. La lectura integral y coherente del hecho político se anuló en medio del juego de diferencias triviales, vaciando al suceso de su espesor histórico. Finalmente, el

2. La contabilidad de 100 000 personas en la marcha de la avenida de los Shyris y de dos millones de movilizados en el país, la proporcionó *El Comercio*. Diario *Hoy* se mostró aún más generoso y, recurriendo a una fuente legitimadora, confirmó que, «según Cedatos, 2,2 millones de personas habían marchado en todo el país». (*Hoy*, febrero 6, 1997).
3. Se parte de la supuesta existencia de un pacto fundacional de la democracia ecuatoriana que se mantuvo en febrero de 1997. A ello apunta Echeverría cuando afirma: «La sustitución del Presidente por un miembro de la legislatura, utilizando la figura inexistente en la Constitución del interinazgo, y el desconocimiento de la tradición jurídica de la sucesión presidencial por parte del vicepresidente electo, terminaron por cerrar el círculo de la ruptura de la legalidad constitucional. [...] A pesar de que está claro que estos eventos alteraron la vigencia constitucional, no se produjo una ruptura democrática, en cuanto no se rompió el acuerdo fundacional que sustenta a la democracia y que se concretiza en el pacto civil-militar». Julio Echeverría, *La democracia bloqueada*, Quito, Letras, 1997, pp. 104-105.

mundo del detalle comunicado fragmentó el proceso y su sentido hasta volverlos invisibles.

La producción mediática privilegió la contemplación sobre la explicación y la reflexión, entregó fragmentos inconexos de documentales y opiniones, generando una realidad desestructurada, donde es muy débil la línea que divide el reportaje de la ficción. Lo parcial fue autonomizado, impidiendo una mirada del conjunto y el actor se individualizó en ruptura con el colectivo, convirtiendo a la retórica política en un mosaico de efímeras banalidades.

En 1997, el Congreso decidió la suerte de Bucaram y los media confirmaron la naturaleza *democrática* del movimiento. «El Congreso fue una suerte de imán, que atrajo a casi todas las marchas que desfilaron en la capital», (*Hoy*, febrero 6, 1997) afirmó el matutino quiteño resaltando la legitimidad del escenario reconocido por la movilización ciudadana.

Pero no solo el escenario era legítimo, también lo eran sus líderes: «Freddy Ehlers, Rodrigo Paz, Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad, Blasco Peñaherrera, Jaime Nebot, Sixto Durán Ballén, miles de estudiantes, amas de casa, trabajadores... a una sola voz pidieron la destitución del presidente Bucaram».

Protagonistas, acciones y escenarios legitimados por su institucionalidad produjeron un golpe de Estado aclamado como ejemplarmente democrático. «El Paro Cívico Nacional del 5 de febrero fue catalogado como la más grande manifestación popular en los últimos 50 años en el Ecuador», afirmó *Hoy*, (febrero 7, 1997) en medio de un recuento gráfico de los participantes: niños, pobladores rurales, obreros de la construcción, mujeres, artistas, personas de la tercera edad, indígenas, religiosas e incluso un ‘grafitero’ que «se disputa la pared con un guardia privado». Esas imágenes llegaron a construir una memoria en la que nadie faltó; esa es la masa heroica y difusa que derriba presidentes.

A diferencia del 97, la movilización del 2000 no fue considerada épica sino vandálica. Hubo «cerco y humillación en el Parlamento» (*Expreso*, enero 21, 2000), los indígenas «obligaron a empleados legislativos a bailar danzas autóctonas, además a pintarse la cara» (*El Universo*, enero 21, 2000), Guayaquil quedó «prácticamente a merced de grupos revoltosos que cometieron toda clase de desafueros en contra de la urbe» (*El Universo*, enero 28, 2000) y, «con los periodistas se mostraron agresivos».⁴

Finalmente, la irrupción de sectores subordinados en escenarios privilegiados del poder fue calificada de «golpismo antidemocrático». La televisión fue la primera en estigmatizar a la rebelión popular como golpe de Esta-

4. Esta última memoria es de una periodista de *Vistazo*, No. 779, Guayaquil, febrero 3, 2000, p. 24.

do,⁵ valoración consolidada por la repetición de escenas que enfocaban acciones y palabras violentas.

Esa lectura precedió a la rebelión. La presencia de actores dominados que habían excedido sus escenarios *naturales* fue denunciada por un protagonista legítimo. «Veo unos payasos y extremistas» fue la frase de León Febres Cordero, recogida por *Hoy*, (enero 14, 2000) exigiendo el retorno de los subordinados a los escenarios de donde nunca debieron salir. «Los curas a la iglesia y los idiotas al manicomio», insistió el Alcalde de Guayaquil.

La incursión de actores marginales había adquirido el matiz de lo insólito y fue leída como hecho episódico, en contradicción con el contexto social de sus actores. La presencia indígena en el Congreso atropelló un espacio símbolo de la élite política, humillada cuando «los curules fueron ocupados por indígenas que suplantaron los nombres de los diputados con los de sus dirigentes». La descripción periodística⁶ desvinculaba la acción del sentido planteado por sus líderes y redujo una demanda política a un acto impulsivo.

Por último, la violencia colectiva devino violencia anómica y, vaciada de sentido político,⁷ se tornó ininteligible para la comunicación. La retórica periodística llenó el vacío con interpretaciones metafóricas: vandalismo, alboroto, subversión.

En 1997, las acciones vandálicas tuvieron escenarios menos oficiales. Se concentraron en las calles de Guayaquil⁸ y corrieron a cargo de la «Marcha de pobres por Bucaram». Allí «desfilaban grupos de hasta cinco jóvenes armados con palos al grito de ‘a nosotros nadie nos bota’» (*Hoy*, febrero 5, 1997). Las acciones cobraron dimensión con la presencia del propio presidente en el puerto principal. Entonces, «La tensión política se trasladó ayer a

5. En estas circunstancias, la nominación de golpe de Estado se utilizó como estigma y no como categoría política. Por definición, el golpe de Estado nace en las alturas del gobierno y se dirige hacia abajo para imponer un orden y sus actores son los propios gobernantes. Los movimientos insurgentes que nacen de abajo, que se generan entre los gobernados y se dirigen a arrebatar el poder a quienes hoy lo detentan, se definen como rebeliones. Ver Rodrigo Borja, *Enciclopedia de la política*, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 468 y 817.
6. «El Golpe», *Vistazo*, No. 779, Guayaquil, febrero 3, 2000, p. 21.
7. Cuando hablamos de vaciamiento de sentido, lo hacemos solo en referencia al sentido disruptor, cuya ilegibilidad es cubierta por el sentido dominante. «En el funcionamiento de una sociedad, nada es extraño al sentido; el sentido se encuentra en todas partes. Ahora bien, también lo ideológico y el poder se encuentran en todas partes. Dicho de otra manera: todo fenómeno social puede ‘leerse’ en relación con lo ideológico y en relación con el poder. Decir que lo ideológico, que el poder, se encuentra en todas, es afirmar un principio de lectura». Eliseo Verón, *Semiosis de lo ideológico y del poder*, p. 14.
8. Aunque Guayaquil fue el centro del «caos», la prensa también alertó de su posible propagación a otros provincias costeñas. «Las provincias de Esmeraldas y El Oro se proclamaron ayer estados federales» informaba *El Universo* (febrero 7, 1997).

Guayaquil, Abdalá Bucaram comenzó a desarrollar una estrategia para prolongar la inestabilidad política y convertirse en un foco permanente de agitación» (*Hoy*, febrero 9, 1997). Aunque provenían del presidente de la República, esos hechos solo podían leerse como actos marginales en el campo institucional de la política.

Desde esa experiencia, en enero de 2000, los medios de comunicación esperaban también un golpe de Estado incruento, limpio, camino abierto hacia el consenso. Pero, para que esto se cumpliera, era necesario que el adversario derrotado, los rebeldes, fueran considerados como agresores. Eran ellos quienes estaban dispuestos a emplear la fuerza, jamás el gobernante vencedor. Una vez más, la paz debía nacer del ocultamiento de la guerra en la dominación aceptada.

El 21 de enero, los coroneles no portaban armas y los indígenas se enfrentaron con su solo cuerpo. Sin embargo, entre el 11 y el 21 —entre la instalación del Parlamento de los Pueblos y la rebelión— transcurrieron diez días que sirvieron para identificar culpables. El crimen de los rebeldes no fue exigir la salida de un presidente caído, fue cuestionar las formas de reproducción institucional del poder. Y, esa es «Una ruptura irreversible», como anticipó el análisis de *El Comercio*, (enero 14, 2000) «Los dirigentes indígenas y sociales han respondido cogiendo un atajo: han decidido jugar a ser un contrapoder [...] cortocircuitar los mecanismos actuales del Estado y poner a la sociedad, en su conjunto, ante una disyuntiva: o se cambia el modelo imperante o ellos ponen a funcionar su capacidad de bloqueo».

Nuevamente, se apela a la denuncia del «bloqueo», eufemismo con que *El Comercio* suele referirse a toda acción que dificulte la satisfacción de los apetitos de la élite. En esa ocasión, además, era un «bloqueo antidemocrático», ya que los indígenas «confían en la movilización y en su presencia y presión antes que en recursos tradicionales, como el voto» (*El Comercio*, enero 17, 2000). Los subordinados, una vez más, fueron reos de pretender introducir lo profano en el mundo de lo sacro.

Simultáneamente, la mirada sobre el movimiento indígena se desplazó de la imagen de colectivo sacrificado —hombre paciente que trabaja y sufre en silencio— a la del agresor. Había perdido su halo romántico y el sitio históricamente cedido por la conmiseración. «Nos hemos convertido en un país sin mayoría gobernado por minorías que excluyen a quienes son disímiles», denunciaba *El Telégrafo* (enero 22, 2000). Al *atentar* contra el pueblo, los indígenas se diferenciaban de él y permitían al pueblo conservar la posición de víctima asignada por el guión dramático que afirma: «toda crisis siempre afecta a los más pobres».

Para el discurso moderno, el orden democrático presupone estabilidad. La crisis, la confrontación y la lucha han sido incautadas en aras del contrato;

mantener la democracia es conservar la paz constreñida por el orden jurídico. Por ello, desde su difusión periodística, el 21 de enero solo podía mirarse como una ruptura episódica de la normalidad estatuida, aquella que supuestamente constituye el interés general.

EL ESPECTADOR LEGITIMA EL DERROCAMIENTO

El ritmo de la prensa es el del suceso diario, el impreso no puede repetirse más allá de la jornada. Solo la novedad es apreciable por los *mass media* y, en su búsqueda, la noticia diluye procesos sociales en acciones coyunturales privilegiando el shock de la imagen catalizadora de emociones fuertes.

Estimulando la sensación de *anormalidad* en los sucesos del 21 de enero, los diarios diseñaron secciones especiales con nombres e iconografías específicas: «La Asonada», «Lo político», «La agitación», tituló *El Comercio* a sus nuevas páginas; «Primeros tiros de los golpistas», fue la oferta del suplemento especial de *Hoy*; y, «Ecuador en crisis», la novedad informativa de *El Universo*. De esta manera, la diagramación contribuyó a una lectura crispada del suceso.

Sin embargo, el peso informativo recayó en la televisión y su transmisión impuso el criterio de lo real como lo filmable. La difusión en directo origina un espacio circunscrito al momento inmediato. El pasado y el futuro se disuelven en la sobresaturación del detalle presente. Solo vivimos el momento y éste se muestra en un gran despliegue de imágenes, por eso suponemos conocerlo, aunque la información desordenada y fragmentada devenga espejos fracturados que sumergen a la totalidad en la penumbra.

Una movilización de masas, una rebelión popular y dos golpes de Estado se transformaron en tempestades mediáticas, donde la sobre-información condujo a la desinformación. La avalancha noticiosa indiferenció, en un torrente único, lo trascendente y lo banal, histrionizando al receptor embebido en la ilusión de que se informaba, pero además, de que participaba. El espectador que ve con sus propios ojos cree asistir a los hechos, los da por verdaderos, se transforma en testigo directo del acontecimiento. El soporte tecnológico convierte al televidente, primero en testigo y, finalmente, en actor.

El reportero es percibido como una prolongación de los sentidos del espectador, su cuerpo es un cuerpo virtual a través del cual el televidente se supone en el escenario mismo del acontecimiento. Este desplazamiento de lo real por lo virtual fue tan poderoso, que «Por ahora, la ministra fiscal, Mariana Yépez, amenazó con enjuiciar a todos quienes participaron en la asonada

por conspirar en contra del orden constituido; para ello revisará las imágenes grabadas por los canales de televisión durante la jornada del viernes» (*Hoy*, enero 23, 2000). No hay realidad fuera del enunciado, parece ser el nuevo lema de la justicia ecuatoriana, no solo politizada sino también *mass mediatizada*.⁹

Cuando el periodista mira a la cámara y da testimonio de lo que ve, distancia al medio del suceso al tiempo que establece un espacio de complicidad con el espectador. De esta manera, los media se asumen como representantes del público. «El país quiere saber», es el slogan que concreta la interfaz político-informativa, dando cuenta de un espectador que, implícitamente, delega su conocimiento en el reportero.

Esa interfaz, usualmente utilizada ante los gobernantes, durante la rebelión de enero de 2000 se trasladó frente al colectivo movilizad. Entonces, «la ciudadanía quiere saber lo que harán los indígenas» afirmaba un periodista, construyendo un *nosotros* –periodista y receptor– estructurado en oposición a un *ellos* –el movimiento diferenciado–. Así, el espectador se individualizó y rompió con un colectivo del cual, en otras condiciones, pudo haberse sentido parte.

La ausencia de edición en la transmisión en vivo potencia el efecto de realidad. Se sugiere la posibilidad de imágenes y presencias distintas al discurso cotidiano, en tanto la espontaneidad guía la cámara. Pero, es justamente en lo espontáneo donde priman las normas y criterios fílmicos impuestos por el entrenamiento. Por ello, se puede hablar de la existencia de un guión que articula la semantización de los acontecimientos políticos.

El acontecimiento es inesperado, no así el discurso que lo volverá legible. Lo espontáneo no es otra cosa que presupuestos compartidos por periodista, camarógrafo y espectador. Las palabras que utilizará el reportero para relatar el suceso son tan predecibles como el ángulo y enfoque que conducirán la cámara.

La vorágine con que el espectáculo se despliega atrapa a un público que percibe al lente de la cámara como prolongación de sí mismo. El espectador se supone testigo y su visión se revierte en elemento legitimador del suceso comunicado. Finalmente, lo imaginario copa la única realidad socializada, pero además, contribuye a gestar esa realidad.

«A las 16:10, el ex mandatario abandonó el Palacio de Carondelet» según habría constatado el reportero que escribió la noticia (*El Comercio*, ene-

9. Esta orientación de la vindicta pública, tendente a admitir informaciones producidas por los *mass media* como pruebas penales, tiene sus antecedentes inmediatos en el caso «gastos reservados» levantado contra el ex vicepresidente Dahik y, posteriormente, en varios juicios instaurados contra el ex presidente Bucaram.

ro 22, 2000), horas después de que «El Ministro de Defensa, Carlos Mendoza pidió públicamente, a través de una rueda de prensa, la renuncia del presidente Jamil Mahuad Witt» (*El Universo*, enero 22, 2000). Pero la comunicación de masas no solo ha cambiado las formas de la política, sino que ha absorbido algunas de sus funciones.

El general Mendoza escogió a los medios de comunicación de masas como escenario apropiado para exigir al presidente de la República que dimita. Y, desde el mismo escenario, contestó Mahuad: «El día de ayer para difrazar el golpe militar que se fraguaba, un grupo de golpistas me pidió que renunciara y yo le dije en cadena de televisión que no podía renunciar» (*El Universo*, enero 23, 2000). Es ocioso pensar que las cosas habrían sido diferentes sin la preponderancia de los media.

Esa información socializada, aquella que se comparte y crea un vínculo de comunidad, es la percepción social misma. Lo que queda fuera del espectro expositivo parecería no existir y así lo es, de hecho, para efectos de su reconocimiento. La palabra y la imagen comunicadas son asumidas como propias por el espectador. Por ello, *El Comercio* pudo declarar el 22 de enero que «La proclamación del triunvirato se dio mientras en el país crecía la reacción antigolpistas, dirigidas en Guayaquil por dirigentes partidistas y relevada en Quito por manifestantes espontáneos».¹⁰

LA BATALLA DE LOS EJÉRCITOS VIRTUALES

Gracias a este efecto de realidad, el sujeto de la enunciación se diluye y la realidad se realiza en el enunciado. Los media se presentan como simples transmisores del hecho, al tiempo que la decisión de veracidad pasa al receptor. Sin embargo, momentos políticos como éste dejan sin piso el sobre utilizado argumento de que los periodistas solo «transparentan» los hechos y confirman que «es falso que la televisión se limite a reflejar los cambios que se están produciendo en la sociedad y en su cultura. En realidad, la televisión refleja los cambios que promueve e inspira a largo plazo».¹¹ Podemos ampliar esa aseveración a toda la atmósfera mediática.

10. La primera referencia alude a León Febres Cordero y los líderes del PSC, la segunda a «cerca de 400 personas [que] iniciaban una vigilia 'democrática' en la tribuna de los Shyris», según la generosa contabilidad del mismo diario.
11. Que este aserto de Sartori sea válido para la acción de los media ecuatorianos, ratifica la determinación tecnológica en la comunicación de masas. Giovanni Sartori, *Homo videns: la sociedad teledirigida*, Madrid, Taurus Pensamiento, 1998, p. 72.

Los media no generan el hecho, pero al enfocarlo, describirlo o interpretarlo de una manera determinada, producen el acontecimiento como un nuevo nivel de la realidad. El sensacionalismo de la información suscita reacciones que, a su vez, se convierten en sucesos noticiables.

La noticia crea noticia, hay un efecto multiplicador, articulado por la disputa del mercado y, como lo afirmara el director de un telediario, el 21 de enero de 2002 la competencia fue feroz. La altísima audiencia que la jornada proporcionaba estimuló formas espectaculares que aseguraran el *rating* para el momento y la publicidad para el futuro.

Un llamativo ejemplo lo proporcionó el noticiero de Telesistema. Deslizándose por el sendero de lo privado, las entrevistas realizadas por ese canal dieron al periodista la posibilidad de reemplazar al político. Lejos de desmarcarse de las posiciones vertidas por la televisión, las ediciones escritas reforzaron esa orientación. *El Universo* recogió la producción televisiva como una noticia más: «El pronunciamiento hecho por la totalidad de los jefes de reparto a Telesistema le quitó piso al movimiento y pesó de forma sustancial en la decisión del Comando Conjunto para posesionar a Gustavo Noboa Bejarano» (*El Universo*, enero 23, 2000).

Cuando los media se citan unos a otros, refrendan su capacidad para generar consensos y consolidar memorias. Al mismo tiempo estimulan olvidos, como el detalle de que las entrevistas realizadas a los jefes de reparto fueron incentivadas por una declaración inicial del Ministerio de Defensa. Obviamente, el director del telediario debió considerar que esa era la fuente de mayor legitimidad y, por tanto, legitimadora de su propia visión noticiosa. El prejuicio se impuso en un periodista que, en medio de una rebelión, buscó en el Ministerio de Defensa la voz oficial, la única que él podía reconocer como objetiva.¹²

La palabra de este vocero, informando que la mayoría de repartos militares estaban contra el Triunvirato de Salvación Nacional, fue difundida desde el plató del estudio televisivo varias horas antes de que el Gral. Mendoza se uniera al Triunvirato. El desplazamiento de las condiciones de enunciación volvió invisible el hábitus y el enunciado cobró capacidad performativa.

Las entrevistas pusieron en movimiento tanques y cañones virtuales, convirtiendo al hecho periodístico en una acción militar. La mutua audición de las declaraciones de los regimientos militares en la línea marcada por el Ministerio de Defensa actuó como factor de inhibición para cualquier posi-

12. La objetividad en la comunicación es el reconocimiento de valores compartidos. «Reclamar de un medio la 'objetividad' consiste en pedirle que, de los acontecimientos de los cuales habla, haga la descripción que yo habría hecho si hubiese estado allí». Eliseo Verón, *Efectos de agenda*, p. 105.

ción distinta. Quien se manifestase a favor de los rebeldes se sometía a la posible sanción que el mando había insinuado.

La difusión de esas posiciones fue juntando fuerzas que formaron un cerco social frente a los coroneles insurrectos. Ello, en circunstancias en que coroneles y generales discutían sus diferencias en Carondelet, configuró un nuevo elemento de presión que pudo contribuir a que el coronel Gutiérrez se subordinara a la dirección del general Mendoza. Desde ese momento, los rebeldes cedieron paso a los golpistas.

Finalmente, el dispositivo de la comunicación impidió mirar el contexto de la rebelión, aquello que le confería un destino político, solo recuperable a partir del seguimiento del suceso social e históricamente concebido.

CONSENSOS MEDIÁTICOS PARA LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

También en el derrocamiento de Abdalá Bucaram, acciones y escenarios compusieron un mosaico excluyente del proceso social. Ideas y propuestas políticas pertenecen al campo de lo abstracto que, por carecer de imagen, queda fuera del interés de la producción mediática. En el lente periodístico, cada protagonista se redujo a su acción y su pensamiento, a la frase que ancla una fotografía.

Una buena muestra de esa retórica periodística fue la portada de *El Telégrafo* del 7 febrero del 97. Apoyados en la fotografía de cada actor, destellan titulares como: «¡Tres Presidentes!», «Fuerzas Armadas no asumirán el poder del país», «Alarcón Presidente interino», «Abdalá desconoce lo actuado por el Congreso», «Rosalía se autodesignó como Presidenta de la República». Condensación que promueve, inevitablemente, extremos sin matices. Ese resultado fue precedido por la polarización maniquea que construyó y deconstruyó legitimidades, apoyándose en canales de identificación y de rechazo reconocibles por el público.

Lo que la televisión filma y lo que la prensa fotografía forja una representación altamente personalizada y allá se encaminaron los media, en búsqueda del respaldo de generadores de opinión reconocidos. «Personalidades del país descalifican a Bucaram», se tituló al arco iris formado por pronunciamientos como: «Es preocupante el grado de corrupción»: Borja; «Gobierno corrupto debe terminar»: Hurtado; «Hay que restaurar la paz y la dignidad»: Durán Ballén; «Ecuador vive situación inaguantable»: Nebot. Mientras el futuro mandatario anuncia su línea, «No se permitirá actos de violencia»: Mahuad (*El Telégrafo*, febrero 5, 1997).

Gracias a *flashes*, donde la imagen se consolidó a través de la palabra impactante, *El Universo* y *El Telégrafo*, del 22 de enero de 2000, jerarquizaron títulos con frases de un tenor semejante. «País ha llegado a la anarquía»: Hurtado; «Gobierno de Mahuad originó crisis»: Borja; «Debe ser sensible y renunciar»: Pons; «No al golpismo, sí a la renuncia de Jamil»: Nebot. El propio Abdalá Bucaram se sumó al coro: «La justicia tarda pero no olvida». Y, en un caso de excepcional mala memoria, el ex presidente interino Fabián Alarcón sostuvo: «No hay derecho para que se pretenda romper orden constitucional».

La información troceada se inscribió en un contexto organizador de relevancias. La lectura parcial cobró significado desde una red de comprensión global auspicadora de omisiones o abundancias en el detalle.

La ruptura de la cotidianidad también autorizó a la prensa escrita a actuar directamente en la política. Los editoriales rebasaron el discurso académico para convertirse en indicaciones dirigidas a la cúpula dirigente, de la cual la gran prensa forma parte. En esa línea, un hecho notable en la comunicación de masas en Ecuador, fueron las cartas abiertas que *El Comercio* dirigió tanto a Abdalá Bucaram como a Jamil Mahuad, poco antes de sus respectivos derrocamientos.

Visualmente, resulta aún más impactante que *El Universo* haya optado, el 8 de febrero del 97, por una portada íntegramente editorial. El propio diario justificó en la novedad del momento la abrupta ruptura de su diagramación: «La encrucijada político-jurídica que vive el país demanda el debate nacional extenso y claro. Lo que se expresa en esta página son pareceres de opinión que aspiramos sirvan para la discusión política que eventualmente –ojalá– contribuyan a hacer de esta una sociedad justa, solidaria y civilizada».

En la misma fecha, el editorial central del mayor matutino quiteño abrió los cauces para la búsqueda de una *solución consensuada*. Al gran titular: «El bloqueo político se afianzó ayer», le sigue la noticia-editorial titulada: «*El Comercio* pide que los tres renuncien». La exigencia del diario buscó su legitimación en la memoria dramática: «Las imágenes de televisión son sobrecogedoras, los gestos de violencia elocuentes, los discursos cada vez más incendiarios y las conductas más desafiantes».

Esa retórica amparó la actoría política explícita del medio y «Este diario, en su editorial, presenta una fórmula a la consideración de la nación. Lo que perseguimos es alejar al país del único escenario que en este momento se contempla, el enfrentamiento entre ecuatorianos. Un día perdido puede ser fatal» (*El Comercio*, febrero 8, 1997). El dramatismo de la última frase recalca el imperativo de que la «fórmula» propuesta sea acatada por los actores en disputa.

Planteamientos periodísticos de ese tipo gestaron el escenario adecuado para que surgiera el proyecto de un «Nuevo Mandatario por consenso»,

propuesto por Sixto Durán Ballén y Osvaldo Hurtado, según titular de *El Universo* (febrero 9, 1997). El espacio en *off* incidió en la noticia, no se pregunta consenso entre quienes; la opinión dominante lo aporta como un supuesto de gobernabilidad. El consenso de las élites bien puede reemplazar al voto popular cuando éste demuestra que también «el pueblo se equivoca».

Pero arribar a un consenso no era una cuestión simple. Como *El Comercio* recordó en su edición del 17 de febrero de 1997, «el nombre de Alarcón no sedujo para nada a la DP, Verduga mismo se encargó de hacerlo saber. Ellos tenían como primera opción en su baraja a un costeño: Gustavo Noboa. Osvaldo Hurtado apoyaba ese nombre».¹³ En todo caso, más vale tarde que nunca; el proverbio popular se cumplió dos años después.

A forjar ese consenso de la élite también contribuyó en el 97 la voráGINE de la transmisión en directo. Integrado a modelos precedentes, lo habitual en la forma discursiva se impuso, como lo describió el propio Abdalá Bucaram:

Como en un partido de fútbol, las primeras imágenes correspondían a tomas en las sedes de los partidos involucrados en el golpe y en las casas de los políticos confabulados. Luego venían los videos de masas, rondas de comentarios delirantes y aspirantes a integrar las alineaciones de los equipos ministeriales del régimen que me sucedería. Y volvían al reprise insistente de masas. Después se dedicaron a entrevistar a los directores técnicos de la conspiración, León Febres Cordero, César Verduga, Heinz Moeller, Jaime Nebot, Fabián Alarcón. Cuando se dio el pitazo inicial, la transmisión tenía el vértigo de la narración de un partido de final de campeonato en la voz del periodista deportivo, Petronio Salazar.¹⁴

La decisión del Congreso del 22 de enero de 2000 no tuvo en su haber estos detalles épicos de febrero de 1997. Entonces, como verdaderos cruzados por la democracia, los ex presidentes Rodrigo Borja y Osvaldo Hurtado rompieron «el impresionante cerco policial y militar dispuesto por el gobierno» e ingresaron en la sede del Congreso «para pedir la destitución de Bucaram» (*Hoy*, febrero 6, 1997). Por ello, una vez que el Congreso cumplió con este mandato y, «Al conocerse la noticia, las campanas de la Catedral de Quito se hicieron escuchar y los vehículos hicieron sonar sus bocinas» (*Hoy*, febrero 7, 1997).

13. En forma más sutil, *Hoy* (febrero 6, 1997) planteó: «Por lo pronto, cuatro nombres suenan para ocupar durante un semestre la posible vacante de Carondelet: Fabián Alarcón Rivera, Carlos Solórzano Constantine, Julio César Trujillo y Gustavo Noboa Bejarano». Es decir, el presidente del Congreso Nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el dirigente propuesto por la Coordinadora de Movimientos Sociales y el futuro presidente Gustavo Noboa Bejarano.

14. Abdalá Bucaram, *Golpe de Estado*, p. 256.

Allí nació la célebre imagen de *La Camioneta*, incubada por la descripción del recién electo presidente interino, recorriendo «las calles de Quito junto a líderes políticos para reclamar la legitimidad de su nombramiento» (*El Telégrafo*, febrero 8, 1997). Se confiaba en que el aplauso ciudadano restaurase la ruptura constitucional.

De la misma manera en que orienta la lectura de lo dicho, la normatividad del discurso insinúa la naturaleza de lo no-dicho. Lo oculto se inscribe en la mismas reglas de lo visible, por ello, su visibilización es más cercana al sensacionalismo mediático que a la modificación de la naturaleza del proceso social. El lector no supone conocerlo todo, aunque cree tener acceso a lo relevante oficial, complementado por aquello que se difunde como rumor y forma parte del mismo contexto.

Que no todo rumor responde a una cualidad subvertora, lo demuestra la mayoría consolidada alrededor del artículo 100 de la Constitución para cesar a Bucaram primero y a Mahuad después. Nacida como un rumor, se distribuyó socialmente como la única posibilidad de obviar el enjuiciamiento político.¹⁵ La resolución de «abandono del cargo» ha demostrado una elasticidad a prueba de circunstancias. Pocos días antes del golpe del 97, el entonces diputado del Frente Nacional, César Verduga, anticipó que «si el presidente no suspende las medidas, se debe pensar un abandono del cargo» (*Hoy*, enero 30, 1997).

Pero, el resquebrajamiento constitucional provocó temores que se traslucieron en la prensa. «Se ha designado un Presidente interino de la República con una disposición que nada autoriza al respecto», denunció *El Universo* en su portada-editorial del 8 de febrero. *Vistazo* retomó la preocupación, opinando que Bucaram había perdido «la legitimidad de su mandato. El Congreso Nacional debía revocárselo, pero al hacerlo optó por el camino indebido». La revista soportó esta afirmación en el en vivo y en directo: «La ilegalidad quedó descubierta a los ojos del país y el mundo, durante la transmisión televisada en directo de la sesión del seis de febrero».¹⁶

Aunque, por supuesto, el culpable de la ruptura debía ser el propio Bucaram. «La irresponsabilidad del presidente cesado no dio siquiera tiempo para que la renovación del Congreso permitiera reflejar allí el rechazo general», reclamó airado *Hoy* (febrero 10, 1997). Una nueva elección parlamentaria hubiera aportado con los votos necesarios para el juicio político, pero Abdalá Bucaram no permitió que la oposición actuara constitucionalmente como, el

15. Para censurar y destituir al primer mandatario se requiere 55 votos, mientras, para aplicar el art. 100 de la Constitución, por el cual se declara vacante el cargo, se necesitan 42 votos. (Ver *El Telégrafo*, febrero 5, 1997).

16. «El país resistió el trauma», editorial central de *Vistazo*, No. 708, Guayaquil, febrero 20, 1997, p. 6.

diario sugiere, era su deseo —de la oposición y también del diario—. De allí, el temor de que «los vacíos constitucionales» y «las ambiciones políticas» pudieran llegar a «frustrar una movilización colectiva que terminó con un régimen cuestionado y forzó al Congreso y a las Fuerzas Armadas a actuar en beneficio de la democracia» (*Hoy*, febrero 10, 1997).

La decisión del Parlamento y la cúpula castrense encontró otro factor de legitimación en la *decisión* de las masas movilizadas. «Mientras Bucaram se escondía en el Palacio de Carondelet» [el diario recuerda que en la naturaleza de todo traidor siempre se encuentra el cobarde], «la magnitud de la marcha descontroló a los uniformados que desesperados lanzaron toda la dotación de gases lacrimógenos que tenían en ese momento. Una niña aproximadamente de cuatro años de edad resultó asfixiada», relató *Hoy* (febrero 8, 1997).

Violencia, guerra y sangre son las tres dimensiones de la noticia que mayor rentabilidad producen a un medio. Alrededor de ellas, el discurso policial articula sentimientos de esperanza y de temor. También de la crónica roja, el discurso político obtuvo el indiscutido objetivo de defensa de la propiedad, que involucra desde la cartera hasta la vida.

Los indios son «vándalos», Bucaram era un «agresor». Frente a la violencia política o anómica surge un espacio de consenso que legitima la represión estatal. La violencia política puso en tensión a un colectivo que se creyó amenazado en su condición de tal. Con ese soporte, el proceso decantó a la resolución institucional y el Estado asumió su papel de protector de la sociedad a través de sus Fuerzas Armadas. Más que en la arbitrariedad antidemocrática de sus jefes, es en la organización del campo estatal donde se ubica el porqué de la dirimencia armada.

Por ello, cuando en febrero del 97, «el Consejo de Generales y Almirantes se negó a arribar hoy a una decisión que los convirtiera en jueces de la situación política», (*Hoy*, febrero 7, 1997) la abstención indujo al mismo periódico a preguntar «¿Dónde está el héroe?» —referencia a Paco Moncayo y su participación en la Guerra del Cenepa—, demandando un arbitraje que pusiera fin a la «grave crisis institucional».

Los precedentes volvieron natural que «Las Fuerzas Armadas prácticamente se convirtieron en una especie de ‘árbitro’ para dirimir esta situación. La población [léase los medios de comunicación] centró su atención en lo que debe decidir el ‘pueblo armado’» (*El Telégrafo*, febrero 8, 1997).

Para la ocasión, el eufemismo «pueblo armado» revistió de civilismo a la cúpula militar y facilitó que la palabra del general José Grijalva fuera aceptada como incuestionable por los mismos que pedían una resolución estrictamente civil. Y Grijalva declaró: «El pueblo eligió a un presidente, pero el pueblo pidió también rotundamente que el presidente salga y pienso que el Congreso actuó como debía actuar, cumpliendo lógicamente el mandato del

pueblo, y hasta ahí nomás. Lo que viene tendrán que las autoridades dirimir o determinar, si es que es o no legal» (*El Universo*, febrero 9, 1997).

Lo que vino después fue la pugna por la Presidencia, que retrajo al país a la vorágine del *flash* informativo. Nuevamente grandes titulares, la realidad fragmentada en el espectáculo múltiple de una ruleta compuesta por rostros y nombres, el discurso político valorado por los dotes escénicos del protagonista. Volvió a reinar el mundo del carisma y así fue tratado por la prensa.

LOS FANTASMAS DEL ESTABLECIMIENTO

La caída de Jamil Mahuad no contó con una movilización épica. La aureola de triunfo popular de 1997 fue reemplazada en enero de 2000 por una «pesadilla de horror y vergüenza», según declaró el presidente del Congreso también cuestionado por los rebeldes (*El Telégrafo*, enero 20, 2000).

«Es un epílogo vergonzoso» fue la frase de Osvaldo Hurtado que recogió *Vistazo*¹⁷ para añadir de *motu proprio* que «ese gobierno solo duró 180 minutos. Tres horas que intentaron borrar 20 años de aparente estabilidad democrática». El periodista intuyó que la política se realiza en las formas, por ello, el escarnio reside en la corta duración del Triunvirato y, ya que fracasó, en la condición de criminales de sus protagonistas.

La teoría política enseña que un golpe de Estado se convierte en delito solo cuando es derrotado, caso contrario, la victoria le aporta legitimidad. En el 2000, cúpula soldó sus diferencias con la asunción de quien representaba al poder y contaba con el apoyo de las armas. El 22 de enero, Gustavo Noboa fue investido como presidente de la República por un general heredero del cargo de ministro de Defensa.

La prensa resaltó la imagen de que «Un sereno y madrugador Gustavo Noboa asumió, ayer, la Presidencia de la República a las 7:30, en el edificio del Comando Conjunto de las FF.AA., en Quito» (*Hoy*, enero 23, 2000). El lugar símbolo de la fuerza legítima es, necesariamente, un escenario de alta legitimidad, aunque no haya sido previsto por la Constitución para investir presidentes. El desplazamiento de los espacios democráticos era secundario, en tanto «La sucesión trae tranquilidad al país», según tituló la portada de *El Comercio* (enero 23, 2000).

Las asunciones de ex vicepresidentes que reemplazan a presidentes derrocados parecen seguir guiones específicos. El 9 de febrero de 1997, también Arteaga fue posesionada por un heredero del Ministerio de Defensa, «En pre-

17. «El golpe», *Vistazo*, No. 779, Guayaquil, febrero 3, 2000, p. 16.

sencia de las Fuerzas Armadas y en ausencia de los legisladores» y de representantes de las otras funciones del Estado. «Rosalía Arteaga asumió la Presidencia a las 11h55 de ayer en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, durante una ceremonia en la que estuvo presente el Alto Mando Militar, encabezado por el Jefe del Comando Conjunto y Ministro de Defensa, general Paco Moncayo» (*El Universo*, febrero 10, 1997).

La legitimación de un acontecimiento proviene no solo de su análisis posterior, sino de la emoción que se desata durante el conflicto. La atmósfera mediática garantiza la cohesión emocional de los receptores y, al hacerlo, impone un nuevo elemento con el que los protagonistas deberán contar. Sin embargo, la salida de Jamil Mahuad replanteó el mismo problema jurídico que el derrocamiento de Abdalá Bucaram.

Su enjuiciamiento estaba vedado, no tanto por falta de votos en el Congreso —debían existir, si consideramos la posición adoptada por la alianza de gobierno PSC-DP desde el mes de diciembre y los pronunciamientos de los demás partidos políticos— cuanto porque éste hubiera problematizado las políticas internacional y económica del gobierno, elementos no cuestionados por la coalición que organizó la sucesión de Noboa.

Pero, la victoria aportó la legitimidad necesaria al nuevo presidente. «Lo que hasta la medianoche del viernes era la vuelta a una dictadura [...] al amanecer retomó nuevamente la vía democrática» señaló la *noticia* central de *El Universo* (enero 23, 2000). Sobre un hecho ya dado, en Guayaquil y varias horas después, el Congreso Nacional proporcionó una cobertura jurídica a la decisión de la cúpula militar.

Ese Legislativo se sometió, además, a la batuta de León Febres Cordero, quien actuó como «jefe del bloque» mayoritario y «catalizador»¹⁸ de la reunión. Como publicó *Hoy* en la misma fecha, «El Congreso Nacional declaró por mayoría de votos el abandono del cargo y ‘cesación’ de funciones de Jamil Mahuad».

Una vez más, se demostraba la elasticidad de la Constitución ecuatoriana, al extremo que el pasado se tornó difuso y, olvidando su propio protagonismo, el Congreso Nacional resolvió «condenar los golpes de Estado que han interrumpido el ordenamiento democrático de 1997 y 2000» (*El Universo*, enero 23, 2000).

18. Es interesante ver el reconocimiento de la prensa al gran legitimador de la política nacional. No solo se considera natural la presencia del alcalde de Guayaquil actuando como «jefe de bloque» en una reunión del Congreso, sino que resalta su derecho a actuar en casa propia, indiciando a los ausentes diputados Moncayo y Yandún como «una tarea de cobardes golpistas que debieron ser sancionados». Haciendo extensivo el escarnio, Febres Cordero afirmó que «Este es un Congreso castrado. Lo que provoca es darles garrote y ser pateados por el pueblo». (*Hoy*, enero 23, 2000).

No obstante, tampoco en enero de 2000 fue tarea fácil consolidar la imagen de una sucesión constitucional. En un primer momento, periódicos como *El Comercio* mantuvieron una imagen positiva de Jamil Mahuad, «fue respetable su decisión de no renunciar en defensa del orden constitucional». Aunque su insistencia en que «un presidente derrocado está derrocado, no renuncia, no abandona el cargo» se fue volviendo incómoda (*El Comercio*, enero 23, 2000). Posteriormente, cuando «dijo que los militares le botaron por haber hecho la paz con el Perú», el diario no dudó en afirmar que «Jamil Mahuad está afectando su logro histórico y al país» (*El Comercio*, enero 30, 2000).

La fragilidad de la sucesión institucional se había tornado peligrosa, al punto que licenció a *Vistazo* a interrogarse si «¿Gutiérrez y su grupo fueron usados para dirigir un plan sánete que usando el movimiento de la Conaie llevó al derrocamiento de Mahuad?». ¹⁹

Afianzar los sucesos del 22 exigía volver la mirada exclusivamente al 21 y señalar culpables concretos. El camino lo abrió el especial de *El Comercio* (enero 30, 2000). A nombre de «mucha gente», el diario cuestionó si «es legítimo y lícito para la democracia que los militares digan cuándo debe retirarse un Mandatario. Lo han hecho con Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad».

El discurso –sobre todo el discurso del poder– se fundamenta en presuposiciones que fundan acciones. La declaración presidencial de que el orden se mantendría a cualquier precio conjugó la promesa de tranquilidad para los buenos ciudadanos con la amenaza de sancionar a los malos. «Noboa es Presidente de la República», «Congreso legítimo a Noboa en el poder» y «Apresan a Crnl. Gutiérrez», fueron los tres titulares de una portada, (*El Telégrafo*, enero 23, 2000) que se hizo eco de promesas y amenazas cumplidas.

Los otros derrotados, los indígenas, se retiraron exhibiendo su fracaso. Los simbolismos se amontonaron: «La retirada de Vargas. [...] salió del Ministerio de Defensa por la puerta trasera», «Un regreso entre la frustración y la ira», fueron algunos aportes de *El Comercio* (enero 23, 2000). «Antonio Vargas: del éxtasis a la tristeza en menos de 24 horas», dijo *El Universo*. «Vargas se refugia en la Amazonía», pronosticó *Hoy*.

La información fragmentada estructuró una continuidad de discontinuos, donde lo importante no es la permanencia de cada elemento sino su rápida sustitución. Los árboles ocultaron el bosque. Gutiérrez, Vargas, Solórzano: los culpables se personalizaron.

El primer liberado de culpa fue Mendoza. El discurso moral contribuyó a identificar la *democrática* actuación del general y la prensa recordó que, al renunciar al segundo Triunvirato, había dicho: «señores, me siento indigno de lo que ha pasado, hasta mi familia está indignada».

19. «Rebeldes con causa», *Vistazo*, No. 779, Guayaquil, febrero 3, 2000, p. 28.

Pero, moral y familia no fueron sus únicos apoyos: «Mendoza reconoce que con Romero habló dos veces», reveló *Vistazo*.²⁰ También *El Comercio* (enero 26, 2000) insistió en que «La amenaza de los EE.UU. sí pesó, según el *New York Times*, tras la amenaza de aislar a Ecuador, los militares dejaron el poder en manos de un civil». El periódico volvió a recurrir a expresiones de una fuente extranjera a la que considera de indiscutible legitimidad.

No todos los rebeldes fueron inculcados con igual responsabilidad. «La crisis institucional no la generan los indígenas. Estos hubieran sido incapaces, por sí solos, de crear un cambio de gobierno. La crisis se produjo como resultado de la ruptura que generaron las Fuerzas Armadas», sentenció el editorial central de *El Comercio*, (enero 22, 2000) marcando el sendero por el cual la comprensión de los lectores debía caminar.

Desvincular a los indígenas de los militares rebeldes era la nueva tarea de la retórica política. Esa orientación la consolidó el propio presidente. «No justifico a los indígenas, pero el golpe de los coroneles es imperdonable [...] un coronel es de primera categoría», declaró el recién posesionado Gustavo Noboa a *Hoy* (enero 30, 2000). Si los coroneles son de primera categoría, los indígenas deben ser de segunda... afortunadamente, el mandatario olvidó el golpe de los generales.

Insistiendo en la gradación de responsabilidades, la prensa hizo suya la idea de «algunos analistas» e insistió en que «aquí no se puede hablar de traición a los indígenas y coroneles sino de engaño estratégico» (*El Comercio*, enero 23, 2000). Más que estrategia, la estratagema reprodujo la fatalidad de quien se enfrenta al poder sin tener condiciones para sustituirlo.

Consumado el destino del débil, la élite victoriosa volvió realidad la previsión literaria: «Dahlamn se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran».²¹

Sin embargo, el Estado moderno no necesita castigar a través de la muerte, prefiere vigilar a través de la vida, solo se excluye a los culpables para controlar mejor al resto. La democrática cacería se había iniciado, «El que la hace, debe pagarla», tituló *Hoy* su análisis del 2 de febrero, exigiendo castigar a los rebeldes.

Amalgamando sucesos de naturaleza distinta, la prensa contribuyó a estigmatizar como golpe de Estado, una rebelión popular. Funcionó la misma lógica de 1997, «nociones ideológicas convenientes tejieron un velo a la realidad. Los hacedores ocultos de todos los golpes de Estado pusieron en marcha

20. Información reproducida por «El golpe», *Vistazo*, No. 779, Guayaquil, febrero 3, 2000, p. 21.

21. Jorge Luis Borges, *Ficciones*, Buenos Aires, Editorial Oveja Negra, 1984, p. 170.

su constitucionalismo. [...] el presidente Mahuad fue el derrocado. Lo hicieron, pero se aterrorizaron con algunos movimientos y voces que utilizaron».²²

En los vencedores quedaba un sabor amargo. Es que «ese golpe, contrariamente al que sufrió Abdalá Bucaram, no salpicó únicamente al residente de Carondelet. De manera ostensible, las masas que participaron en él, señalaron a los tres poderes del Estado como ineficientes y corruptos» (*El Comercio*, febrero 6, 2000). Mientras en 1997 se aclamó a Alarcón, en 2000 Vargas «desconoció públicamente la autoridad del presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, y llamó a los agremiados en su organización a la desobediencia» (*El Telégrafo*, enero 23, 2000).

De allí, la sensación de un proceso inconcluso, alimentado por el temor del oprimido que reproduce el reportero: «Los indígenas en los exteriores del Palacio Legislativo guardaban en sus ponchos el sentimiento de la traición. ¡Nos traicionaron! ¡Fuera!, exclamó uno de ellos en tono agresivo y amenazante, aunque ya no tuvo la fuerza de otros días» (*El Universo*, enero 23, 2000).

«Pero volveremos», es la frase que quedó suspendida en el aire.

El miedo permanece latente, el regreso de los indígenas es uno de los fantasmas fundamentales del establecimiento en Ecuador. A diferencia de febrero del 97, en la rebelión de enero del 2000, la idea de la trasgresión se había hecho presente e individuos fortalecidos por su reconocimiento en el colectivo desafiaron el orden.

Por un instante, la integridad de la imagen construida desde múltiples fragmentos se había fisurado. Es la ruptura producida por quien no quiere —o no puede— indiferenciarse en el público orientado por los *mass media*; es la prerrogativa del marginal. Momentáneamente, el ojo de Panoptes perdió capacidad disuasiva y redescubrimos que «Las epopeyas populares siguen existiendo, y las astucias de la videopolítica son insuficientes para reducir las a simulacro o extraviarlas en la vorágine de espectáculos deportivos, musicales y telenovelescos».²³ Pero, solo fue un instante.

La atmósfera mediática recuperó su predominio y, como para los *mass media* todo siempre es nuevo, todo surge de repente y nada tiene pasado, la palabra volvió a gozar de la impunidad que el olvido garantiza. En la rápida rotación de novedades, se sepultó la experiencia de lo vivido y, de su huella, surgió una nueva fase de construcción del acontecimiento político: la memoria y la amnesia colectivas.

22. Este análisis, en contracorriente con la opinión dominante difundida por los media, corresponde a Alfredo Castillo, «Los afanes ya no serán los mismos», *El Telégrafo*, enero 26, 2000.

23. Néstor García-Canclini, *Consumidores y ciudadanos*, México, Grijalbo, p. 197.

CAPÍTULO IV

Y los vencedores escribieron la historia

LA INFORMACIÓN REVELADA RECONSTRUYE EL ACONTECIMIENTO

«Dar a la luz pública una versión de hechos sobre los cuales no se ha dicho la última palabra no es una tarea exenta de riesgos. Pero se trata de uno de los riesgos inherentes al oficio periodístico, no ese de reseña de hechos escuetos o de la simple recopilación de versiones, sino de ese otro de gran aliento [...] que quedará como parte sustancial de la historia ecuatoriana contemporánea». Esas frases introductorias de *21 de enero: la vorágine que acabó con Mahuad*, (El Comercio, 2000: 13) advierten del esfuerzo realizado por la prensa escrita para distanciarse del ritmo informativo impuesto por la televisión.

Junto a su antecedente, *Ecuador frente al vértigo fatal*, (El Comercio, 1997) los dos libros son la síntesis más lograda del trabajo a que se abocaron los periódicos en los días posteriores al derrocamiento de Jamil Mahuad y Abdalá Bucaram. Tras el apogeo de la información, basada en la potencia de la imagen, la prensa se desmarcó a través del «periodismo de revelación».¹

En el terreno de la recopilación, documentos y declaraciones supuestamente comprometedoras, aunque de escaso potencial gráfico, facilitaron a los periódicos retomar la iniciativa con producciones cuyo tono de verdad revelada busca legitimarse en la dicotomía entre conocimiento e ignorancia, entre quien sabe y quien desconoce.

Amplios reportajes, análisis y resúmenes fueron los hitos de una relectura de los sucesos que permitió a la prensa escrita reconquistar su especificidad. Motivo suficiente para declarar que «ir más allá de la parte visible y fragmentaria de los acontecimientos es un verdadero reto periodístico» (El Comercio, 2000: 13).

El análisis devolvió especificidad al reportaje escrito, organizó la contextualización del suceso y estableció un espacio de re-conocimiento colecti-

1. El periodismo de revelación no debe confundirse con el de investigación, según diferencia Ignacio Ramonet, *La tiranía de la comunicación*, p. 15.

vo. La información «revelada» reforzó la idea de un saber jerárquico donde lo oculto define la importancia y su publicación incorpora al lector al grupo privilegiado que tiene acceso al secreto.

En la búsqueda de esa verdad, la prensa validó fuentes usualmente despreciadas y «es que solo así –con testimonios o denuncias de gente poco recomendable– algunos países han logrado reconstituir parte de esas historias ocultas» (El Comercio, 2000: 114).

Heredera de «los dueños de la letra»,² la prensa escrita se considera depositaria de una supuesta conciencia pública y, desde allí, justifica «su tarea esencial: informar con objetividad y contextualizando, revelar las partes no evidentes de la noticia y en las que sin embargo está su meollo, como un aporte mínimo para preservar los resquicios de institucionalidad» (El Comercio, 2000: 10).

A diferencia de la noticia –en su condición de primera narración del hecho–, la recopilación construye un segundo discurso, una narración de lo narrado que supera el ámbito del acontecimiento singular. Por ello, resúmenes y reportajes tienden a privilegiar los mecanismos retóricos del discurso ilustrado produciendo modelos en los cuales el hecho se reinscribe históricamente y orienta la forma en que será reconocido e interpretado.

Noticia y análisis se aúnan en la palabra didáctica organizada por una matriz racional, fundamentada en nociones de progreso y entendimiento. Esas raíces aproximan el discurso académico a otra institución mimada por los *mass media*: la academia.

Puente entre prensa y escuela, la palabra no es solo una forma de aprender o comunicar, ante todo, es una forma de imponer. Periodistas y profesores educan, acción que la modernidad traduce como homogeneizar a la población en una comprensión única del movimiento social. El lenguaje oficial generaliza y tipifica lo diverso, conduciendo una comprensión simplificada y uniforme de lo real.

En el mundo del periodismo, el discurso que valora contribuye a crear sentido y, al hacerlo, se incorpora como un vector más del propio acontecimiento. Así, las recopilaciones antes citadas no se redujeron a una síntesis de los golpes de Estado de 1997 y 2000, constituyen nuevas realidades gestadas a partir del hecho mediático.

Allí se consagró la prensa escrita, cuando el en vivo y en directo de la transmisión televisiva había concluido.

2. Como afirma Rama, desde la fundación de la República, «los dueños de la letra» demostraron su capacidad de institucionalización. Actualmente, sus funciones siguen estando ligadas a la producción de «modelos culturales, destinados a la conformación de ideologías públicas». Ver Ángel Rama, *La ciudad letrada*, Hannover, Ediciones del Norte, 1984, p. 30.

Cumpliendo un papel protagónico en esa función, *El Comercio* resaltó la importancia de su propia acción recordando «la aceptación del público y el premio con que la Sociedad Interamericana de Prensa galardonó ese trabajo de equipo», (*El Comercio*, 2000: 14) como afirmó orgullosamente el periódico, relevando el alcance de su publicación sobre los sucesos de 1997.

Sin embargo, los arbitrios del discurso académico no siempre se logran con sobriedad. Cuando las formas de la publicidad se imponen, las pretensiones didácticas pueden verse obscurecidas por el lenguaje comercial. «Páginas de la Revuelta: El libro *¡Qué se vaya!* es muy esperado. Cómprelo el próximo miércoles», anunciaba *Hoy* pocos días después del golpe de febrero de 1997. Acto seguido, detallaba las virtudes del producto: «En 150 páginas los cronistas y columnistas de *Hoy* han elaborado un ágil informe del auge y la caída de Abdalá Bucaram Ortiz, de su gobierno y del grupo que lo acompañó en su discutible paso por el poder» (*Hoy*, 24 febrero 1997).

Pero siempre regresa al refugio que la legitimación académica ofrece. «Sus páginas armonizan crónicas de los distintos episodios del polémico bucaramato, con aspectos políticos, económicos, jurídicos de los hechos que condujeron al aparatoso final».

El despliegue informativo actúa por acumulación, elemento central en la conformación de una audiencia cautiva. Esa fue la búsqueda de *El Comercio* cuando, tras el golpe del 97, «resolvió revivir esa memoria haciendo desfilar la cascada de hechos generados por Bucaram y las reflexiones que suscitó a nivel editorial. Con Bucaram, Ecuador vivió una tragicomedia. Ahora, si quiere aprender, debe considerar que el actor principal se marchó pero que el escenario sigue igual» (*El Comercio*, 1997: 17).

La permanencia del escenario conocido potencia la naturaleza interpretativa del modelo y, desde ella, el discurso académico desarrolla tres elementos básicos: descripción, evaluación y arbitraje. El tono descriptivo define el terreno legítimo del expositor, diferenciándose del discurso estrictamente informativo. A diferencia de las condiciones impuestas por la transmisión en vivo, en el análisis el periodista ya no es testigo directo, ahora mira más allá del momento, se sitúa por sobre el hecho y lo evalúa. En medio de informaciones aparentemente contradictorias y de actores ubicados en posiciones distintas, la generalización ubica al medio sobre los actores y sus *errores*, autorizándole a dictaminar sobre lo que debió hacerse o decirse.

Finalmente, el análisis comunicacional gestó un entorno vinculante del mundo de la política y el de la vida cotidiana, incorporando al lector en un «nosotros» del cual la prensa forma parte. Después de cada golpe, la vigencia de ese colectivo fue asumida como «el reto de seguir vigilantes e imparciales, observando y criticando los errores, recogiendo y evaluando los anuncios de rectificación y también inquiriendo a la oposición alternativas» (*El Comercio*,

1997: 243). Desde una posición de superioridad, el periódico seguirá arbitrando y calificando a los protagonistas políticos y su palabra.

La comunicación de masas también toma del saber académico una pretensión excluyente que auto legitima su retórica noticiosa y analítica como discurso objetivo, validado por el diagnóstico del especialista, del técnico, del estudioso. La dicotomía entre quienes saben y los que ignoran, autoriza acciones y conocimientos. No pueden existir dos saberes distintos sobre un hecho único –afirma el periodismo liberal– y un solo saber legítimo admite solo una acción susceptible de reconocimiento social.

Quienes actúan al margen de esta concepción unificada, lo hacen por falta de conocimiento y hay que instruirlos, papel asignado a la élite intelectual. La discrepancia se reduce a carencia educativa, por ello, «¿cómo se pretende que los sindicalistas y los dirigentes sociales salgan de sus esquemas –algunos francamente maniqueos y anticuados– si los intelectuales y los universitarios no elaboran nuevos o no interactúan con los que están circulando en otros países?» (*El Comercio*, febrero 20, 1997).

LO QUE DEBE RECORDARSE (U OLVIDARSE) DE UN GOLPE DE ESTADO

Aunque tras ambos golpes de Estado todos los periódicos de difusión nacional acometieron tareas de recopilación y análisis, la continuidad lograda por las publicaciones de *El Comercio* ofrece reveladoras diferencias. Los titulares: *Ecuador frente al vértigo fatal* y *21 de enero: la vorágine que acabó con Mahuad*, dan cuenta de los criterios de selección y clasificación utilizados para cada publicación.

En 1997, «el vértigo fatal» a que se abocó el país fue originado por el gobierno roldosista, de allí que la memoria noticiosa recuperara todo 1996 y los primeros meses del 97. Abarcó la candidatura de Abdalá Bucaram, su triunfo, presidencia, caída y sucesión. El protagonismo presidencial fue el imán que condujo la evaluación del acontecimiento.

La segunda publicación se concentró en «la vorágine que acabó con Mahuad» y su recopilación se limitó a los meses de diciembre 1999 a marzo 2000. Quince meses de gobierno quedaron fuera del recuento mediático, desplazado hacia el movimiento opositor organizado en las últimas semanas del 99, el derrocamiento de Jamil Mahuad y la posesión de Gustavo Noboa.

También un enfoque distinto determinó agendas específicas para cada resumen. En conjunto, los objetivos privilegiados fueron Bucaram, los indios y los militares. El protagonismo fue entregado a los elementos ajenos al or-

den estatuido; el gobierno de Mahuad nunca ingresó en el campo de lo disruptivo, por tanto, no necesitaba ser releído.

No obstante esas diferencias, ambas recopilaciones se inscribieron en un modelo único, cuya continuidad explicitó el propio diario: «Para aproximarse a los hechos que rodearon la asonada indígena-militar, un equipo periodístico de *El Comercio* reeditó el estilo de trabajo cuya eficacia ya fue probada respecto de otro episodio político relevante como fue la caída de Abdalá Bucaram» (*El Comercio*, 2000: 13).

Cada publicación reconstruyó los acontecimientos políticos desde un espacio informativo cuya autosuficiencia tornó explícita la prerrogativa del vencedor de escribir la historia. A la legitimación de sus triunfos responde el contexto y en él se rearticulaban los hechos, supliendo el sentido político del que fueron vaciados por la espectacularización impuesta durante la transmisión del suceso.

La selección de extractos cronológicos, fotografías memorables y posiciones editoriales construyó un nuevo enunciado totalizador. Y, en tanto cada edición abarca la totalidad, el lector supondría que nada importante quedó fuera de lo publicado. Así, el modelo académico antecedió al suceso, describió el acontecimiento, insinuó causas y efectos, gestó una lógica expositiva que no necesariamente responde a la lógica de los hechos.

Ambos libros fueron anteceditos por dos series que *El Comercio* publicó en los días inmediatamente posteriores a cada golpe de Estado. Los reportajes recurrieron al periodismo de revelación y, con remembranzas de folletín, jugaron al suspenso de su propia continuidad.

Revelación y redundancia gestaron la retórica del «Especial» que circuló entre el 23 y el 28 de febrero de 2000. Seis «entregas» escalonaron la lectura de lo sucedido: «De cómo un grupo de oficiales desató la marea...», «Mahuad vio su futuro en el pizarrón del Titanic...», «Y el Mando cortó la hierba bajo los pies del Presidente», «Y se habló de estirar la ley hasta el filo de la navaja...», «Aquel 21, Jamil Mahuad rompió el libreto militar...», «De cómo Mendoza deshizo el ovillo que él mismo creó».

La búsqueda de suspenso es ostensible en los titulares y a reforzarlo apuntaron los ganchos que, al final de cada entrega, capturaban la atención del lector para el siguiente capítulo: «Mañana: Jamil Mahuad sí sabía...», «La estrategia del vacío», «La boya que no funcionó...», «El paroxismo en Carondelet...», «Cómo se desarmó el triunvirato a la madrugada del 22... El telón cae».

La oferta de revelar información inédita llegó al clímax en la última entrega, con la reproducción de «el facsímil de este Diario y el editorial que rechazaba el golpe. [que] No llegaron a salir el 22 de enero porque los hechos cambiaron» (*El Comercio*, febrero 28, 2000). El periódico supone que su pu-

blicación a posteriori es de interés ciudadano dado el grave *peligro* vivido por el país, según lo indica la titulación de la portada que no circuló: «Carlos Mendoza, Antonio Vargas y Carlos Solórzano asumieron; Mahuad no renunció. El golpe de Estado llegó a las 23:44».

La entrega discontinua, espacial y temporalmente, no impidió que el lector se forje una comprensión coherente y global. El público se incorporó paulatinamente a una relectura de la caída de Mahuad, cuyos actores, acciones y escenarios no necesariamente mantienen el mismo privilegio que en las publicaciones noticiosas del primer momento.

A casi un mes del golpe, ni uno solo de los titulares de la serie arriba citada hizo referencia directa al movimiento indígena. El protagonismo se desplazó a los militares, a la «asonada» y las diferencias internas entre oficiales. Finalmente, la rebelión popular se diluyó en triquiñuelas de «inteligencia» y «libretos militares».

De esa manera, el modelo comunicacional restituyó en la percepción social el orden que la *irracional espontaneidad* de los actores subalternos amenazara con desorganizar. El caos de las primeras noticias se encarriló gracias a la capacidad de la agenda mediática para definir los aspectos a discutirse en la escena política –incluso por sobre la agenda gubernamental–, imponiendo los temas en que el lector había de pensar, sobre qué reflexionar y qué debía quedar fuera de todo análisis.

Esta publicación por entregas de 2000 también tuvo su antecedente en 1997. Entonces la serie se llamó «La caída» y abarcó cinco capítulos que circularon entre el 15 y el 20 de febrero, apenas una semana después del derrocamiento de Abdalá Bucaram. Los titulares centraron protagonismos y temáticas: «Carondelet o cómo Bucaram entró Presidente el 4 y salió cesado el 7», «Bucaram nunca supo ni cómo se cayó...», «El pueblo a la calle, los líderes a La Recoleta», «... Y los políticos se salieron con la suya», «La sociedad no cambió para seguir igual».

La experiencia enseña. En ese primer especial, el sentido del suspenso se insinúa con la misma timidez que los pocos puntos suspensivos. El tratamiento protagónico también difirió: Bucaram enfrentado al pueblo, la acción de la cúpula política y la militar. Los análisis estratégicos se concentraron exclusivamente en la dirección partidista. Pueblo y élite unidos por la salida de un presidente supuestamente ajeno a todo lo que sucedía. Es evidente el contraste con el análisis de la caída de Mahuad, que en ningún momento se ubicó frente al pueblo y que con su conocimiento desafió las «estrategias militares».

En el 97, ganchos para el capítulo siguiente se mostraron excesivamente explícitos, eran casi un resumen de lo que vendría. «Mañana: Ni Bucaram ni su entorno vieron lo que se les venía. Los secretos de cómo la clase políti-

ca armó su salida». «Los secretos de cómo actuaron y qué calcularon los protagonistas del paro del 5 hasta la caída el 7». «Los militares propusieron un escenario: negociar. ¿Cómo y por qué Rosalía Arteaga complicó la salida?». «Las lecciones que dejó el despertar del país frente a un poder corrupto y sordo, hijo de un sistema que hizo crisis».

Su lectura ofrecía adentrarse en los laberintos de la intriga política, de la cual Abdalá Bucaram habría formado parte. Las razones del golpe, alusivas a la representación dominante, se difuminaron junto con los planteamientos de los sectores populares movilizados. Final previsible si se toma en cuenta la superioridad ofrecida por la retórica académica que afloró pocos días antes: el culpable de todo fue el pueblo que equivocó su voto y «la Nación paga el costo por haber comprado sueños mentirosos» (*El Comercio*, enero 27, 1997).

SABOR POPULAR DE UNA «CAÍDA» PRESIDENCIAL

Bucaram y Mahuad fueron derrocados en un ambiente de movilizaciones masivas, pero no es esa la memoria que los media procuraron perennizar. Las publicaciones posteriores prefirieron protagonistas dominantes previamente constituidos, instituciones reconocidas, palabras legítimas. La presencia activa de los subordinados fue condición inevitable para el éxito de cada golpe de Estado pero, en la misma medida, su límite fue reclamado para la consolidación de los nuevos gobernantes.

Aunque la presencia popular fue orientada por las cúpulas dirigentes, cuando «la situación política había rebasado la legalidad, el pueblo estaba en las calles y eso era incómodo y peligroso para el país» (*El Comercio*, febrero 16, 1997). A su desmovilización contribuyeron los *mass media*, buscando recuperar los mecanismos del consenso, siempre más eficaces que los de la represión.

La distinta naturaleza de la movilización institucionalmente conservadora de 1997 y la rebelión popular de 2000, determinó también caminos distintos en la legitimación de los gobiernos nacidos de los golpes de Estado del 6 de febrero y del 22 de enero.

Sin embargo, en ambos casos, el nodo central siguió siendo el orden, aunque no cualquier orden, solo aquel que reproduce al poder hegemónico. La irrupción marginal que atentó contra él fue signada como un *sueño* de otro orden y relegada a una particularidad ajena al discurso racional.

A semejanza de dios padre, el poder previene y castiga a los mortales que se le aproximan sin la necesaria consagración y, en una renovada Torre de

Babel, los condena a no entenderse entre sí. Tras esa huella, el objetivo central de la prensa fue mantener la violencia simbólica garante de un dominio incuestionado, meta solo realizable gracias a la permanente diferenciación de los dominados. La agenda mediática se orientó a lograr ese siempre inconcluso disgregamiento.

En una primera etapa, el pueblo fue disociado del mandatario. Abdalá Bucaram fue electo con un gran apoyo popular, más de dos millones de votos lo ungieron presidente, por tanto, más de dos millones de movilizados debían derrocarlo³ y, además, debía exigirlo explícitamente.

La recopilación de 1997 de *El Comercio* reconoce que solo en los días previos al 5 de febrero se llegó a pedir la destitución de Bucaram, «en un comienzo no era ese el espíritu del paro sino una marcha cívica en contra del paquete económico y contra actitudes arrogantes de la actual administración» (El Comercio, 1997: 243).

No obstante, para *Que se vaya: crónica del bucaramato*, (Hoy, 1997: 13) ya el 11 de enero, fecha en que el Frente Patriótico anunció el paro cívico, «sus exigencias no iban dirigidas al Gobierno, sino hacia el Congreso: destitución de Bucaram, instalación de un Gobierno interino, convocatoria a una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución, adelanto de las elecciones y derogatoria de las medidas económicas».

Gracias a esa relectura, la inscripción de los sucesos en el modelo mediático hizo tabla rasa del proceso vivido durante el mes de enero del 97. Demanda gremial, destitución presidencial e interinazgo se volvieron uno, imposibilitando al lector identificar a los actores e intereses que condujeron la movilización popular y el derrocamiento de Bucaram. Finalmente, se diluyó la responsabilidad de la élite política y se asignó a las organizaciones sociales, articuladas por el Frente Patriótico, la agencia del golpe de Estado.

A esta dinámica aportó la prolífica dramatización de eventos particulares: «La ambulancia frenó a raya frente al Hospital Eugenio Espejo, en Quito. [...] Don Eduardo se levantó del puesto de teléfono, extendió su bastón blanco y, guiado por los gritos, llegó hasta la ambulancia. Era el quinto herido que traían esa tarde del 7 de febrero de 1997. ‘Es mi hijo Lenin, ¿verdad?’ preguntó don Eduardo» (Hoy, 1997: 13).

La extremadamente oportuna presencia del reportero en el *lugar del crimen*, ofreció a la recopilación un testimonio del sacrificio de los de abajo que dejaba sin mando al presidente. Reforzando el antagonismo, el periodista recordó que, «mientras los médicos del ‘Eugenio Espejo’ luchaban por sal-

3. Causalidad más que casualidad, las cifras son casi exactas. El 7 de julio del 96, el conteo extraoficial arrojó 2 256 489 votos para el candidato triunfante (*El Telégrafo*, julio 8, 1996). El 5 de febrero, Cedatos contabilizó 2 200 000 movilizados (*Hoy*, febrero 6, 1997).

var la vida de Lenin Cabrera, Abdalá Bucaram huía del Palacio rumbo a Guayaquil» (Hoy, 1997: 18). No quedaba duda, el mandatario desmereció la lucha popular y así lo registró *Hoy* para las generaciones venideras.

Es que el modelo antecedió al derrocamiento. Como el final de Bucaram era predecible, su registro antecedió a la caída. «Desde el primer día, sabíamos que sería un régimen marcado por las palabras y los gestos. Que detrás de ellos no habría nada nuevo. Nos propusimos, entonces, registrar, sábado a sábado el modo como [...] el régimen de Abdalá Bucaram se iría quedando solo y sin credibilidad alguna» (Hoy, 1997: 28).

La presunción de conocimiento proviene de la estructura construida por la memoria de acontecimientos previos. El hecho se inscribe en modelos existentes y situaciones ya vividas, cuya repetición permite asimilar lo nuevo a partir del pasado. Así, lo conocido refuerza argumentos y conceptos familiares, alimenta estructuras y unidades temáticas, prima la continuidad.

Un gobierno que potenció el espectáculo carnavalesco debía caer también en medio de una fiesta. Que el golpe se diera justamente en los días de Carnaval constituyó algo más que una coincidencia simbólica. «‘Este es un carnavalazo’, dijo Bucaram, asumiendo que la sucesión presidencial se había producido» (*Hoy*, febrero 9, 1997).

Para garantizar la ruptura entre el presidente y sus electores, el derrocamiento de Abdalá debía saber a triunfo popular. Demanda que rebasaba el terreno de la política y que fue cubierta por experiencias que abarcaron inclusive el deporte: «es que, desde que Bucaram asumió la Presidencia, la selección de fútbol empezó a ceder en la tabla sudamericana. Y, apenas alejado del poder, Ecuador derrotaba arrolladoramente a su rival» (Hoy, 1997: 19). Así, la exitosa actuación de la selección ecuatoriana frente a Uruguay, se inscribió en la historia del golpe de Estado. Fue un sendero adecuado para que la retórica periodística absorbiese a la expresión popular, subordinándola.

La misma sensación de triunfo festivo traslució en lecturas justificativas de la *venganza popular*: «Los roldosistas fueron sacados a empujones», resaltó *El Comercio* (febrero 13, 1997). «Una mezcla de revancha y jolgorio circuló ayer por la mayoría de edificios y oficinas públicas de Guayaquil. Empleados y ex empleados destituidos en el gobierno de Abdalá Bucaram celebraban el nuevo día desmontando de las paredes los cuadros del ex presidente, rompiéndolos, pisándolos y haciendo hogueras con ellos». El diario instruye que toda huella del intruso debía ser objeto de escarnio.

Bucaram violentó las formas de la dominación y, además, lo hizo desde un espacio de altísima representación; ante ello, la acusación de traición y cobardía era insuficiente. Para esterilizar la irrupción de un marginal en la Presidencia fue necesario reducir la trasgresión simbólica a una ruptura indi-

vidual de normas y reglamentos. Así, el *statu quo* lesionado repararía la norma vulnerada, revirtiendo la trascendencia de la lesión.

Para ello, en una segunda etapa informativa, la bandera de la anticorrupción transformó un fenómeno nacido en la ruptura del dominio simbólico en un acto jurídico, susceptible de resolución desde el veredicto de locura o corrupción. Como enemigo del pueblo y la moral, Bucaram no sería más el representante de mayoritarios intereses, sino un individuo sujeto a castigo por acciones culposas.

Aunque la excitativa penal no estuvo presente en la resolución del Congreso que destituyó al mandatario, ésta cobró peso a medida que pasaba el tiempo. Marcando el ritmo del proceso, la prensa pidió explicaciones: «¿Y cómo así el ex presidente Bucaram tenía a su disposición una cantidad realmente desmesurada de fondos que los manejaba como caja chica?» La angustiada pregunta era acicateada porque «Las informaciones coinciden en que esa situación estaba dando paso a irregularidades y abusos» (*El Comercio*, marzo 12, 1997). Aunque «las informaciones» fueron novedades reveladas después del golpe, para el medio ya formaban parte de «el cuadro que tenía el público en su mente cuando salió a las calles en febrero» (*El Comercio*, marzo 21, 1997).

Desde esa lógica, la agenda mediática rearticuló sus jerarquías y la imagen del presidente-delincuente se impuso. Pero, si bien ello bastaba para separar a Bucaram de los ciudadanos honrados y ordenados de los sectores medios, dejaba pendiente su representación de los sectores populares.

Entonces, se recurrió a otro estigma. Al conocerse los resultados de la primera vuelta electoral, en mayo de 1996, el ex presidente León Febres Cordero exclamó en una entrevista televisiva que «por Bucaram solo votan los ladrones y las prostitutas». Esa declaración, tendente a diferenciar pueblo de *delincuentes*, fue recuperada como práctica gubernamental durante los meses que siguieron a la caída de Abdalá Bucaram.

La profusión de denuncias contra los funcionarios roldosistas, que caracterizó al interinazgo de Fabián Alarcón, dio paso en el gobierno de Mahuad a publicaciones cada vez más dramáticas de la crónica roja. Posteriormente, la exigencia de mayores recursos para la represión antidelinquencial y la adopción de estados de emergencia policial, se reflejaron en una creciente sensación de amenaza de los pobladores urbanos.

Finalmente, en respuesta al temor que ellos mismos contribuyeron a crear, los media urgieron consensos que abarcaron desde los gremios de la producción hasta el ciudadano cuya miseria hace suponer que nada tiene que defender. La defensa de la propiedad reivindicó el monopolio estatal del empleo de la violencia física y simbólica, incluso en sus excesos. En defensa del orden, el pueblo se reconstituyó como sujeto moral, en clara ruptura con de-

lincuentes cargados de vicios y fuente permanente de peligro. Por último, los pobres rechazaron a los marginales.

DE TU ALIADO SOLO VERÁS LO QUE TE DIFERENCIA

Al mismo tiempo que el discurso periodístico se revela como otro nivel de producción de realidades remozadas, la manera en que la información es, nuevamente, seleccionada, jerarquizada y sintetizada en resúmenes didácticos, puede generar un déficit de realidad.

La «sepultura de la energía popular»,⁴ consecuencia del triunfo golpista en febrero del 1997 no duró largo tiempo, al menos en un sector de los marginados. La politización de la organización étnica, visible el 21 de enero, anunció una nueva incursión de los subordinados en el campo de la gran política, ajeno a una *naturaleza* prescrita que lo restringe a la lucha reivindicativa y gremial. Por provenir de la frontera del Estado nacional,⁵ esa renovada agencia fue considerada un reto al orden.

Para esterilizar la nueva irrupción, los media dieron paso a una tercera etapa de disgregamiento de los dominados, en la cual el pueblo sería diferenciado de los indígenas. Un buen inicio fue la rutina matemática. La prensa aunó racismo y regionalismo en búsqueda de respuestas étnicas para la reacción política y *descubrió* que «la población indígena oscila entre 1 000 000 y 1 500 000 habitantes. Frente a una población de 13 000 000 estamos hablando aproximadamente de una octava de la población ecuatoriana»,⁶ señalaba el analista que «descartó de plano alguna responsabilidad de la Costa en torno a la histórica opresión y segregación indígena, pues –a su criterio– esta situación tiene sus orígenes en la Sierra». Una vez catalogada como mi-

4. En vísperas del paro, Abdalá Bucaram preguntaba a los movilizados: «¿Cuáles serían las consecuencias si triunfan los golpistas con supuestos gobiernos de transición nacidos de los grandes intereses de quienes han manejado 170 años el país?, ‘sería una sola, la sepultura de la energía popular’». (*El Universo*, febrero 5, 1997).
5. Su condición fronteriza se convierte en un peligro para la institucionalidad si, como afirma Ariruma Kowii, consideramos que «La plurinacionalidad no significa la creación de estados paralelos pero cuestiona el carácter uninacional del Estado ecuatoriano porque éste se fundamenta en la homogeneidad, es decir, en la pretendida existencia de una sola cultura nacional». Citado por Catherine Walsh, «La interculturalidad en el Ecuador: visión, principio y estrategia indígena para un nuevo país», *Identidades*, No. 20, Quito, IADAP, p. 138.
6. Análisis de Juan José Illingworth, publicado por *El Telégrafo*, febrero 27, 2000.

noría decreciente y exclusivamente serrana, se pudo afirmar que la lucha indígena no concierne al conjunto de la nación ecuatoriana.

A continuación, la discusión giró en torno a los límites en que debe mantenerse la organización indígena. En portada de *El Universo*, «Experto advierte peligro de una maoización: Preocupa poder indio». El temor responde a que el movimiento «poco a poco va tomando más poder y sienta a negociar al propio Presidente de la República». ⁷ Y no solo eso, «El movimiento va a llegar a que la próxima vez le pidan la renuncia a Clinton y la disolución del Fondo Monetario porque ya no se puede ir mas lejos».

La cotidiana presencia de banqueros y empresarios negociando con el «propio presidente» no conlleva extrañeza para el experto. Pero el subordinado carece de derechos para actuar en esos escenarios, ha revertido su naturaleza antes de construir las legitimidades que permitirían discutir a los indígenas con los representantes nacionales del poder o –menos aún– cuestionar la representación del imperio, ni en su presidente y tampoco en su aparato financiero.

Desde la opinión publicada se trazaron rutas sutiles que buscaban causales encubiertas para la rebelión de enero. Tras *contabilizar* a 15 mil indígenas en la toma de Quito, un medio escrito recuperó la información de que «en medios militares calculaban que movilizarlos costó unos cuatro mil millones de sucres. ¿Quién pagó? Se dice que posiblemente hubo un samaritano financiero político, dineros de fundaciones, de la misma Conaie y de sus comunidades». ⁸ Desde el espacio en *off*, el rumor entró en funcionamiento y se pensaron acciones, vínculos e intereses que, por ocultos, debían ser repudiables.

En febrero de 1997, los periódicos quiteños resaltaron una presencia en las calles superior a dos millones de personas. Si movilizar 15 000 indígenas cuesta cuatro mil millones de sucres, ¿cuál sería el costo de una congregación 15 veces mayor? Pero ningún medio hizo esa pregunta, ella no pertenece al ámbito del rumor sino al de lo impensable.

Según el saber oficial, los movimientos populares surgen del hambre o del desempleo, pero jamás deben convertirse en una lucha por el poder. Por ello, si el cambio se limita al pedido de sustitución de un gobernante –como en febrero del 97– la movilización hasta puede ser estimulada. Pero, una incursión étnica politizada que rebasaba la exigencia reivindicativa no podía ser asimilada por el establecimiento.

El 21 de enero, la Conaie formuló un objetivo transformador de la naturaleza misma del Estado ecuatoriano. El conflicto se volvió insalvable ante el germen de un contrapoder con pretensiones de sustentar una nueva hege-

7. Análisis de Diego Iturralde, publicado por *El Universo*, febrero 20, 2000.

8. Mariana Neira, «Rebeldes con causa», *Vistazo*, No. 779, Guayaquil, febrero 3, 2000, p. 22.

monía, donde la diversidad étnico-cultural sustituyese a la ideología homogeneizadora de la nación.

En esas condiciones, la «defensa de la democracia» devino escenario de diferenciación entre pueblo e indios. La prensa dio paso a la transformación de una aplaudida sucesión democrática en estigmatizada acción golpista. «Quieren sacralizar el golpe del 21, y el vergonzoso ‘triumvirato’ de tres horas echando mano a una institución democrática (consulta popular)», rechaza- ba airado *Hoy* (febrero 1, 2000).

La argumentación auspiciaba un nuevo enfrentamiento: los indígenas «estrangulan a los blanco-mestizos con la culpa histórica, en su condición de indios; desconocen los poderes estatales como ‘partido’ de izquierda radical no legalizado». Desde semejante comprensión, los sectores mestizos no deberían volver a mirarse en su raíz india.

Acto seguido, el discurso dominante recordó que la democracia es perfecta, pero solo desde su interior. Pueden haber problemas de ilegitimidad, porque el sistema no ha respondido a los más pobres, pero eso no justifica la búsqueda de caminos ajenos a la institucionalidad. El presidente Gustavo Noboa intuyó el peligro y denunció que «Ahora no se escucha a los dirigentes indígenas hablar de reivindicaciones étnicas. Quieren intervención política y yo les he dicho que vayan a las elecciones».⁹ El mandatario exige que la salida se mantenga al interior del sistema cuestionado: los marginales deben subordinarse a un proceso electoral garante de la reproducción del establecimiento político.

En ese mismo modelo se inscribieron los análisis de varios politólogos relievados por la prensa escrita: «El problema no es la lucha indígena, absolutamente legítima y necesaria; el problema es hacia qué formas políticas, hacia qué concepciones del poder, y de la misma democracia, evoluciona la dirigencia indígena».¹⁰ Más tarde, el mismo analista amplió su posición y denunció la orientación de la rebelión indígena que «no busca profundizar el espacio representativo en el marco de una visión democrática de la política. Al contrario, apunta a su clausura, a su monopolización».¹¹

Resuelta la diferenciación con los *demócratas*, la siguiente etapa sindicó a los golpistas, recuperando el viejo antagonismo civil-militar. A los ecuatorianos nos resulta extraño el protagonismo político de los indígenas, pero nos es familiar que los militares incursionen periódicamente en los espacios de la política nacional, incluida la Presidencia de la República.

9. Entrevista a *El Comercio* de Lima, reproducida por *El Comercio* de Quito, junio 10, 2000.

10. Felipe Burbano de Lara, «Solórzano, los indios y la democracia», *Hoy*, febrero 1, 2000.

11. Felipe Burbano de Lara, «Cuando todos deciden saltar al vacío», p. 11.

El *sueño* momentáneo de un poder distinto, fue leído apenas como «el desbordamiento a partir de propuestas mesiánicas desde una dirigencia indígena [...] sumadas a un voluntarismo de unos oficiales que entendieron que tenían que inclinar el fiel de la balanza y erigirse en árbitros políticos» (*El Comercio*, 2000: 10).

Esta inculpación solo podía cobrar peso por la existencia de un *salvador* no consagrado, caso de una Junta de Salvación Nacional, como la del 21 de enero, que pretendió salvar al país *a su manera*; esa manera que no había sido aprobada por los legitimadores oficiales.

Por ese resquicio, también ingresó la ruptura entre indígenas y militares. Los media propagaron una limitada aceptación de la participación indígena en la vida política «frente a un sistema en el que impera la corrupción y la marginación»; campo del que se excluye tajantemente a las Fuerzas Armadas. «Los militares, que tienen el monopolio de las armas, en cambio, no tienen la posibilidad de incursionar en ese debate en ningún país democrático», reclamaría *Hoy* (febrero 2, 2000). La dominación siempre prefirió un soldado carente de reflexión y ausente de su origen popular.

No obstante, primó la visión triunfalista: «no corrió sangre de los ecuatorianos. Las FF.AA. no se desmembraron. El territorio no se dividió. El mundo no aisló al Ecuador. La democracia no se perdió» (*El Comercio*, enero 30, 2000). Lo trascendente era garantizar la permanencia del sistema estatuido y a ello coadyuvó el discurso periodístico. «En principio es saludable que en la escena pública aparezcan nuevos actores. Pero poco ayudará si el libreto dicta como condición el desplome del escenario» (*Hoy*, febrero 1, 2000).

Es el temor que esporádicamente revive la presencia del subalterno y que permitió a *El Comercio* (febrero 13, 2000) recordar que «el 21 de enero, esas dirigencias nacionales no solo supieron que el país profundo les había señalado su fracaso, sino también su posible destino: ser reemplazados por franjas de la población hundidas en la miseria y sin mayores miramientos por la Constitución».

Por ese peligro cuya latencia reconocen los *mass media*, el protagonista-representante de los subalternos tiende a ser acallado o estigmatizado, acusado de ocultar su verdadera naturaleza. Vargas es «capaz de controlar sus emociones», además, «con su facha de obrero ha entrado a la Presidencia de la República a las reuniones con ministros, empresarios y banqueros» (*El Universo*, enero 21, 2000). Ni siquiera ha cursado una formación como dirigente, como sí lo han hecho «otros líderes de la Sierra», afirmó el periódico iniciando un nuevo momento que apunta a diferenciar a los líderes indígenas entre sí y respecto de sus bases.

Algo semejante se dirá de los militares rebeldes; revelaciones y argumentos se unieron en el proceso. El día anterior al golpe, «por poco se con-

vierte en el campanazo de los capitanes, pues Sandino Torres y César Díaz, apremiados por Antonio Vargas, le dijeron a Gutiérrez: ‘O va usted mi coronel o vamos nosotros’» (*El Comercio*, marzo 19, 2000).

Después se buscó reducir el movimiento a «una rebelión de la ‘intelectualidad’ de las FF.AA., cuyos exponentes, hasta antes de los sucesos del 21 de enero habían demostrado un acentuado respeto por el orden democrático». La ruptura se complementó con dispositivos de rechazo: «En el Batallón de Apoyo Logístico los insurrectos amenazaron a sus compañeros, e incluso, al parecer, sabían que sanciones imponer a quienes no estuvieran de acuerdo con ellos» (*Hoy*, febrero 5, 2000). Finalmente, los avatares de la amnistía profundizarían esas rupturas.

Cada diferenciación fue vitoreada por la misma prensa que la propició: pueblo contra presidente, honrados contra delincuentes, mestizos contra indígenas, civiles contra militares, indígenas de base contra líderes *dorados*¹² y generales democráticos contra coroneles golpistas. El súbdito moderno solo realiza su identidad en el aislamiento.

Toda unidad o alianza entre distintos es vetada por el Estado panóptico. Los medios de comunicación de masas se adhieren a esa lógica y la impulsan hasta el cenit. Entonces, ya no es suficiente separar al sujeto de todo reconocimiento en el colectivo, hay que fraccionar su propia individualidad.

Arribamos al reino de la esquizofrenia.¹³ En el caso de Bucaram, la locura se evidenciaba en «un rasgo contradictorio de la personalidad de Abdalá: se encaja en el populismo y vive como un hombre adinerado» (*El Comercio*, abril 30, 1996). El antecedente justifica la conclusión: «Abdalá no controló a Bucaram y, desde antes de su posesión, el uno se convirtió en el mejor enemigo del otro» (*El Comercio*, 1997: 13).

También fue razón para el segundo golpe de Estado: «era Jamil... Y se volvió Mahuad». El politólogo suplió al periodista: «Jamil era uno de Nosotros. El doctor Mahuad es uno de Ellos».¹⁴

12. A pocos meses del golpe del 2000, proliferaron las denuncias de supuestos actos de corrupción contra dirigentes indígenas y ONG vinculadas al sector. La difusión que la prensa dio a estas acusaciones se sintetizó en el nuevo estigma de *los ponchos dorados*.

13. En la narración de *El extraño caso del Dr. Kekyll y Mr. Hyde*, la creatividad literaria de Robert Louis Stevenson hace responsable a una pócima mágica de la transformación del científico honrado en peligroso criminal. Con mayor imaginación, la prensa ecuatoriana asigna este poder maléfico a la banda que reza «Mi poder en la Constitución».

14. Pedro Saad Herrería, *La caída de Mahuad*, Quito, El Conejo, 2000, p. 26.

DEFENSORES DE LA CONSTITUCIÓN ¿O GUARDIANES DEL *STATU QUO*?

Cuando un Estado se siente amenazado por enemigos externos que discuten sus facultades, declara la guerra y exige la defensa de sus súbditos; como heredero del derecho soberano de vida y muerte, considera lícito exponer sus vidas. Pero cuando la amenaza surge desde dentro, ese mismo Estado castiga al sublevado ejerciendo su potencial represivo. En ambos casos, se preserva el orden.

Una acción política colectiva desviada de la norma establecida puede llegar a cuestionar el sistema institucional. No así la infracción individualmente imputable; la moral y el derecho encauzan el conflicto protegiendo la integración social. Ubicar culpables individuales de transgresiones colectivas restituye la normalidad del sistema sancionando al inculpado.

Un argumento circular semejante transformó los derrocamientos de Bucaram y Mahuad en castigos a quienes, por no renunciar, *obligaron* a la ruptura constitucional. En 1997, *El Comercio* señaló la responsabilidad culpable de Bucaram y los suyos por exceder «la capacidad de sorpresa y de aguante del país. Y solo ellos son responsables de haber suscitado, el 5 de febrero, un hecho político de tal magnitud que desbordó los marcos jurídicos constitucionales» (*El Comercio*, febrero 20, 1997).

En el 2000, «La ruptura tantas veces temida, se dio ayer en el Ecuador. Ruptura de la institucionalidad y del sistema democrático» (*El Comercio*, enero 22, 2000). También en esta ocasión, por el empecinamiento del presidente «La salida se reveló inviable. La decisión de Mahuad de no renunciar forzó algunos hechos».

Mahuad era culpable, la prensa así lo sentenció. Pero no por haber expropiado los ahorros de los ecuatorianos o por haber suprimido la soberanía monetaria, ni siquiera por entregar el territorio a fuerzas militares extranjeras. Fue culpable por no responder a la exigencia que un año antes le hiciera el mismo medio: «firmar un nuevo contrato con la nación que debe quedar reafirmado por ese acuerdo nacional que le pidieron los participantes a Cusín y que este Diario, como otras instituciones, preconiza desde hace años» (*El Comercio*, febrero 3, 1999).

Mahuad, como en su momento Bucaram, fueron reos de sordera ante la palabra de los media. Es que la gran prensa es una institución y se vanagloria de serlo, allí reside su derecho a conducir una lectura particular de los hechos y a incidir en ellos. En 1997, *El Comercio* recalca: «Este Diario, con el respaldo de sus 91 años de vida y de su independencia y con su anhelo de

seguir contribuyendo al progreso nacional y a la superación de los problemas, ha procurado dar su aporte» (El Comercio, 1997: 249).

Ese razonamiento también volvió inadmisibile la distancia adoptada por el gobierno roldosista frente a los media. «Allí se escondía una tesis que, más tarde, se evidenció en todas las esferas del Estado; el desconocimiento total por los mediadores sociales. El pueblo no necesitaba a otros representantes por fuera de Bucaram y sus amigos», (El Comercio, 1997: 14) denunciaba el periódico, consolidando ante el lector su posición de mediador reconocido entre Estado y ciudadanos.

Pueblo y presidente no deben relacionarse directamente, esa es una prerrogativa de los *mass media* que añade a la interfaz periodística una condición de mediación política.

El argumento también sustentó el reclamo diferenciador que la prensa dirigió a la pantalla chica, acusándola de haberse dejado utilizar por Abdalá Bucaram «para cortocircuitar a los intermediarios entre él y la nación. Se puso en escena a diario y la mayoría de noticieros se lo agradecieron. En ese sentido, la TV le rindió un homenaje al *rating* y un magro servicio a la comunidad» (El Comercio, 1997: 16). Queda claro que la «comunidad» perjudicada por la liviandad televisiva eran los «intermediarios cortocircuitados», es decir, la prensa escrita autora de la exigencia.

La *libertad de prensa* se alimenta en la utopía de la responsabilidad, comprendida como equilibrio entre intereses políticos y empresariales. Desde allí, el campo periodístico reclama autonomía respecto del de la política. En esa pretensión se inscribió el ilustrativo ejemplo de «la parodia [que] fue canción: el noticiero La Clave puso música a las noticias. 18 temas populares se ajustaron a la realidad política del país». No obstante, su conductor aseguró que «nuestra intención no fue que las canciones derroquen a un gobierno, sencillamente porque con el arte y las palabras no se hace absolutamente nada» (El Comercio, febrero 14, 1997).

Al productor radial le tomó por sorpresa constatar la incidencia de los media en la movilización y en el golpe de Estado, asombro comprensible si consideramos que ser una «institución independiente» se asume como categorización natural, incuestionada, de los medios de comunicación.

Elevar la autonomía periodística supondría diferenciarse de los campos político y económico. Pero, la institucionalización de los media y su subordinación a la normatividad establecida impone características específicas al discurso publicado.

En circunstancias consideradas *normales*, esa profunda interrelación del discurso periodístico con las demandas políticas y económicas de la élite dominante suele pasar desapercibida. Para reforzar la aquiescencia del subordinado al *statu quo* basta la retórica que remarca que una población pauperi-

zada debería ser el fin último del Estado, sujeto de necesidades y aspiraciones alcanzables desde la intervención gubernamental. Así, se asegura que los dominados sean conscientes de lo que esperan de las élites, mas no de los mecanismos que limitan esa esperanza.

Pero cuando esa *normalidad* se rompe, la «independencia» de la prensa se torna insostenible y se devela como defensora del orden. Así actuó tanto en 1997 como en 2000.

En el primer golpe, el origen del conflicto fue la marginalidad de Bucaram. Desde Carondelet se atentaba contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y en su defensa la prensa llegó –en forma estrictamente temporal– a desembozar su condición de actor político posicionado en una trinchera revestida de interés general.

Fue tan importante esa acción de los media como actores políticos directos que el ex presidente Bucaram llegó a afirmar: «El golpe de Estado no pudo darse sin ese concurso, a tal punto que podríamos definirlo como la irrupción de los grupos poderosos de los medios de comunicación colectiva en defensa de sus intereses, en el campo político, económico, social y comunicacional».¹⁵

Los objetivos en 2000 fueron similares, pero las circunstancias eran otras; el atentado contra la institucionalidad surgió de la movilización de los de abajo. Sin necesidad de llamados al orden, la autocensura vigente cohesionó a los hacedores de opinión en torno al restablecimiento de la norma.

En la memoria reconstruida queda la condena que hace leña del árbol caído, sea éste un mandatario o una carta constitucional. El régimen ecuatoriano es un sistema político «devorador de presidentes», afirmó *El Universo*, (enero 30, 2000) inscribiéndose en la noción de que «a la luz de lo que se ha venido viviendo, lo único seguro es que se debe cambiar la Constitución». (*El Comercio*, enero 30, 2000). Institución por sobre Constitución es la táctica de las élites y a ella obedecieron los mayores periódicos nacionales.

Cerrando filas ante una institucionalidad suplantadora de la constitucionalidad resquebrajada por las sucesiones presidenciales, tras el «viernes negro» de 2000 se exigió a los militares circunscribirse a su papel obediente y no deliberante, respetar las instituciones y el régimen democrático, subordinándose a la autoridad civil. Igual lógica funcionó en 1997. Entonces, enfrentando al presidente Bucaram con su ministro de Defensa, *El Comercio* (enero 24, 1997) dictaminó que «no conviene utilizar a las FF.AA. por fuera del papel que les otorgan las instituciones».

No obstante el esfuerzo por dar un aire democrático al golpe, la forma en que se concretó el derrocamiento obligó al medio a reconocer que «la sa-

15. Abdalá Bucaram, *Golpe de Estado*, p. 351.

lida de la crisis no se dio en un marco constitucional sino político». Aún así, el nodo del problema se mantuvo en la gobernabilidad: «¡Qué país! En 7 días botó un Presidente, civiles y militares forcejearon alrededor de la Constitución y los políticos confiscaron la esperanza» (*El Comercio*, febrero 19, 1997).

En enero de 2000, la agenda mediática contribuyó a la defensa del orden institucional reforzando la exigencia de «agarrar al ladrón», al tiempo que garantizaba la inocencia de los perseguidores. A ello aludió Miguel Lluco al insistir en que «son muchos los golpistas, pero los medios prefieren no mostrarlos». Lo cual tiene una razón de ser, «el nuevo gobierno entró por la puerta de atrás. Lo lógico hubiera sido que el Congreso ratifique a Mahuad si no quería ratificar el golpe de Estado de la cúpula militar y sumarse al golpe».¹⁶

Pero restituir a Mahuad nunca estuvo en la mira de la cúpula dirigente. Como lo revela *El Comercio*, (febrero 27, 2000) «En el Ministerio de Defensa, los análisis de los generales los llevaron a una conclusión: asumir el control de la situación ‘hasta alcanzar las condiciones ideales’ para la sucesión. [...] se analizó qué sucedería en ese momento si se anunciaba que asumiría el poder el Vicepresidente. Conclusión: su nombre no sería aceptado y se cerraría la salida legal».

La estrategia habría obedecido también al imperativo nacido en la Alcaldía de Guayaquil,¹⁷ lo que volvió imposible restringir la culpa a los militares. Para superar el impasse, el periódico amplió el círculo de responsables y reclamó porque «Las elites del país siguen sin saber a qué santo encomendarse. Con una perplejidad que las paraliza se dan cuenta de que el campanazo del 21 de enero –similar al sufrido cuando ganó Abdalá Bucaram– no ha producido lecciones» (*El Comercio*, enero 28, 2000).

Tras el derrocamiento de Abdalá Bucaram, el medio aceptó que «El Congreso ha hecho lo que debía hacer, rescatar su respetabilidad y convertirse en un auténtico poder del Estado» (*El Telégrafo*, febrero 7, 1997). La resolución era legítima, en tanto el Parlamento «tuvo que cumplir con el resultado del ‘plebiscito’ que se expresó en las calles» (*El Comercio*, febrero 16, 1997).

La lógica que revistió de constitucionalista el golpe de febrero de 1997 calificó como golpe a la rebelión del 21 de enero de 2000. El estigma fue el

16. Citado por Kinto Lucas, *La rebelión de los indios*, Quito, Abya-Yala, 2000, p. 181.

17. «Antes de la medianoche, Febres Cordero llamó al vicealmirante Fernando Donoso, jefe de la Primera Zona Naval, y al general Oswaldo Jarrín, Jefe de Zona Militar para decirles que ‘defiendan a Guayaquil, porque no voy a permitir el rompimiento de la democracia’. Les pidió que dijeran a sus mandos que iba a haber un ‘derramamiento de sangre si se rompía la democracia’. Y que Guayaquil se declarará independiente. Por eso hubo alivio cuando se supo que Gustavo Noboa estaba listo a posesionarse». (*El Comercio*, febrero 28, 2000).

mecanismo elegido: «Un golpe de tres horas faltaba en el catálogo de pequeñas miserias y grandes males por los que el país es conocido en el exterior» (*El Comercio*, enero 23, 2000). De esa manera, se ofreció constitucionalidad a la sucesión lograda en la madrugada del 22, al tiempo que se liberó al sucesor de todo compromiso con los intereses populares que se expresaron en la noche del 21.

Mantener la institucionalidad exige de una memoria común, pero también de una amnesia colectiva, y en ambos escenarios se legitiman los *mass media*. El discurso periodístico parece absorber toda la información posible en el horizonte de la comunicación y, sin embargo, como la acción popular demuestra, los subalternos no limitan su conocimiento a la fuente oficial.

La irrupción política del subordinado sigue siendo la del malo y «hay aspectos en el mal que tienen tal poder de contagio, tal fuerza de escándalo, que cualquier tipo de publicidad los multiplicaría al infinito. Sólo el olvido puede suprimirlos»,¹⁸ dice Foucault, precisando por qué la memoria colectiva, igual que la individual, impone una amnesia para sucesos cuyo solo recuerdo atenta contra la continuidad del dominio establecido.

En esa forma, el establecimiento se recrea a sí mismo. El suceso mediático socializado como información primaria, con el paso del tiempo, se convierte en fuente historiográfica cuya utilización debería advertir la huella del poder en su producción. El discurso que no forma parte de esa realidad ingresa en el olvido; lo que hoy no es dicho inevitablemente será sepultado, salvo en aquellos nodos de resistencia que escapan a la forma discursiva de los medios de comunicación de masas.

Lo que hoy se socializa como el único discurso posible, mañana será la única memoria disponible. Son senderos que reproducen la palabra del poder y, en ese proceso, el prestigio del lenguaje técnico, administrativo o académico hace de la distinción otro camino de sumisión.

Finalmente, al legitimar el orden institucional la prensa se institucionaliza a sí misma y devela al actor final de lo publicado: quién enfoca es el poder, del cual la gran prensa forma parte. Una vez más, se devela que el poder de los medios surge de su condición de medios del poder.¹⁹

18. Michel Foucault, *Historia de la locura en la época clásica*, México, Fondo de Cultura Económica, p. 227.

19. Ver Daniel Briguet, «El poder de los medios: los medios del poder», p. 3.

CONCLUSIONES

De informadores mediáticos a partidos del orden

TRAS VICTORIOSAS CERTEZAS...

En 1997, «todos votamos a Bucaram», no hubo golpe de Estado. En 2000, la democrática fuente ovejuna se tornó inquisitorial y «los golpistas» votaron a Mahuad, pero «los demócratas» preservaron la institucionalidad. Tampoco hubo golpe de Estado.

Son dos victorias de la «democracia» que se inscriben en el largo camino de éxitos del pueblo ecuatoriano. Venció a Bucaram, triunfó sobre indios y militares golpistas, cotidianamente derrota a la corrupción, a la delincuencia, a la subversión; la crisis económica está casi ganada, la paz internacional conquistada. Ecuador vive su destino de victoria en victoria.

¿Errores? ¿engaños? ¿mentiras? No, simplemente realidades comunicacionalmente producidas que nacieron imbricadas a los hechos y se legitimaron en la socialización de cada acontecimiento.

Aunque los *mass media* no determinaron el derrocamiento de Jamil Mahuad ni el de Abdalá Bucaram sí incidieron en ellos y, sobre todo, definieron las formas de su percepción social a las cuales hoy recurre la memoria colectiva transformándolas en verdades históricas.

Es por ello que las cartas abiertas enviadas por *El Comercio* a los presidentes Bucaram y Mahuad fueron admitidas como naturales por sus destinatarios. Que opiniones editoriales de *El Universo* fueron reproducidas por Abdalá Bucaram, en su libro, como expresiones de un sector a ser considerado. Que Jamil Mahuad recurrió a la memoria de sus exitosas conversaciones con los directores de varios medios para justificar las medidas económicas previas al «hundimiento del Titanic». Que Gustavo Noboa afirme que la economía ecuatoriana se reactiva porque así lo publicitan diariamente los principales periódicos del país.

Describir hechos, suscitar emociones, analizar sucesos y demarcar su sentido fueron funciones realizadas por la prensa en cada noticia publicada, titular resaltado, fotografía editada y editorial institucionalizado durante ambas caídas presidenciales. La retórica periodística plasmó su capacidad per-

suasiva en productos que excedieron la información y se incorporaron al proceso como nuevos factores.

Así, lo simbólico se integró a la realidad política y, además, lo hizo con una orientación predeterminada. Tanto en 1997 como en 2000, la producción periodística se orientó a preservar las formas en que movilizaciones populares y golpes de Estado debían ser re-conocidos, aquellas que demandaba la continuidad del establecimiento.

Finamente, la victoria aportó legitimidad a las sucesiones presidenciales, al tiempo que la estigmatización de los vencidos aseguró el olvido de su irrupción. En ambos casos, la marginalidad de los agentes –el presidente derrocado o la rebelión sofocada– definió su culpabilidad.

Por ello, la derrota de los subordinados pudo ser celebrada por un espectador atrapado en la euforia de la transmisión periodística. El triunfalismo precauteló la apromaticidad del *statu quo* y «el de abajo» –constreñido a la condición de público– aceptó la continuidad de la dominación como si de su propia batalla ganada se tratase.

Al reconocerse como miembro de la comunidad vencedora, volvió a someterse a la violencia simbólica que, por un instante, fuera resquebrajada por la incursión de marginales en escenarios privilegiados de la política ecuatoriana.

Repudio a indígenas y militares rebeldes. Llamados al orden y la institucionalidad. Exigencia de castigo a los insubordinados. Aclamación a los vencedores. Legitimación de los sucesores. La palabra publicada se encargó de que ningún fantasma escape a la racionalización del discurso del orden, que no exista pérdida que no sea transformable en éxito, ni conocimiento que no pueda ser recolonizado.

REMOZADA FUNCIONALIDAD PARA ANTIGUOS INTERESES

El discurso mediático es un hecho más que se agrega el mundo. Como tal, no solo forma parte de la realidad sino que posee capacidad para transformarla. Actores de pleno derecho, actualmente los periodistas son reconocidos como excepcionales testigos de cargo. Una noticia publicada, una entrevista concedida e, inclusive, un editorial reproducido, son aceptados como pruebas por la justicia ecuatoriana. Cada vez con mayor frecuencia, informar es coartada para orientar, dictaminar y exigir.

Los media han asumido funciones de acusadores, testigos, jurados y jueces. Todo ello en procesos más cercanos a la reproducción del prejuicio

—que ellos mismos contribuyen a desatar— que a la normatividad jurídica.

Una vez dictada la sentencia —basta para ello un amplio titular en un periódico de circulación nacional—, los media se encargan también de su ejecución. Entonces, vemos a expeditivos reporteros alertando a la Policía que el derrocado presidente Abdalá Bucaram viaja a Panamá; desenmascarando pretensiones electorales del dirigente indígena Antonio Vargas; estableciendo nexos ocultos entre los rebeldes y el presidente Hugo Chávez...

Pero no concluyen aquí las novedosas funciones de los comunicadores. Se ha impuesto, además, una modificación en los escenarios políticos. El plató televisivo y el consejo editorial de un periódico hoy son reconocidos como espacios naturales para exigir o negar renunciaciones presidenciales, llegar a acuerdos partidarios, firmar convenios e, inclusive, realizar conteos electorales.

Desde 1996 —año en que se dirimió la presidencia de Ecuador entre Abdalá Bucaram y el socialcristiano Jaime Nebot— más de un ganador fue proclamado en un estudio de televisión. Y, una vez gestado el clima de opinión correspondiente, los resultados oficiales debieron adaptarse a los *exit poll* televisados. Así, los media se potenciaron como supremos electores.

Algo más. Entrevistas en vivo y transmisiones en directo evidencian que la tecnología ha resuelto el problema de la ubicuidad del protagonista, pero también la de las armas. El 21 de enero de 2000, tropas, tanques y cañones acantonados a centenares de kilómetros de Quito fueron transportados a la capital en el tiempo de un discado telefónico. Transformada en soldado colectivo, la televisión proporcionó armas virtuales a los generales golpistas, contribuyendo a aislar a la rebelión popular.

Desde su origen los media han sido educadores, homogeneizadores y cohesionadores del movimiento social. Ahora, también son jueces, pesquisas, gran electores, soldados virtuales. ¿Hay alguna manifestación de violencia simbólica que escape a la acción mediática contemporánea?

No obstante, una sociedad no puede polarizar sus diferencias sin correr el riesgo de mostrarlas irreconciliables. De allí la importancia de los mediadores y, en los sucesos en estudio, los *mass media* lo fueron por partida doble.

Informar es mediar entre la realidad y su textualización. Pero, ante la amenaza creciente de irrupción de los subordinados en espacios representativos del poder, a esa primera mediación la gran prensa sumó una actoría política directa y asumió el papel de interlocutor privilegiado entre Estado y ciudadanía.

El periodismo de élite se convocó a sí mismo para actuar como el fiel de la balanza que equilibra las exigencias de «los de arriba y los de abajo», evitando que la confrontación rebasase los límites que el orden puede asimilar.

Frente a cada movimiento disruptivo, el discurso periodístico estimuló la idea de que gobernantes y subalternos deben ceder posiciones y alcanzar puntos de consenso. Retórica que presupone protagonistas en condiciones de igualdad y opaca el contexto de dominación en que se inscriben éstos y sus acciones.

Urgidos por la demanda de recuperar la normalidad resquebrajada, los media reprodujeron, reinterpretaban y relativizaron la palabra de los dirigentes políticos y sus organizaciones. Para reconstruir la anuencia del débil, la retórica periodística desmovilizó y estigmatizó la acción del subordinado. Ejerciendo una función gestora de ideologías, la mediación institucionalizada se reveló como un nuevo acto de violencia simbólica.

¿Qué necesidad tiene el poder de coartar esta palabra incapaz de ir más allá de la puesta en escena? Una vez más, el control no reside en el ocultamiento ni en lo no-dicho, basta la obsecuente reproducción del establecimiento que el periodismo realiza cotidianamente.

DE LA MEDIACIÓN A LA AGENCIA POLÍTICA

Sin embargo, este control coyuntural no basta. La movilización debe institucionalizarse, así se asegura tanto su reproducción futura como que ésta se realice solo por aquellas causas que el establecimiento demande.

Entonces, el coro mediático clama por el robustecimiento de las instituciones y su permanencia más allá de sus representantes temporales.

En este objetivo se inscribe la práctica, cada vez más frecuente, de los grandes medios de convocar a discusiones públicas para resolver el destino de país, exigir medidas políticas y económicas al gobierno, hacer llamados de atención al Congreso o reconvenir a los magistrados judiciales, tanto por sus decisiones como por su desidia.

Esos son algunos ejemplos del potencial que el periodismo ecuatoriano ha perfeccionando para producir climas de opinión, simplificar la diversidad de intereses sociales normalizando la visión de la sociedad, estimular la participación política de los subordinados cuando son liderados por la cúpula social. Aunque esta última es una retórica de efectos claramente delimitados, ya que cada estado de ánimo movilizador debe encontrar un freno que desmovilice a las masas convocadas.

En esos efectos últimos se reconocen los productos gestados por publicaciones de prensa que desconocían el derecho de Abdalá Bucaram a ejercer la Presidencia de la República, pese a haber sido constitucionalmente electo. De opiniones y editoriales que acicateaban la movilización social para derro-

car a un presidente previamente marcado como ilegítimo. De noticias y comentarios que resaltaban la necesidad de que los sectores movilizados adscribiesen a la sucesión resuelta por las élites y su Congreso, aunque ésta fuese de cuestionable legalidad.

El proceso se reeditó en 1999-2000. Luego de unirse a Jamil Mahuad como exitoso representante del poder, la prensa debió incorporarse al cuestionamiento a su mandato y, finalmente, a la deconstrucción de su imagen. Construido el clima de opinión que pedía la renuncia del presidente se abrió un limitado espacio para la movilización social que catalizó el derrocamiento. Por último, amedrentada por las dimensiones que adquirió la rebelión popular, clamó por la acción institucional que mantuviese el orden. Una vez más, restó importancia a la dudosa constitucionalidad de las formas que revistió la sucesión.

Deconstrucción de la representación, estímulo a la movilización, invocación a su institucionalidad, legitimación de la sucesión. En esa múltiple funcionalidad se concreta el paso dado por los media, de «independientes transmisores» de la realidad social a actores directos capaces de cumplir con algunas actividades consideradas específicas de un partido político del orden.

A su vez, el sistema partidario se reconoció en esa dinámica y terminó admitiendo a los comunicadores como moderadores de la participación de masas, a la vez que canalizadores de la socialización de los intereses de la cúpula dominante. Esa mutua aceptación entre protagonistas oficiales y periodistas de élite consolidó el discurso del orden.

El establecimiento reclama de los media contribuir a la llamada gobernabilidad y, al hacerlo, eleva el papel de los comunicadores como pilares del *statu quo*. En ese sentido, el rol de la prensa no difiere mucho del que cumple la Función Judicial o las Fuerzas Armadas. Como colectivo, ni periodistas ni jueces ni militares pueden representar un interés distinto al dominante, a menos que antes se haya configurado una posición con fuerza suficiente para cuestionar la hegemonía imperante.

No obstante, allí se advierte un límite proveniente de la propia naturaleza de los *mass media*. Anhelan la institucionalización de las masas a quienes ellos contribuyen a movilizar, pero no pueden rebasar el escenario de la retórica. Por sí solos, no son continente para la incorporación organizada de sectores sociales, pero además, al suplantar a los partidos políticos contribuyen a socavar al sistema partidario en su conjunto. Con ello, terminan obstaculizando el proceso de institucionalización que ambas instancias promueven. Es que nadie comparte una naturaleza cualificante sin perder su identidad específica.

MAS ALLÁ DE LA MEDIACIÓN INSTITUCIONALIZADA

Momentos excepcionales para la comunicación de masas, tanto en febrero de 1997 como en enero de 2000, los comunicadores de oficio se encargaron de que la verdad estatuida no fuera cuestionada.

Toda sospecha que cuestionase al establecimiento debía ser vencida. Y así se lo hizo. Quienes se atrevieron a dudar fueron enterrados entre las filas de los derrotados y la certeza triunfante legitimó, una vez más, a los vencedores. Anulado el espacio de la duda, la verdad victoriosa se mantuvo única e inmutable.

Sin embargo, la verdad mediatizada no llegó a suprimir la presencia de lo real. Es que todo sendero puede recorrerse en un doble sentido, como se construye también puede deconstruirse. Por tanto, si la información es un espacio de producción y reproducción del poder, también puede serlo de deconstrucción.

Ello puede explicar hechos que demuestran que la dinámica social es más fuerte que la mediación dominante y que la fuerza de los *mass media* es insuficiente para homogeneizar las formas de recepción de la información y su creciente diferenciación.

Es que el público no suprime al pueblo. Por eso, en el acontecimiento mediático, junto a la huella del poder puede presentirse aquello que se niega a reproducir la opinión que de él emana. En esa diversidad resurgen zonas de resistencia donde la marginalidad reconquista un espacio para una nueva (i)legitimidad en construcción.

Escenarios con agencia creciente, las formas de comunicación que se reproducen al margen de los *mass media* podrían dar cuenta de procesos políticos que rebasan la mediación institucionalizada.¹

Como lo demostró la rebelión del 21 de enero y también el triunfo electoral de Abdalá Bucaram, la utopía en que se anticipa la irrupción del marginal no tiene capacidad de realización. No obstante, aunque ese interés carece de condiciones para disputar su visibilidad, fue capaz de infiltrarse en lo dicho, abriendo intersticios, fisurándolo, exhibiendo sus contradicciones. Preludió lo impensable desde lo imaginable: el caos, la violencia, el des-orden. La

1. Estos procesos parecen confirmar la hipótesis de Baudrillard: «Las masas despolitizadas no estarían más acá sino más allá de lo político. Lo privado, lo innumerable, lo cotidiano, lo insignificante, las pequeñas trampas, las pequeñas perversiones, etc., no estarían más acá sino más allá de la representación». Ver Jean Baudrillard, *Cultura y simulacro*, Barcelona, Editorial Kairos, 1993, p. 145.

incurción de los subordinados prefiguró la liberación de los cuerpos dominados, inclusive a costa de la destrucción de las almas que los aprisionan.

Un marginal en la Presidencia de la República o indígenas exigiendo la conducción del Estado son actos disruptivos en los cuales el asalto del borde a los espacios centrales tornó corpórea la puesta en escena del discurso oficial. Por breves instantes, lo impensable marcó el límite de lo visible. Todavía insurge como imagen ausente, no es lo que falta a lo dicho, tampoco lo complementa, perfecciona o da nueva vida, pero sí descubre su finitud, su naturaleza mortal. El Otro supera deconstruyendo. No precisa de mediadores ni de consensos. No inclina el platillo en el otro sentido, suprime la balanza. Aigura la formación de un orden nuevo.

Asegura Foucault que una condición necesaria para proteger al pensamiento de los efectos unificadores de la palabra dominante es restituir al discurso su carácter de acontecimiento, poniendo en duda la voluntad de verdad.² El intelectual debe navegar contra corriente para arribar a lo que el pueblo realiza desde otra lógica cognitiva. Por que, aunque el sistema de poder ha distanciado, negándolo, ese discurso y ese saber, máscaras y simulaciones siguen auspiciando la reconstitución de identidades subalternas.

Pese a la inmensa capacidad desplegada por los media para unificar la comprensión social en los modelos que el orden requiere, la sospecha persiste y la resistencia despliega formas particulares de comunicación.

¿Por qué ganó Abdalá Bucaram, pese a la abierta oposición de los *mass media*? ¿Por qué Jamil Mahuad, candidato ungido por la gran mayoría de medios, tuvo que imponer su Presidencia desde una mayoría en los Tribunales Electorales distinta al voto mayoritario? ¿Por qué los sectores marginales cuestionaron la legitimidad de un Mahuad mediáticamente aclamado? ¿Por qué aún se impugna la continuidad de la política económica e internacional del gobierno Mahuad-Noboa?

O, desde la generalidad de la teoría de la comunicación: ¿Qué lógicas de recepción inmunizan a los de abajo frente a la información distribuida industrialmente por los media? ¿De qué manera la diversidad se reproduce a pesar del dominio homogeneizador? ¿Cómo sobreviven entre los subordinados formas de comunicación que responden a una lógica de resistencia? ¿Por qué los *mass media* no logran garantizar a la hegemonía en el poder la absorción de los bordes sociales?

Desde esta investigación quedan sin respuesta esas y muchas otras interrogantes. No obstante, reconocemos que solo en esos nodos «el murmullo

2. Michel Foucault, *El orden del discurso*, Barcelona, Túsquets Editores, 1980, pp. 42-43.

no es el vaciamiento del sentido, sino que es una medida contra el terrorismo codificado de éste».³

Es el mundo de la sospecha, refugio de contrapoderes que aún anidan en lo indecible, pero que son capaces de reproducir la diferencia en la subordinación y presagiar nuevas irrupciones de actores marginales en los escenarios consagrados por el poder.

Para entonces, lo indecible habrá cobrado voz y, al hacerlo, no solo habrá desnudado la naturaleza del poder que hoy conduce a las instituciones mediáticas, sino también la del estatuto de verdad desde el cual se socializa la realidad.

3. Paolo Fabbri, *Tácticas de los signos*, Barcelona, Gedisa, 1995, p. 234.

Bibliografía

- Abril, Gonzalo. *Teoría general de la información: datos, relatos y ritos*, Madrid, Cátedra, 1997.
- Alsina, Miguel Rodrigo. *La construcción de la noticia*, Barcelona, Paidós, 1989.
- Bajtín, Mijail. *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento*, México, Alianza Editorial, 1993.
- Barthes, Roland. *La aventura semiológica*, Barcelona, Paidós Comunicación, 1993.
- Baudrillard, Jean. *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairos, 1993.
- — — *El crimen perfecto*, Barcelona, Anagrama, 1996.
- Bourdieu, Pierre. *El sentido práctico*, Madrid, Taurus Humanidades, 1991.
- — — *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus Humanidades, 1991.
- — — *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*, Madrid, Anagrama, 1995.
- — — *Sobre la televisión*, Barcelona, Anagrama, 1996.
- Briguet, Daniel. «El poder de los medios: los medios del poder», *Anuario*, Rosario, Dpto. de Ciencias de la Comunicación Social, UNR, 1998.
- Bucaram, Abdalá. *Golpe de Estado*, Ecuador, Predicciones, 1998.
- Cervantes, Cecilia. «Construcción primaria del acontecer y planeación de la cobertura informativa», *Comunicación y sociedad*, No. 28, Guadalajara, DECS, 1996.
- Echeverría, Julio. *La democracia bloqueada*, Quito, Letras, 1997.
- El Comercio. *Ecuador frente al vértigo fatal*, Quito, El Comercio, 1997.
- — — *21 de enero: la vorágine que acabó con Mahuad*, Quito, El Comercio, 2000.
- Fabbri, Paolo. *Tácticas de los signos*, Barcelona, Gedisa, 1995.
- Foucault, Michel. *Microfísica del poder*, Madrid, La Piqueta, 1979.
- — — *El orden del discurso*, Barcelona, Túsquets Editores, 1980.
- — — *Vigilar y castigar*, Madrid, Siglo XXI, 1994.
- Gubern, Román. *La mirada opulenta*, Barcelona, GG Mass Media, 1987.
- Habermas, Jürgen. *Historia y crítica de la opinión pública*, México, REI, 1989.
- — — *Teoría de la acción comunicativa*, México, REI, 1993.
- Hoy. *¡Qué se vaya!: crónica del bucaramoto*, Quito, Edimpres, 1997.
- Jensen, K.B.; Jankowski, N.W. *Metodologías cualitativas de investigación en comunicación de masas*, Barcelona, Bosch Comunicación, 1991.
- Lozano, Jorge; Peña-Marín, Cristina; Abril, Gonzalo. *Análisis del discurso: hacia una semiótica de la interacción textual*, Madrid, Cátedra, 1989.
- Lucas, Kinto. *La rebelión de los indios*, Quito, Abya-Yala, 2000.

- Martín-Barbero, Jesús. *De los medios a las mediaciones*, México, GG Mass Media, 1991.
- — — «Comunicación y ciudad: entre medios y miedos», *Boletín ILLA*, No. 11, Bogotá, Centro de Educación y Comunicación, febrero 1992.
- — — *Televisión y melodrama*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1992.
- Moreno Sardá, Amparo. *La mirada informativa*, Barcelona, Bosch Comunicación, 1998.
- Noëlle-Neumann, Elisabeth. *La espiral del silencio: opinión pública nuestra piel social*, Buenos Aires, Paidós, 1995.
- Ramonet, Ignacio. *La tiranía de la comunicación*, Madrid, Edición Debate, 1998.
- Saad Herrería, Pedro. *La caída de Abdalá*, Quito, El Conejo, 1997.
- — — *La caída de Mahuad*, Quito, El Conejo, 2000.
- Sánchez-Parga, José. «Los mass media contra la opinión pública», *Ecuador Debate* 46. *Opinión Pública*, Quito, CAAP, 1999.
- Sartori, Giovanni. *Homo videns: la sociedad teledirigida*, Madrid, Taurus, 1998.
- Tuchman, G. *La producción de la noticia*, Barcelona, GG Mass Media, 1983.
- Van Dijk, Teun A. *La noticia como discurso: comprensión. estructura y producción de la información*, Barcelona, Paidós, 1990.
- Verón, Eliseo. *Lenguaje y comunicación social*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1971.
- — — *La semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad*, Barcelona, Gedisa, 1993.
- — — *Construir el acontecimiento*, Barcelona, Gedisa, 1995.
- — — *Semiosis de lo ideológico y del poder*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1995.
- — — *Efectos de agenda*, Barcelona, Gedisa, 1999.
- Veyrat-Masson, Isabel; Dayan, Daniel (comps.). *Espacios públicos en imágenes*, Barcelona, Gedisa, 1997.
- Vilches, Lorenzo. *Teoría de la imagen periodística*, Barcelona, Paidós, 1993.
- Wolf, Mauro. *La investigación de la comunicación de masas: crítica y perspectivas*, Buenos Aires, Paidós, 1991.
- — — *Los efectos sociales de los media*, Barcelona, Paidós, 1994.
- Wolton, Dominique, y otros. *El nuevo espacio público*, Barcelona, Gedisa, 1995.

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica internacional autónoma. Se dedica a la enseñanza superior, la investigación y la prestación de servicios, especialmente para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos. La universidad es un centro académico destinado a fomentar el espíritu de integración dentro de la Comunidad Andina, y a promover las relaciones y la cooperación con otros países de América Latina y el mundo.

Los objetivos fundamentales de la institución son: coadyuvar al proceso de integración andina desde la perspectiva científica, académica y cultural; contribuir a la capacitación científica, técnica y profesional de recursos humanos en los países andinos; fomentar y difundir los valores culturales que expresen los ideales y las tradiciones nacionales y andina de los pueblos de la subregión; y, prestar servicios a las universidades, instituciones, gobiernos, unidades productivas y comunidad andina en general, a través de la transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales.

La universidad fue creada por el Parlamento Andino en 1985. Es un organismo del Sistema Andino de Integración. Tiene su Sede Central en Sucre, Bolivia, sedes nacionales en Quito y Caracas, y oficinas en La Paz y Bogotá.

La Universidad Andina Simón Bolívar se estableció en Ecuador en 1992. Ese año suscribió con el gobierno de la república el convenio de sede en que se reconoce su estatus de organismo académico internacional. También suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación. En 1997, mediante ley, el Congreso incorporó plenamente a la universidad al sistema de educación superior del Ecuador, lo que fue ratificado por la Constitución vigente desde 1998.

La Sede Ecuador realiza actividades, con alcance nacional y proyección internacional a la Comunidad Andina, América Latina y otros ámbitos del mundo, en el marco de áreas y programas de Letras, Estudios Culturales, Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales, Integración y Comercio, Estudios Latinoamericanos, Historia, Estudios sobre Democracia, Educación, Salud y Medicinas Tradicionales, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Gestión Pública, Dirección de Empresas, Economía y Finanzas, Estudios Interculturales, Indígenas y Afroecuatorianos.

Universidad Andina Simón Bolívar

Serie Magíster

- 1 Mónica Mancero Acosta, ECUADOR Y LA INTEGRACIÓN ANDINA, 1989-1995: el rol del Estado en la integración entre países en desarrollo
- 2 Alicia Ortega, LA CIUDAD Y SUS BIBLIOTECAS: el graffiti quiteño y la crónica costeña
- 3 Ximena Endara Osejo, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y REFORMA JURÍDICA, ECUADOR 1992-1996
- 4 Carolina Ortiz Fernández, LA LETRA Y LOS CUERPOS SUBYUGADOS: heterogeneidad, colonialidad y subalternidad en cuatro novelas latinoamericanas
- 5 César Montaña Galarza, EL ECUADOR Y LOS PROBLEMAS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
- 6 María Augusta Vintimilla, EL TIEMPO, LA MUERTE, LA MEMORIA: la poética de Efraín Jara Idrovo
- 7 Consuelo Bowen Manzur, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL COMPONENTE INTANGIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
- 8 Alexandra Astudillo Figueroa, NUEVAS APROXIMACIONES AL CUENTO ECUATORIANO DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
- 9 Rolando Marín Ibáñez, LA «UNIÓN SUDAMERICANA»: alternativa de integración regional en el contexto de la globalización
- 10 María del Carmen Porras, APROXIMACIÓN A LA INTELLECTUALIDAD LATINOAMERICANA: el caso de Ecuador y Venezuela
- 11 Armando Muyulema Calle, LA QUEMA DE ÑUCANCHIC HUASI (1994): los rostros discursivos del conflicto social en Cañar
- 12 Sofía Paredes, TRAVESÍA DE LO POPULAR EN LA CRÍTICA LITERARIA ECUATORIANA
- 13 Isabel Cristina Bermúdez, IMÁGENES Y REPRESENTACIONES DE LA MUJER EN LA GOBERNACIÓN DE POPAYÁN

- 14** Pablo Núñez Endara, RELACIONES INTERNACIONALES DEL ECUADOR EN LA FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA
- 15** Gabriela Muñoz Vélez, REGULACIONES AMBIENTALES, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y EL SECTOR EXPORTADOR
- 16** Catalina León Pesántez, HISPANOAMÉRICA Y SUS PARADOJAS EN EL IDEARIO FILOSÓFICO DE JUAN LEÓN MERA
- 17** René Lauer, LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA INTEGRACIÓN REGIONAL: estudio comparado de la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones
- 18** Florencia Campana Altuna, ESCRITURA Y PERIODISMO DE LAS MUJERES EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX
- 19** Alex Aillón Valverde, PARA LEER AL PATO DONALD DESDE LA DIFERENCIA: comunicación, desarrollo y control cultural
- 20** Marco Navas Alvear, DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA COMUNICACIÓN: una visión ciudadana
- 21** Martha Dubravcic Alaiza, COMUNICACIÓN POPULAR: del paradigma de la dominación al de las mediaciones sociales y culturales
- 22** Lucía Herrera Montero, LA CIUDAD DEL MIGRANTE: la representación de Quito en relatos de migrantes indígenas
- 23** Rafael Polo Bonilla, LOS INTELECTUALES Y LA NARRATIVA MESTIZA EN EL ECUADOR
- 24** Sergio Miguel Huarcaya, NO OS EMBRIAGUÉIS...: borrachera, identidad y conversión evangélica en Cacha, Ecuador
- 25** Ángel María Casas Grazea, EL MODELO REGIONAL ANDINO: enfoque de economía política internacional
- 26** Silvia Rey Madrid, LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA: corrupción y pisonazgo
- 27** Xavier Gómez Velasco, PATENTES DE INVENCION Y DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA
- 28** Gabriela Córdova, ANATOMÍA DE LOS GOLPES DE ESTADO: la prensa en la caída de Mahuad y Bucaram

Viernes negro, comedia bufa, pesadilla monstruosa, jornada trágica, golpismo, atentado contra la democracia. Así fue descrita por la prensa la rebelión popular que, el 21 de enero del 2000, derrocó a Jamil Mahuad y reclamó para sí la conducción del Estado ecuatoriano.

En contraste, la movilización de febrero de 1997, que anunció el fin del gobierno de Abdalá Bucaram, fue llamada revolución de las conciencias, amanecer de la dignidad, carnaval multicolor, campanada democrática, plebiscito espontáneo del pueblo...

¿A qué obedece la distinta manera con que los mass-media socializaron ambos acontecimientos? ¿Por qué una movilización popular fue aclamada en 1997 y otra semejante fue estigmatizada en el 2000? ¿Por qué los medios reaccionaron con formas opuestas ante los mandatos de Bucaram y Mahuad?

Las técnicas utilizadas por la comunicación de masas descubren en los mass-media contemporáneos a factores de formación de instancias políticas representativas, estimulan la movilización social y, al mismo tiempo, la enmarcan en la institucionalidad o en sus símbolos; todas éstas son funciones que rebasan el campo de lo periodístico y los han convertido en un importante pilar del orden imperante.

En el presente trabajo Gabriela Córdova indaga sobre la distinta y contrapuesta posición y función de los media en los golpes de Estado mencionados, para revelar al lector cómo en ambos casos, ese carácter contradictorio se justificó en la defensa del establecimiento.



Gabriela Córdova Del Alcázar (Quito, 1959) es Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Central del Ecuador; realizó un posgrado en Diseño de Investigación sobre Redes de Información en la Universidad de La Habana y se graduó como Magíster en Estudios Latinoamericanos, con mención en Comunicación, en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Ha realizado trabajos de asesoría e investigación documental, así como análisis de productos comunicacionales. «Cuando los marginales se roban el escenario», «Medios y crisis política: el caso ecuatoriano», «Elecciones 2002: derrota y triunfo del gran elector» son algunos artículos de reciente publicación de la autora.